

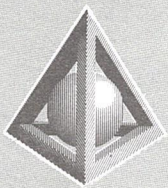
364.133

A76a

EJ I

1997

4099



ASOCIACION BANCARIA
Y DE ENTIDADES FINANCIERAS
DE COLOMBIA

ASOBANCARIA

**Las acciones
del sistema financiero
colombiano contra
el lavado de activos**

MFN: 1631

**Las acciones del sistema
financiero colombiano contra
el lavado de activos**

**The colombian financial
system's action against
asset laundering**

Junio de 1997

ASOCIACION BANCARIA
Y DE ENTIDADES FINANCIERAS
DE COLOMBIA, ASOBANCARIA

Presidente

César González Muñoz

Vicepresidente

Carlos Mario Serna

Gerente de Administración del Riesgo

Claudia María Luna

Profesional del Riesgo

Diana Angélica Pardo

Gerente de Información

María Constanza Mejía

Coordinadora de Publicaciones

María Alejandra Guerrero

© Asobancaria

Edición

Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia, Asobancaria

Cra. 9ª N° 74-08 Piso 9º Tel. 211 4811 Ext. 440

Fax: 2119915 - 2175594

Diseño e impresión

Artes gráficas Asobancaria

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro ni su
transmisión en ninguna forma o por cualquier medio, ya sea
electrónico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el
permiso previo y por escrito del editor.

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| PRESENTACION | 7 |
| PROLOGO | 9 |
| 1. ANTECEDENTES | 13 |
| 2. ACCIONES DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO | 20 |
| 2.1 Comité de Administración del Riesgo de la Asobancaria | 20 |
| 2.2 Convenio de Cooperación Conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria | 21 |
| 2.3 Cooperación interna e internacional | 23 |
| 2.4 Declaración de principios y acciones del sector financiero frente al lavado de activos | 29 |
| 2.5 Comisión de Seguimiento para los Acuerdos Interbancarios sobre Lavado de Activos | 29 |
| 2.6 Capacitación especializada en materia de lavado de activos . | 30 |
| 2.7 Unidad de Inteligencia Financiera | 33 |

| | | |
|-----|--|----|
| 3. | ACTUACION DEL SECTOR FINANCIERO FRENTE A LAS NORMAS EXISTENTES PARA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DETECCION DE OPERACIONES SOSPECHOSAS | 34 |
| 3.1 | Adopción de procedimientos tendientes a mejorar el conocimiento del cliente | 35 |
| 3.2 | Reporte de operaciones sospechosas | 35 |
| 3.3 | Reporte de transacciones en efectivo | 36 |
| 4. | ANEXOS | 39 |
| | ANEXO 1 | 41 |
| | Acuerdo sobre el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento ilícito de capitales, 21 de octubre de 1992 | |
| | ANEXO 2 | 49 |
| | Código uniforme de conducta de los miembros de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en relación con su función en la detección, prevención y represión de movimiento ilícito de capitales, 21 de octubre de 1992 | |
| | ANEXO 3 | 61 |
| | Acuerdo Interbancario | |
| | Programa de capacitación sobre el control y prevención del lavado de activos, 5 de junio de 1996 | |
| | ANEXO 4 | 71 |
| | Declaración de principios y acciones del sector financiero frente al lavado de activos, 5 de junio de 1996 | |

| | |
|---|---|
| ANEXO 5 | 77 |
| Comisión de seguimiento para los acuerdos interbancarios sobre el lavado de activos, 5 de junio de 1996 | |
| ANEXO 6 | 81 |
| Acuerdo Interbancario | |
| Conocimiento del cliente, 5 de junio de 1996 | |
| ANEXO 7 | 107 |
| Ley 333 (Capítulos I y II), 19 de diciembre de 1996 | |
| ANEXO 8 | 115 |
| Ley 365, 21 de febrero de 1997 | |
| ANEXO 9 | 133 |
| Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano | |
| – | Decreto 663 de 1993 (Artículos 102 a 107) |
| – | Circular Externa 061 de 1996, de la Superintendencia Bancaria |
| – | Circular Externa 052 de 1993, de la Superintendencia Bancaria |
| MIEMBROS DE LA ASOBANCARIA | 159 |

PRESENTACION

Fundada en noviembre de 1936 como parte del reordenamiento económico e institucional del país, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, representa al sector financiero nacional.

Está conformada por la totalidad de los bancos comerciales, nacionales y extranjeros, públicos y privados (35); todas las corporaciones de ahorro y vivienda (8), las dos terceras partes de las corporaciones financieras (16), los almacenes generales de depósito (9), cuatro sociedades fiduciarias y una sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.

La Asobancaria es una organización ciudadana que vela por el interés público y actúa como el vocero autorizado del sector financiero ante al gobierno nacional y las diferentes instancias públicas y privadas, en defensa de los intereses legítimos del sector.

En seis décadas de actividad, la Asobancaria ha ejercido una reconocida acción de liderazgo en el análisis y mejoramiento de la actividad financiera, y en el seguimiento de la política económica del país. Sus aportes en estas áreas están signados por la objetividad y el rigor analítico, lo cual se ha traducido en los niveles más altos de credibilidad para el gremio.

Su estructura organizacional, que opera con un modelo completamente descentralizado, le permite liderar una variedad de proyectos técnicos de gran impacto para el sector, así como prestar una amplia gama de servicios dirigidos no sólo a sus agremiados, sino también a otros sectores de la economía que acceden a ellos por seguridad, confianza, y como reconocimiento al saber hacer del gremio del sector financiero colombiano.

PROLOGO

En la comunidad internacional el tema del «lavado de activos» gira preponderantemente en torno de la actividad del narcotráfico; sin embargo, en Colombia es preciso reconocer su clara relevancia en otras actividades delictivas no menos dañinas.

Por esta razón, el análisis de la labor que deben desarrollar los diferentes países y agentes involucrados en el tema no puede desligarse, en modo alguno, de la estrategia mundial en materia de represión y erradicación del narcotráfico, especialmente porque este problema es de naturaleza universal.

Ello significa que la lucha contra el tráfico de narcóticos debe comprometer los esfuerzos de todos los países, y el éxito de su solución depende, en buen grado, de una estrategia mucho más enérgica de aquellas naciones donde se encuentra el consumo de drogas.

Esta situación global, obviamente, también se proyecta y tiene severas repercusiones en el tema del «lavado de activos».

Sin lugar a dudas, el papel protagónico que desempeñan las organizaciones criminales colombianas en la producción y tráfico de estupefacientes implica la asunción de una responsabilidad y de un papel decisivo del país en este asunto.

Sin embargo, en la ponderación y valoración de nuestro papel y responsabilidades, jamás puede perderse de vista que el flujo de la parte sustancial de los fondos provenientes de las actividades de narcotráfico suele tener origen y destino final en otros países.

Dos hechos son, entonces, relevantes. En primer lugar, una parte de los fondos provenientes del narcotráfico está en Colombia, pero no la gran mayoría. En segundo lugar, aun cuando una parte significativa de tales fondos puede controlarse desde Colombia ello no supone, necesariamente, ni el paso de los mismos por el país, ni la participación activa de agentes nacionales.

Por esto resulta inadmisibles señalar a Colombia y a otros países vecinos como los centros del lavado de activos y caracterizar cualquier operación con nacionales o entre nacionales colombianos como sospechosos, por la única razón de que en la misma intervengan personas o entidades de tales nacionalidades. Esta selección geográfica no es válida.

Estas sindicaciones denotan no sólo ligereza y superficialidad en el análisis del tema sino también, lo que es más grave aún, desenfocan el problema y sirven como pretexto para eludir las verdaderas responsabilidades de otros países.

Las anteriores reflexiones son necesarias para juzgar más correctamente el marco normativo dentro del cual se define el papel del sector financiero colombiano en la prevención, detección y represión de movimientos de capitales ilícitos.

El delito de lavado de activos como tal no existía en el Código Penal Colombiano, lo cual no fue óbice para reprimir los movimientos de fondos provenientes del narcotráfico. A partir de la Ley 190 de 1995 se tipificó la conducta del lavado de activos bajo la figura de la receptación. Recientemente, mediante la Ley 365 de 1997 se mejoró

este tipo penal al darle plena autonomía respecto de los delitos fuente y se creó el delito de omisión de control para asegurar el cumplimiento del deber de reporte a las entidades de las transacciones en efectivo.

La colaboración en el ocultamiento de los bienes y fondos del tráfico de drogas se reprime también a partir de figuras penales como la complicidad, la asociación para delinquir, el enriquecimiento ilícito, y de otras de tipo más procedimental.

En efecto, existen claras disposiciones de carácter penal que permiten decomisar los bienes utilizados en la producción y comercio ilícito de estupefacientes, así como los dineros y efectos provenientes de tales actividades. Igualmente, se considera como delito prestar el nombre para adquirir bienes con dineros del narcotráfico (testaferrato). Es fundamental destacar que la reserva bancaria en Colombia no se opone a las investigaciones criminales.

La ratificación por parte de nuestro país de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, más conocida como la Convención de Viena, nos plantea el punto de tipificar el lavado de activos en los términos del artículo 3 numeral 1 de la misma, y así se hizo con la citada ley.

De acuerdo con la ley colombiana, todos los ciudadanos están obligados a comunicar a las autoridades cualquier posible violación a las normas penales. Ello podría haber sido suficiente para determinar la conducta de los administradores y directores de las instituciones financieras respecto del «lavado de activos».

Sin embargo, las instituciones financieras venían desde tiempo atrás estableciendo políticas y reglas internas claras encaminadas a prevenir y detectar movimientos ilícitos de capitales. Es así como el sector financiero colombiano, consciente de su responsabilidad en este proceso, ha buscado día tras día y por iniciativa propia mejorar los mecanismos que permitan cumplir con su misión.

En la búsqueda de coadyuvar en la definición de herramientas ágiles para esta lucha, las entidades financieras han establecido como prioridad la adopción de mecanismos que faciliten los procesos y colaboración con las autoridades.

Así se llegó a una nueva etapa, representada en el convenio suscrito entre la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, al igual que en la participación de la Asobancaria como parte del cuerpo consultivo de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, creada por el gobierno nacional mediante el Decreto 950 de 1995.

Al retomar el contexto internacional de esta problemática, las instituciones financieras colombianas han promovido el establecimiento de canales de cooperación internacional, tales como la propuesta de creación de un grupo latinoamericano de trabajo contra el lavado de activos y los acercamientos con las autoridades de los gobiernos de diferentes países encargados del control en este tema.

En este libro se pretende recoger las acciones más significativas, tanto del gobierno nacional como del sistema financiero, en torno a la lucha constante contra el uso indebido de los diferentes agentes de la economía nacional en el movimiento ilícito de capitales.

1. ANTECEDENTES

El sector financiero colombiano, consciente del papel preponderante que desempeña dentro del proceso de prevención, control y represión de movimientos de capitales ilícitos, busca, día tras día, y por iniciativa propia, mejores mecanismos que permitan cumplir con esta misión, la cual fue consagrada inicialmente en el Acuerdo Interbancario aprobado por la junta directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el día 21 de octubre de 1992 (Anexo 1). Acuerdo que se concreta, dado que el conjunto de esfuerzos individuales requería un mínimo de uniformidad de las normas y procedimientos, por una parte, y un respaldo institucional, por la otra.

En términos generales, el acuerdo consiste en la adhesión a un conjunto de principios inspirados en la Convención de Viena y la Declaración de Basilea, sobre los cuales cada entidad establecería su propio código de conducta; los cuatro principios fundamentales comunes que surgen en este acuerdo son:

- Selección e identificación del cliente y conocimiento de sus actividades económicas.
- Conocimiento del cliente y de sus operaciones con la entidad financiera.
- Registro y documentación de las transacciones en efectivo.

- Colaboración con las autoridades, mediante el suministro de la información para fines investigativos y probatorios.

Este acuerdo hoy día constituyó la base del Decreto 1872 de 1992 que elevó, en esencia, a rango de norma los principios y procedimientos que habían sido objeto del acuerdo del sector financiero antes referido, y forman parte del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, Decreto 663 de 1993 (Anexo 9), en el que se establece que las entidades financieras están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes para evitar que la realización de sus actividades y operaciones pueda llegar a utilizarse como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión y aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados a dichas actividades.

En desarrollo de este deber general, a las entidades financieras se les ha impuesto la obligación de adoptar mecanismos y reglas claras de conducta para que las observen sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con miras a la consecución de los siguientes propósitos:

- a) El conocimiento adecuado de la actividad económica que desempeñan sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones que realizan corrientemente y, de manera muy especial, la actividad de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, a término o de ahorro, o entreguen bienes en fiducia o encargo fiduciario, o los depositen en cajillas de seguridad.
- b) El establecimiento de la frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de sus usuarios.
- c) La determinación de la coherencia de la actividad económica de los clientes con el volumen y movimiento de fondos de los mismos.

d) El reporte inmediato a la Fiscalía General de la Nación, o a los cuerpos especiales de policía judicial que ésta designe, de cualquier información relevante respecto del manejo de fondos cuya cuantía o características resulten incoherentes con la actividad económica de los clientes, o sobre las transacciones de los usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan llegar a conducir razonablemente a sospechar que los mismos están utilizando a la entidad financiera para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas.

En relación con este último aspecto, las entidades y sus funcionarios no pueden dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intentado realizar operaciones o transacciones señaladas al menos como inusuales la existencia de su duda, o que han comunicado a la Fiscalía General de la Nación información sobre las mismas y, además, deberán guardar reserva sobre la información.

En la fijación de la razonabilidad y suficiencia de las cuantías para el ejercicio de controles deben atenderse el tipo de negocios que realiza la entidad financiera correspondiente, la amplitud de su red, los procedimientos de selección de clientes, el mercado de sus productos, su capacidad operativa y el nivel de desarrollo tecnológico.

Por otra parte, se ha establecido la obligación de documentar adecuadamente las transacciones en efectivo.

Al efecto, se ha dispuesto que toda entidad debe dejar constancia, en formulario especialmente diseñado, de la información relativa a las transacciones que realice en moneda legal o extranjera, cuyo valor sea superior a las cuantías que periódicamente señale la Superintendencia Bancaria.

En la actualidad, la cuantía en moneda legal es de diez millones de pesos, que a la época de su fijación equivalía a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

En cuanto a operaciones en moneda extranjera, se fijó una cuantía de diez mil dólares americanos o su equivalente en otras monedas.

Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda legal como extranjera que en su conjunto superen las cuantías señaladas por la Superintendencia Bancaria, serán consideradas como una sola operación si son realizadas por una misma persona o en beneficio de ésta durante el mismo día o en cualquier otro plazo que para el efecto fije la Superintendencia Bancaria.

Cuando el giro ordinario de los negocios de un cliente suponga la realización corriente de numerosas operaciones en efectivo, la entidad financiera, previo aviso al ente de control, puede llevar un registro de las transacciones en efectivo, en lugar del diligenciamiento del formulario individual para cada operación. En dicho registro debe anotarse la misma información que en los formularios individuales, aunque a nivel agregado.

Las entidades financieras que opten por este mecanismo deben informar mensualmente a la Superintendencia Bancaria sobre las personas que sean objeto de este procedimiento.

Vale la pena mencionar que las entidades financieras deben designar funcionarios de alto nivel responsables de verificar el adecuado cumplimiento de los controles y procedimientos contra el lavado de activos, funcionario que se denominará oficial de cumplimiento.

Con el fin de posibilitar un mayor grado de uniformidad en la adopción de medidas internas, la Asobancaria propuso un código básico uniforme de conducta que sirvió a las entidades financieras, individualmente, para adoptar sus propios códigos de conducta, tal

como fue ordenado por el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). Así, todas las instituciones financieras colombianas han establecido sus códigos de conducta dentro de las condiciones señaladas por el gobierno y los lineamientos propuestos por esta Asociación. El texto del código modelo se encuentra en el Anexo 2.

El establecimiento de este conjunto de medidas se enmarcó dentro del propósito general de situar el sector a la altura de los estándares internacionales sobre la materia, particularmente los siguientes:

- La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988.
- La Recomendación del Consejo de Europa del 27 de junio de 1980 y la Declaración de Principios, adoptada en diciembre de 1988 por el Comité de Regulación y Supervisión Bancaria del Grupo de los Diez, o Comité de Basilea.
- Las recomendaciones de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas, CICAD, que pertenece a la Organización de Estados Americanos, OEA.
- Las recomendaciones de la cumbre económica mundial o Grupo de los Siete (G-7), más conocidas por la sigla FATF que corresponden a la denominación inglesa de Economic Summit Financial Action Task Force on Money Laundering (Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI).

A su vez, las instituciones financieras apoyadas por los comités técnicos creados dentro de la Asobancaria han venido desarrollando estudios y trabajos conducentes al permanente cumplimiento de lo estipulado en dichas normas y en la Ley 190 de 1995, Estatuto

Anticorrupción. Ley por la cual se establecen cambios al Código Penal Colombiano, incluyendo el delito de *receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales* (art. 31 Ley 190/95, art. 177 C.P.).

La Ley 190/95 tipificó como delito el lavado de activos a través de la figura de la receptación (ocultamiento y legalización de bienes provenientes de actividades ilegales), circunstancia que obligó a las entidades financieras a reforzar al máximo todos sus controles para evitar que sus administradores o empleados pudieran verse involucrados en investigaciones penales.

Como complemento de la anterior regulación, el 19 de diciembre de 1996 el gobierno nacional aprobó la Ley 333 que consagra la extinción del dominio para bienes provenientes de actividades ilícitas o dedicados a la comisión de delitos; también define el lavado de dinero como un delito que atenta contra la moral social. Al enriquecimiento que este delito genera se le puede aplicar la extinción del dominio, orden judicial que puede afectar bienes o dineros depositados en una entidad financiera (Anexo 7).

Adicionalmente, el 21 de febrero de 1997 el gobierno nacional aprobó la Ley 365, por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada; en ésta se tipificó el delito de lavado de activos de manera autónoma, imponiendo circunstancias de agravación específicas.

Así mismo, se creó el delito de omisión de control, específicamente referido a la omisión de reportes de transacciones en efectivo, al cual también se le establecieron circunstancias de agravación (Anexo 8).

Con los trabajos desarrollados por las instituciones financieras colombianas se ha buscado la aplicabilidad directa de todas estas reglamentaciones, mediante la utilización de mecanismos de control,

la adopción de políticas y procedimientos dentro de las entidades, y la capacitación especializada a los empleados de las instituciones financieras sobre antecedentes, responsabilidades y obligaciones, para el cumplimiento de las labores diarias de detección, prevención y represión del movimiento de capitales ilícitos a través del sector financiero.

2. ACCIONES DEL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO

2.1 Comité de Administración del Riesgo de la Asobancaria

Como respuesta a la necesidad del sector de tener un tratamiento especializado de todos sus riesgos se conformó, desde principios de 1994, el Comité de Administración del Riesgo, integrado por los vicepresidentes a cargo de esta área en las entidades del sector. El comité cuenta actualmente con once miembros, representantes de diferentes tipos de entidades, tales como: bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras.

Este comité ha trabajado activamente en la prevención y control del lavado de activos, siendo un factor primordial en la concepción del convenio suscrito con la Fiscalía General de la Nación (que se expondrá en la sección siguiente). Como parte del desarrollo de dicho convenio, el comité sostuvo periódicamente reuniones formales con el vicefiscal general de la nación, para definir y hacer seguimiento a los planes prioritarios en el corto, mediano y largo plazos. Una de estas reuniones se realizó durante el mes de diciembre de 1995, con la asistencia del fiscal general de la nación, el vicefiscal general de la nación, representantes del sector y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en la cual se especificaron las bases para el desarrollo del convenio.

En este orden de ideas, los integrantes del comité han participado activamente, brindando su orientación, en la realización de los siguientes trabajos:

- Definición del Acuerdo Interbancario sobre Conocimiento del Cliente.

- Definición del Acuerdo Interbancario de Capacitación sobre Lavado de Activos.
- Definición de la agenda de trabajo del viaje de presidentes de entidades financieras y la Asobancaria a los Estados Unidos de América, realizado en el mes de junio de 1996.
- Definición de la agenda del viaje a los Estados Unidos y agenda de trabajo de este comité, en el mes de agosto de 1996, como continuación de la política de acercamiento con gobiernos extranjeros.

2.2 Convenio de Cooperación Conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria

El lavado de dinero ha sido uno de los temas centrales que tratan la junta directiva y algunos de los comités internos de la Asobancaria. Desde abril de 1995 se empezaba a vislumbrar la necesidad de establecer un convenio de cooperación conjunta formal entre la Asobancaria y la Fiscalía General de la Nación, y ya durante el mes de mayo se empezaron a realizar los primeros acercamientos para concebir un programa de cooperación conjunta sustentado en acciones prácticas y efectivas.

El convenio fue redactado sobre unas bases prácticas que contribuyeran al logro de los resultados buscados por el gobierno en esta materia. La concepción de algunos elementos de apoyo fue consultada a los expertos del sector en cada una de las áreas para poder brindar los resultados esperados por los organismos de control del Estado. Este hecho confirma el interés real del sector para brindar soluciones que ofrezcan resultados tangibles.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, realizó reuniones con el Ministerio de Justicia y del

Derecho, la Superintendencia Bancaria y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de poder determinar de una forma más precisa la cooperación y responsabilidad del sector financiero frente a la prevención y control del lavado de activos, así como esclarecer los alcances reales que tendría el convenio, a la luz de las nuevas normas expedidas por el Congreso y el gobierno nacional (Ley 190 de 1995, Decreto 950 de 1995), identificando las siguientes bases para el desarrollo del mismo:

- Información. Desarrollo e implementación de mecanismos ágiles y confiables para el reporte de operaciones aparentemente sospechosas, direccionamiento adecuado y optimización en el manejo de dicha información.
- Apoyo a la creación de la Unidad Nacional Especial de la Fiscalía contra el Lavado de Activos. En este sentido la Asobancaria expresó todo su apoyo para la conformación y/o desarrollo de la Unidad Nacional Especial para el Control del Lavado de Activos en los aspectos relacionados con la infraestructura logística, y la utilización y desarrollo de las tecnologías más adecuadas.
- Programas de capacitación especializada para todos los empleados del sector financiero y funcionarios de la Fiscalía.

En el mes de septiembre de 1995 se firmó el Convenio de Cooperación Conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Asobancaria, el cual contó con la presencia del Ministerio de Justicia y del Derecho, de la Superintendencia Bancaria y de representantes del sector financiero. Es de resaltar el hecho de que este convenio se ha constituido en un punto de partida y de unión de esfuerzos de los sectores público y privado en la lucha contra el lavado de activos.

Además, con el propósito de concretar las acciones para desarrollar el convenio, la Asobancaria conformó un grupo de trabajo que se ha mantenido en contacto con la Fiscalía, y ha realizado, junto con la

misma, algunos trabajos preliminares mientras ésta define su estructura operativa y requerimientos logísticos y tecnológicos.

Con posterioridad a la firma del convenio se han estrechado aún más los lazos de cooperación entre las entidades financieras y la Fiscalía, sumando a este hecho la realización de convenios similares entre agremiaciones, como la Asociación de Compañías de Financiamiento Comercial, AFIC, la Asociación de Fiduciarias, la Federación de Compañías de Leasing y la Bolsa de Valores de Bogotá. La Asobancaria se propone ahora invitar al sector cooperativo financiero para sumarse a esta cruzada.

En no pocas ocasiones el señor fiscal general de la nación ha reconocido la colaboración del sector financiero en desarrollo del referido convenio, el cual se constituye en un ejemplo de lo que requiere el país.

2.3 Cooperación interna e internacional

Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos

Por medio del Decreto 950 de 1995 el gobierno nacional creó la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, e incluyó a la Asobancaria como miembro del cuerpo consultivo de la misma; en consecuencia, todas las acciones emprendidas por la Asobancaria se han enmarcado en este contexto. Esta comisión fue modificada por medio del Decreto 754 de 1996, en donde se une la Comisión Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos y la Comisión para la Lucha contra el Enriquecimiento y la Financiación de los Grupos Subversivos.

Con el fin de garantizar la coordinación y aplicabilidad en los trabajos efectuados, además de los acercamientos realizados con la Fiscalía

General de la Nación, se han llevado a cabo reuniones formales de trabajo con la Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Acuerdo de Cooperación Mutua entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América

Es importante señalar que el 27 de febrero de 1992, en el marco de la cumbre de San Antonio (Texas), el gobierno nacional firmó el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos de América para combatir, prevenir y controlar el Lavado de Dinero proveniente de Actividades Ilícitas.

El mencionado acuerdo nace de la preocupación, por los dos países, de que el lavado de activos afecta a las partes; de la necesidad de adoptar medidas estrictas y rigurosas para prevenir y eliminar el lavado de activos; de la necesidad de cooperación entre las instituciones financieras, reconociendo que las mismas deben gozar de tratamiento no discriminatorio en relación con la investigación, prevención y sanción de transacciones relacionadas con el lavado, y donde los reportes de éstas constituyen una positiva y decidida colaboración y apoyo a las autoridades en la prevención y control del lavado de activos.

Por medio de este acuerdo se define un compromiso de colaboración mutua en los siguientes puntos:

- Asegurar que las instituciones financieras de cada país registren la información sobre transacciones monetarias y la transfieran a sus respectivas entidades ejecutoras, así como la conservación de la información por un plazo no menor de cinco (5) años.
- Facilitar la mutua cooperación y asistencia que precisen los dos países para el intercambio oportuno de información.

- Ejercer su mejor esfuerzo, cada una de las partes, para la promulgación y aplicación de toda ley y regulación que se requiera para dar la cooperación y asistencia definida en el acuerdo.

Durante el mes de diciembre de 1995 se llevó a cabo una reunión promovida por el embajador de los Estados Unidos de América, con la presencia de funcionarios del Departamento del Tesoro, del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado. Una de las propuestas de este encuentro fue canalizar todas las inquietudes y solicitudes de las entidades financieras a través de la Asobancaria, la cual, a su vez, realizaría con la embajada de los Estados Unidos de América todos los contactos a que hubiese lugar para efectuar las acciones más adecuadas en torno a este tema. En este sentido la Asobancaria busca estrechar los lazos de cooperación internacional con el fin de poner en práctica mecanismos eficientes que apoyen en forma decidida la lucha mundial contra el lavado de activos.

Con el propósito de establecer canales de cooperación y de información para la prevención y el control del lavado de activos, y conocer detalladamente los procesos operativos utilizados en otros países, se están estableciendo contactos con organismos como FinCEN en Estados Unidos, Tracfin en Francia o CEPBLAC de España como prioridad de esta Asociación y sus miembros.

En junio de 1996 una comisión integrada por miembros de la junta directiva de la Asobancaria viajó a entrevistarse con los representantes del Departamento de Estado, Departamento de Justicia y las agencias OFAC y FinCEN del gobierno de los Estados Unidos de América, con el propósito de compartir en forma directa las acciones que el sector financiero ha realizado en el tema del lavado de activos.

Durante el mes de agosto del mismo año, delegados del Comité de Administración del Riesgo, junto con representantes del sector, realizaron otro viaje, esta vez de contacto técnico, para continuar con la política de acercamiento con autoridades del gobierno estadounidense,

con el objetivo principal de conocer, con el mayor detalle posible, la operación de los organismos del Estado estadounidense encargados del manejo y administración de la información relacionada con la lucha contra el lavado de activos.

Acciones con la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN

Como mecanismo de prevención se ha promovido, por intermedio de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que agrupa a las asociaciones bancarias de los países latinoamericanos, la creación de un grupo de trabajo contra el lavado de activos, similar al GAFI europeo pero a nivel privado. De esta manera se establece un foro para el constante análisis de dichos temas y para proponer a los respectivos gobiernos la adopción de medidas concretas para la acción colectiva contra el lavado de activos, y la suscripción de convenios necesarios para facilitar esta tarea.

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, aprobó la creación de un comité para realizar el trabajo propuesto, el cual está compuesto por Panamá, Brasil, Chile y Colombia; la primera sesión se realizó con motivo del Congreso Internacional sobre Prevención de Fraude, Falsificación de Documentos y Fraude Electrónico, los días 29 y 30 de agosto de 1996 en Panamá.

Es decir, no sólo internamente el sector financiero colombiano ha procurado la adopción de medidas para la prevención de actividades delictivas sino que, además, ha promovido acciones a nivel internacional, contribuyendo así a la definición de gestiones de cooperación concretas.

Como parte de este proyecto se encuentra la Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, sobre la prevención del uso indebido del sistema financiero en el

lavado de activos provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, aprobada por el comité directivo de FELABAN en su reunión del 18 de marzo de 1996 en Cartagena de Indias, Colombia, y la Declaración del Comité Latinoamericano para la prevención y control del lavado de activos del 30 de agosto de 1996 en Panamá.

En términos generales, la declaración define los principios de colaboración en cada país con las autoridades gubernamentales; el intercambio de información general, métodos y aspectos técnicos de la prevención entre asociaciones y organismos miembros de FELABAN, y propone a sus miembros que en sus entidades afiliadas se adopten políticas de prevención que incluyan aspectos tales como:

- El compromiso ético y profesional de prevenir el lavado de activos provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
- La disposición de prestar a las autoridades de control y supervisión la colaboración a su alcance para la prevención e investigación de este delito, de acuerdo con la legislación vigente en cada país.
- La determinación de programas en el ámbito interno de cada institución, que cubran por lo menos los siguientes aspectos de la prevención:
 - Aspectos legales del delito.
 - Responsabilidades profesionales y legales de los empleados y dignatarios del banco.
 - Conocimiento de los clientes.
 - Identificación de actividades sospechosas.
 - Establecimiento de programas específicos de prevención.
 - Capacitación y sensibilización del personal.
 - Orientación a los clientes.

- Establecimiento de sistemas de auditoría.
- Colaboración con las autoridades.

Todos estos esfuerzos, como se había mencionado con anterioridad, van de la mano con la política del gobierno nacional en torno a la importancia de que el tema sea tratado mancomunadamente entre países y no como estrategias individuales de cada nación o sistema financiero.

La declaración del Comité Latinoamericano, efectuada el 30 de agosto de 1996 en Panamá, desarrolla los conceptos para la elaboración de «guías» destinadas a la prevención del lavado de activos y recomienda la adopción de ciertas pautas generales de autorregulación; además, presenta con detalle diversas señales de alerta para facilitar la detección de operaciones inusuales o sospechosas por parte de las instituciones financieras y de sus empleados.

Convención Interamericana contra el Lavado de Activos

En el mes de mayo de 1996 el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó una propuesta ante la Convención Interamericana contra el Lavado de Activos, en la cual exponía la posición colombiana sobre el tema.

Durante su intervención el ministro invitó a la OEA a avanzar rápidamente en el cumplimiento del mandato recibido, con miras a una Convención Interamericana contra el Lavado de Activos. Razones como la necesidad de crear un instrumento vinculante que asegure la cumplida ejecución de la estrategia continental, la limitación del concepto al lavado de dinero, la restricción de los instrumentos a la lucha contra el lavado proveniente del narcotráfico y el excesivo énfasis en el sistema financiero fueron el centro de su discurso.

2.4 Declaración de principios y acciones del sector financiero frente al lavado de activos

De acuerdo con la recomendación de las juntas sectoriales de bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y sociedades fiduciarias, y con el propósito de insistir en la labor de autorregulación en materia de lavado de activos, la junta directiva de la Asobancaria, en su reunión del 5 de junio, aprobó la suscripción del documento «Declaración de principios y acciones del sector financiero frente al lavado de activos», por parte de las instituciones financieras colombianas, en el que se reitera la posición colectiva sectorial frente al problema y se definen patrones homogéneos de conducta.

El texto de esta declaración se encuentra en el Anexo 4.

2.5 Comisión de Seguimiento para los Acuerdos Interbancarios sobre Lavado de Activos

La junta directiva de la Asobancaria, en su reunión del 5 de junio de 1996, creó una Comisión de Seguimiento, cuya función es estudiar el comportamiento de las entidades financieras miembros de la Asobancaria frente a los acuerdos que buscan una regulación de carácter uniforme y de aplicación general, en materia de prevención, detección y represión de movimiento de capitales ilícitos. La Comisión de Seguimiento está integrada por cinco miembros de la junta directiva, que representan a cada tipo de institución afiliada a la Asobancaria; es decir, un presidente de banco, de corporación de ahorro y vivienda, de corporación financiera, de sociedad fiduciaria y de almacén general de depósito. Esta comisión presenta informes periódicos a la junta directiva.

El texto del documento aprobado por junta directiva se encuentra en el Anexo 5.

2.6 Capacitación especializada en materia de lavado de activos

El sector financiero ha realizado en cada una de las entidades, a través de la Asociación y con el concurso de la Superintendencia Bancaria, innumerables e incontables cursos de capacitación que buscan no sólo dar a conocer las normas y procedimientos, sino también concientizar al empleado del sector sobre este asunto.

Las entidades financieras colombianas y la Asobancaria han desarrollado varios programas y seminarios abiertos, con participación de expertos nacionales y extranjeros sobre el tema. Es así como en la ciudad de Bogotá, durante los días 31 de agosto y 1^o de septiembre de 1994, se llevó a cabo el International Seminar on the Detection and Prevention of the Movement of Illicit Capitals in the Banking System, realizado conjuntamente entre la Asobancaria y Bancafé.

Durante los días 17, 18 y 19 de julio de 1995 se desarrolló en Bogotá el simposio Prevención y represión del lavado de capitales ilícitos: un enfoque práctico, con la coordinación del Banco Popular. En este evento se contó con la presencia de Dominique de Wit, quien se desempeña como director general de Compromisos y de Asuntos Jurídicos de Crédite Agricole Mutuel du Calvados en Francia.

Además de los eventos mencionados, entre los planes de capacitación al sector en materia de prevención y control del lavado de activos, siguiendo las directrices del Comité de Basilea que establece como principio «la capacitación suficiente y permanente de los empleados bancarios», la junta directiva de la Asobancaria adoptó el 5 de junio el Acuerdo Interbancario Programa de Capacitación sobre Control y Prevención del Lavado de Activos en el Sistema Financiero (Anexo 3), en tal forma que las entidades financieras se comprometan a que todos sus funcionarios participen en el citado programa y estén

capacitados y actualizados en el tema. Dicho programa complementaría la capacitación dada por cada entidad.

Este programa, cuya ejecución se inició en febrero de 1997, aspira a brindar contenidos homogéneos contra el lavado de activos a aproximadamente 120.000 funcionarios del sector y 20.000 más de entidades adherentes, en un plazo de 36 meses. A la fecha se ha impartido a más de 10.000 personas.

Los principales propósitos del programa son:

- Enseñar la competencia del Estado frente al sector financiero en el tema de lavado de activos.
- Describir los aspectos legales, administrativos y operativos del lavado de activos en el entorno colombiano.
- Sensibilizar a los funcionarios de las instituciones financieras sobre su responsabilidad ante el lavado de activos.
- Dar a conocer las funciones de las distintas autoridades que hacen parte del Comité Interinstitucional contra el Lavado de Activos.
- Describir el papel de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, como miembro del cuerpo consultivo.

El contenido básico del programa de capacitación es el siguiente:

1. Concientización.
2. Aspectos conceptuales.
3. Aspectos regulatorios.

4. Aspectos penales.
5. Paraísos financieros.
6. Políticas y principios.
7. Aspectos institucionales.
8. Programa de intensificación.

Como parte del programa conjunto con la Fiscalía General de la Nación se han dictado cursos de capacitación a fiscales acerca del funcionamiento y principales tipos de operaciones del sistema financiero. Esta capacitación, de más de 60 horas de trabajo, ha sido reforzada por exposiciones específicas sobre la problemática del lavado de dinero realizadas directamente por el presidente y el vicepresidente de la Asociación, junto con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, dirigidas al sector financiero en varias ciudades del país.

Como parte del programa de capacitación al sector se organizó, en asocio con la Fiscalía General de la Nación, el Foro sobre lavado de activos, el cual contó con la participación del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Superintendencia Bancaria. A este evento, realizado el día 14 de febrero de 1996, asistieron más de 300 directivos del sector financiero, así como invitados especiales de la Fiscalía, la Superintendencia Bancaria y la embajada de Estados Unidos, entre otros.

Además, el 14 y 15 de noviembre de 1996 se celebró en Rionegro, Antioquia, el III Congreso de Administración del Riesgo, en el cual el lavado de activos fue el tema central del programa académico, desarrollado por expertos nacionales y extranjeros, principalmente de los Estados Unidos y de Europa, ante un auditorio conformado por banqueros colombianos y de varios países latinoamericanos, además de representantes del gobierno y del Estado colombiano como la

Superintendencia Bancaria, el Ministerio de la Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación.

2.7 Unidad de Inteligencia Financiera

La Asobancaria, dada su participación en el cuerpo consultivo de la Comisión Interinstitucional contra el Lavado de Activos, fue invitada a conformar el grupo de trabajo que, liderado por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Justicia y del Derecho, con la participación de la Superintendencia Bancaria y la Fiscalía General de la Nación, desarrolló una investigación para proponer el modelo de Unidad de Inteligencia Financiera que mejor respuesta dé a las características de la realidad colombiana. Se espera que durante el año 1997 el gobierno implemente este mecanismo y que, como se ha solicitado en repetidas oportunidades, su alcance sea de nivel general, esto es, que incluya todos los sectores de la economía susceptibles de ser utilizados para realizar operaciones de lavado y, además, que no imponga nuevas y excesivas cargas de trabajo al sector financiero.

3. ACTUACION DEL SECTOR FINANCIERO FRENTE A LAS NORMAS EXISTENTES PARA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DETECCION DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Las normas no establecen la obligación de detectar todas las operaciones sospechosas, sino el establecimiento de mecanismos preventivos. Estos mecanismos y procedimientos fueron adoptados por el sector financiero y remitidos oportunamente a la Superintendencia Bancaria.

Además, es pertinente recordar que las normas que exigen la adopción de códigos de conducta y procedimientos son de carácter administrativo y están orientadas a evitar que las entidades financieras sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dineros provenientes de actividades ilícitas.

Las eventuales sanciones administrativas que puede llegar a imponer la Superintendencia Bancaria por la no adopción o no aplicación de mecanismos de control (tal como se desprende del artículo 107 del Decreto 663 de 1993) no implican que la entidad sancionada sea una lavadora de activos. La frontera entre lo administrativo y lo penal en este aspecto debe tenerse muy en cuenta, y para ello es preciso que las autoridades y el público en general conozcan la interpretación y alcance de las normas en cuestión y el papel que le compete a cada uno de los actores.

Al sector financiero se le exige adoptar mecanismos de prevención, pues su obligación es de medio y no de resultado; además las entidades financieras no tienen la obligación de detectar la ilicitud de todos los dineros que se depositan en ellas.

3.1 Adopción de procedimientos tendientes a mejorar el conocimiento del cliente

Como los procedimientos para el conocimiento del cliente son uno de los aspectos fundamentales para prevenir la utilización del sector en el manejo de dineros ilícitos, el sector financiero decidió mejorarlos permanentemente.

Dado que los esfuerzos puntuales son insuficientes para afrontar un problema tan complejo y reafirmando el interés del sector financiero para adoptar mecanismos comunes y prácticos que ayuden a controlar y prevenir el lavado de activos, la Asobancaria conformó, durante el mes de diciembre de 1995, un comité especial para definir y unificar procedimientos tendientes al conocimiento de los clientes en cada uno de los tipos de operaciones (procedimientos que cada entidad habría adaptado en desarrollo del Acuerdo Interbancario de 1992); dichos procedimientos fueron adoptados como Acuerdo Interbancario el 5 de junio de 1996 (Anexo 6) y serán obligatorios a partir del 1º de septiembre de 1996. A través de este acuerdo se busca estandarizar los mecanismos utilizados por todas las entidades del sector en la ejecución de sus operaciones: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDT, fondos comunes y operaciones internacionales, entre otros.

Este acuerdo fue adoptado, casi en su totalidad, por la Superintendencia Bancaria y convertido en norma al ser expedido el 21 de octubre de 1996 como la Circular Externa 072, siendo un ejemplo claro de la actitud proactiva, de colaboración y concertación del sector financiero con las autoridades.

3.2 Reporte de operaciones sospechosas

En Colombia todos los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con la justicia e informar sobre hechos que puedan conducir a investigaciones de carácter judicial. No puede desconocerse que el número de reportes de operaciones sospechosas a la Fiscalía, por parte

del sector financiero, no fue el esperado durante los años 1992 a 1994; sin embargo, esta circunstancia tiene explicación en varias causas.

En primer lugar, al principio no existía suficiente claridad en el concepto mismo de operación inusual y sobre la forma como se deberían enviar los reportes.

En segundo término, al ser un reporte personalizado se presentaba temor en los funcionarios de las instituciones financieras.

Por otra parte, el reporte podría dar origen a procesos de responsabilidad, de no confirmarse la sospecha. Era entonces necesario modificar las normas vigentes, eximiendo de todo tipo de responsabilidad a los reportantes. Sólo con la expedición de la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) se incluyó una norma en tal sentido (art. 42 Ley 190/95). Además de lo anterior, al no existir centralización en el manejo de la información, y al exigirse que los reportes de operaciones sospechosas estuviesen firmadas por determinados funcionarios de las entidades financieras, la operatividad del reporte se tornaba complicada.

Gracias a la colaboración de la Fiscalía General de la Nación se suscribió un convenio de colaboración recíproca, en el cual se incluyó, entre otros aspectos, que los reportes se manejaran de manera centralizada en una dependencia de la Fiscalía y que los reportes fueran institucionales y no personales.

Una vez que se adoptó la norma que eximió de responsabilidad al reportante y se aceptó la interpretación de que el reporte fuese institucional, se incrementó la acción de las instituciones financieras, el volumen de reportes aumentó sustancialmente.

3.3 Reporte de transacciones en efectivo

Desde 1992, según lo definido en el Decreto 1872 (recogido en el Decreto 663 de 1993), las entidades financieras vienen entregando

información a la Superintendencia Bancaria sobre transacciones en efectivo superiores a \$7.500.000 o a US\$10.000. Esto fue modificado por la Circular Externa 061 de 1996 de la Superintendencia Bancaria, en la que se establece como cota para el reporte de transacciones en efectivo la suma de \$10.000.000 o de US\$10.000.

Posteriormente la Superintendencia Bancaria, en la Circular Externa 033 de 1997, estableció que las casas de cambio plenas y cambistas debían reportar las transacciones en efectivo superiores a US\$750 de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, y las casas de cambio especiales o fronterizas, el equivalente a US\$500 en la moneda del país vecino (montos que actualizará anualmente la Superintendencia Bancaria).

Se sabe que para dar cumplimiento a esta obligación el sector financiero ha tenido que hacer inversiones en cuantiosos y complejos desarrollos informáticos o contratar personal. En realidad, en un principio las entidades afrontaron inconvenientes de orden operativo que les impidieron, en algunos casos, remitir oportunamente la información.

El actual sistema de información de transacciones en efectivo no es adecuado, pues se presta para que las personas interesadas en distorsionar la información llenen los formularios diseñados incluyendo datos falsos o erróneos. Se han propuesto modificaciones en los procedimientos utilizando la infraestructura sistematizada del sector, solicitudes que en la actualidad están en trámite en la Superintendencia Bancaria.

4. ANEXOS

ANEXO 1

**ACUERDO SOBRE EL PAPEL DEL SISTEMA
FINANCIERO EN LA DETECCION,
PREVENCION Y REPRESION DEL
MOVIMIENTO ILICITO DE CAPITALES**

21 DE OCTUBRE DE 1992

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA
Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA,
ASOBANCARIA**

CONSIDERANDO:

- a) Que las instituciones financieras miembros pueden llegar a ser utilizadas –sin su conocimiento ni consentimiento– como intermediarias en depósitos, transacciones y transferencias de fondos originados o destinados a la ejecución de actividades criminales;
- b) Que las instituciones financieras miembros pueden desempeñar un papel de colaboración o auxilio frente a las autoridades estatales responsables de la investigación y represión de actividades criminales;
- c) Que a pesar de que el denominado internacionalmente «lavado de dinero» no es, en sí mismo considerado, un delito en la legislación colombiana, las instituciones financieras miembros pueden llegar a determinar tipos de operaciones que, por su vinculación al crimen organizado, pueden ser objeto de informaciones especiales a las autoridades;
- d) Que las instituciones financieras miembros han establecido desde hace ya algún tiempo políticas, reglas, códigos de conducta internos en orden a prevenir y detectar movimientos ilícitos de capitales;

- e) Que es indispensable cohesionar el conjunto de esfuerzos individuales de las instituciones financieras miembros, en una sola regulación de carácter uniforme y de aplicación general, en materia de prevención, detección y represión de movimientos de capitales ilícitos;
- f) Que de conformidad con el numeral 10 del artículo 29 de los estatutos de la Asociación corresponde a la junta directiva «establecer las reglas, usos y prácticas, a fin de racionalizar y estandarizar procedimientos comunes en el sector financiero»;

PROPONE LA ADHESION DE TODOS LOS MIEMBROS A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

1. Selección, identificación y conocimiento del cliente

Los miembros de la Asociación realizarán un esfuerzo razonable para seleccionar y conocer sus clientes, sean éstos habituales u ocasionales, identificarlos debidamente y tener un conocimiento de sus transacciones y actividades, en orden a establecer la coherencia entre éstas.

Para tal efecto se diseñará un formato o un conjunto de éstos específicamente elaborados para identificar y recibir una declaración sobre el origen de los recursos en las siguientes operaciones cuando éstas se realicen en dinero efectivo y excedan de siete millones de pesos (\$7.000.000.00), reajustables periódicamente por la junta directiva de la Asociación, o su equivalente en moneda extranjera:

- a) Apertura de cuentas corrientes o de ahorros
- b) Constitución de depósitos a término
- c) Realización de giros y transferencias

d) Compraventa de divisas

e) Servicios de cajillas de seguridad.

Además, se adoptarán procedimientos comunes de registro de la información de los datos personales, medios de identificación y referencias, así como la declaración que debe ser presentada para realizar la operación.

2. Conservación de la información para fines probatorios

Los miembros adoptarán los procedimientos técnicos que permitan la conservación e integridad de la información concerniente a las operaciones en dinero efectivo de más de siete millones de pesos (\$7.000.000.00), reajustables periódicamente por la junta directiva de la Asociación, o su equivalente en moneda extranjera, en orden a garantizar su eficacia para fines probatorios.

3. Colaboración con las autoridades

Los miembros de la Asociación colaborarán con las autoridades judiciales y de policía nacionales responsables de la investigación y represión de delitos mediante el suministro de la información por éstos requerida, así como de la realización de operaciones sospechosas, con base en parámetros previamente establecidos.

La colaboración con las autoridades judiciales y de policía extranjeras se hará por intermedio de las autoridades nacionales competentes, conforme a las normas internacionales pertinentes.

En los términos del artículo 15 de la Constitución Política el cumplimiento de este principio no podrá considerarse como violación a la reserva bancaria.

4. Abstención de ejecutar ciertas operaciones

Los miembros de la Asociación se abstendrán de realizar las operaciones claramente vinculadas con actividades criminales, con base en los tipos y perfiles que de las mismas elabore un comité creado para el efecto.

5. Adaptación de los códigos de conducta internos

Los miembros de la Asociación adaptarán sus códigos internos de conducta para desarrollar los principios enunciados, con base en el código que elabore la Asociación.

Para el desarrollo de los anteriores principios la junta propone los siguientes instrumentos de ejecución del acuerdo:

1. Registro centralizado de la información y la consiguiente uniformidad de la misma.
2. Determinación de los procedimientos técnicos de conservación física y electrónica de la información para fines probatorios.
3. Establecimiento de un procedimiento uniforme y claro con las autoridades.
4. Elaboración de códigos de conducta, reglamentos e instructivos guías para servir de base patrón en la adaptación de los que tienen internamente los miembros de la Asociación.
5. Convocatoria de la cooperación internacional con el fin de obtener consultoría y asesoría en:
 - a) Parámetros de auditoría y procedimientos de detección de movimientos de capital ilícito.

- b) Formación del personal.
- 6. Definición y actualización de perfiles de operaciones sospechosas, por parte de un comité especialmente creado para el efecto.
- 7. Afianzamiento de los procedimientos en relación con la selección de personal.
- 8. Promoción, ante las diversas instituciones del Estado, de la expedición de un marco legal adecuado sobre la materia.

El presente acuerdo fue aprobado en la reunión de la junta directiva del veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992) y para la adhesión al mismo por parte de los miembros se deposita en la secretaría general de la Asociación hasta el quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992).

La adhesión se producirá por la manifestación escrita de los representantes legales de los miembros.

ANEXO 2

CODIGO UNIFORME DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA, ASOBANCARIA, EN RELACION CON SU FUNCION EN LA DETECCION, PREVENCION Y REPRESION DE MOVIMIENTO ILICITO DE CAPITALES

21 DE OCTUBRE DE 1992

(LA ENTIDAD)

CONSIDERANDO:

1. Que mediante el acuerdo aprobado en la reunión de la junta directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, el 21 de octubre de 1992, se definió el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento de capitales ilícitos, dado que (la entidad) puede llegar a ser utilizada, sin su conocimiento ni consentimiento, como intermediaria en depósitos, transacciones y transferencias de fondos originados o destinados a la ejecución de actividades criminales;
2. Que de conformidad con el Decreto 1872 de noviembre 20 de 1992, las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a dichas actividades o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas,

ADHIERE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS

1. Selección e identificación del cliente y conocimiento de sus actividades económicas.
2. Conocimiento del cliente y de sus operaciones con (la entidad).
3. Colaboración con las autoridades mediante el suministro de la información para fines investigativos y probatorios.

CAPITULO I

SELECCION E IDENTIFICACION DEL CLIENTE Y CONOCIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS

(La entidad) realizará un esfuerzo para seleccionar sus clientes, tanto habituales como ocasionales, e identificarlos debidamente, así:

1. Apertura de cuentas corrientes o de ahorros

Para la apertura de cuentas deberá diligenciarse una solicitud que contenga la información mínima de identificación del cliente, tal como nombres completos, profesión, oficio u ocupación, dirección y teléfono.

Adicionalmente, y con el propósito de lograr una identificación plena del cliente, (la entidad) exigirá:

- a) Puede establecerse una cuantía mínima, respecto de la cual se cumplan los requisitos que a continuación se establecen si, por otra parte, establecido el perfil del cliente se deduce que la cuenta no tendrá movimientos significativos. (La cuantía mínima tendrá que justificarse, en función de: mercadeo de los productos, capacidad operativa y nivel de desarrollo tecnológico de la entidad).

- b) Presentación de copia de la cédula de ciudadanía o extranjería en el caso de personas naturales nacionales o extranjeras residentes, según el caso, e impresión de la huella dactilar del índice derecho.
- c) Exhibición de pasaporte e impresión de huella dactilar del índice derecho, en caso de personas naturales extranjeras no residentes.
- d) Verificación de la cédula de ciudadanía en la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria.
- e) Presentación del Número de Identificación Tributaria (NIT) y Certificado de Existencia y Representación vigente, en el caso de las personas jurídicas nacionales, y de documento análogo debidamente autenticado en el consulado respectivo para personas jurídicas extranjeras.

De todas formas, en relación con el representante legal o apoderado, tanto de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se aplicará lo previsto en los literales a) y b) para las personas naturales. En todo caso, para los efectos de representación deberá acreditarse este hecho.

- f) Diligenciamiento del formato _____, para la consignación del primer depósito, si éste equivale o excede la suma de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000), y se realiza en efectivo.
- g) Referencias personales, bancarias o comerciales.

2. Depósitos en efectivo que sean o excedan de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000)

1. Para los depósitos –en efectivo– que equivalgan o excedan de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000) se utilizará el formato _____

2. En el caso de los clientes habituales y conocidos, quienes por la naturaleza del negocio o actividad lícita, se justifique la necesidad de manejar en efectivo sumas significativas, (la entidad) y el cliente, previa autorización de _____ conciliarán mensualmente el movimiento de efectivo y diligenciarán el formato _____.

3. Constitución de depósitos a término, con efectivo en cuantía igual o superior a siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000) se utilizará el formato _____.

4. Realización de giros y transferencias

Para la realización de giros y transferencias que equivalgan o excedan de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000), y que se realicen en efectivo, se deberá utilizar el formato _____.

5. Compra y venta de divisas en efectivo

Para la compra y venta de divisas en efectivo, por diez mil dólares o más (US\$10.000) u otras divisas equivalentes a dicha cuantía, el cliente diligenciará el formato _____.

6. Encargos o contratos fiduciarios de sumas en efectivo

Para los encargos o contratos fiduciarios de sumas en efectivo que equivalgan o excedan los siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000), deberá diligenciarse el formato _____.

7. Cajillas de seguridad

(La entidad), dada la naturaleza del contrato de cajillas de seguridad, lo celebrará únicamente con clientes habituales y conocidos de los cuales se pueda deducir, claramente, la legalidad de sus negocios.

8. Depósito de mercancías

En el caso de depósito de mercancías cuyo avalúo supere la suma de _____, (la entidad) identificará a su cliente de acuerdo con los medios enunciados en el numeral 1 del capítulo 1 del presente código, en cuanto éstos le sean aplicables, y con el diligenciamiento de la matrícula de depósito, en la cual deberá dejar constancia del bien depositado y su avalúo aproximado. Si el depósito versa sobre un bien cuyo avalúo es inferior a la suma aquí expuesta, o (la entidad) presta servicios de zona aduanera, o cuando el depósito se realice como consecuencia de una operación que el cliente realice con un establecimiento de crédito, (la entidad) en cualquier momento, antes de proceder a la entrega del bien, realizará un esfuerzo de identificación mínimo contenido en la matrícula de depósito, en la cual constará, entre otros, el nombre, nit, cédula de ciudadanía, dirección, teléfono, bien depositado y profesión u oficio.

9. Otras operaciones

Para cualquier otra operación distinta a las aquí enunciadas, (la entidad) deberá lograr la identificación adecuada del cliente, de acuerdo con los requisitos mínimos enunciados en el numeral primero de este capítulo.

En el caso de las operaciones a que se refieren los numerales 2, 3, 4 y 5, el conjunto de transacciones en efectivo que sumadas equivalgan o excedan de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000) o diez mil dólares (US\$10.000), o su equivalente en otras monedas, se considerarán como una sola transacción, si son realizadas por o en beneficio de una sola persona durante un mismo día, en una o varias oficinas, y frente a las cuales sea posible efectuar su acumulación mediante la utilización de los medios

técnicos y operativos disponibles en (la entidad) para el desarrollo normal de sus actividades, de modo que resulte posible para el funcionario responsable en (la entidad) determinar si mediante la suma de los valores correspondientes a cada una de las transacciones efectuadas por o en beneficio de determinada persona se va a alcanzar o superar las sumas aquí mencionadas. En este evento debe procederse a diligenciar el formulario —.

CAPITULO II

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y DE SUS OPERACIONES CON (LA ENTIDAD)

(La entidad) con base en la identificación y selección del cliente, de acuerdo con el capítulo I del presente código, establecerá criterios generales de análisis de las operaciones realizadas con ella, a fin de determinar la coherencia de éstas con la actividad del cliente.

Para ello establecerá, como mínimo, los siguientes criterios generales de análisis:

1. Movimiento de las cuentas corrientes y de ahorro, cuyo promedio mensual sea o exceda de _____

Promedio del monto de los depósitos realizados en _____ meses, con el fin de determinar los cambios _____ [periodicidad] que lo excedan en _____ veces.

[El promedio mínimo de control del movimiento de cuentas, el período y la desviación se fijarán con base en la capacidad operativa y el desarrollo tecnológico de la entidad].

2. Operaciones con (la entidad) diferentes a las enunciadas en el numeral anterior

Como un criterio mínimo, para el análisis de las operaciones distintas a las enunciadas en el numeral anterior se tendrá en cuenta, según la naturaleza de la operación, si la misma implica un cambio sustancial, repentino e injustificado en aspectos tales como:

- a) Volúmenes de liquidez, particularmente, en efectivo frente al desarrollo normal de los negocios.
- b) Reducción de fuentes de financiamiento frente al volumen del negocio o actividad económica.
- c) Disminución de los pasivos financieros frente a fuentes no establecidas de financiamiento.
- d) Realización de exportaciones anormales, esto es, aumento excesivo de las mismas, o diferentes al giro ordinario de los negocios del cliente, o respecto de las cuales no hay demanda en el exterior.
- e) Cancelación inmediata de pasivos con (la entidad) sin justificación razonable de fuentes de ingresos.

[La aplicación de estos criterios generales de análisis podrá delimitarse a ciertas operaciones y en determinadas cuantías, en función del tipo de negocio, la capacidad operativa y el desarrollo tecnológico de la entidad].

Adicionalmente, (la entidad) realizará visitas a la sede de negocios de los clientes, según el volumen de transacciones de los mismos.

CAPITULO III

COLABORACION CON LAS AUTORIDADES MEDIANTE EL SUMINISTRO DE LA INFORMACION PARA FINES INVESTIGATIVOS Y PROBATORIOS

(La entidad) colaborará con la Fiscalía General de la Nación o los cuerpos especiales de Policía Judicial que ésta designe, mediante el reporte de:

1. Cualquier información relevante sobre operaciones que, por cuya cuantía o características, racionalmente demuestren apartarse sustancialmente de la actividad económica del cliente, según el conocimiento de (la entidad) derivado de la aplicación de los criterios y procedimientos establecidos en los puntos anteriores.
2. Las transacciones de los usuarios que por el número, cantidad o características puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están utilizando a (la entidad) en actividades ilícitas, de conformidad con los perfiles, parámetros y definiciones que de dichas transacciones y operaciones determine previamente un comité que al efecto se establecerá con miembros de la Fiscalía General de la Nación, de la Superintendencia Bancaria y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.

En relación con el cumplimiento de estas obligaciones de información (la entidad) lo hará cuando así lo soliciten los directores regionales o seccionales de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de realizarla en forma inmediata y suficiente y, en todo caso, dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes al día en que conozca la información.

3. Cualquiera otra información que solicite la Fiscalía General de la Nación, en legal y debida forma, directamente o por conducto de

las entidades que cumplen funciones de Policía Judicial. La información se reportará en medio magnético, por intermedio de la Superintendencia Bancaria, en el formato y condiciones técnicas y de periodicidad que al efecto establezca dicho organismo.

(La entidad) y sus funcionarios no podrán dar a conocer a los clientes que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, en los términos definidos en el numeral 2, que han comunicado a la Fiscalía General de la Nación, información sobre ellas e, igualmente, deberán guardar reserva con respecto a las mismas. La colaboración con las entidades judiciales y de policía extranjeras se hará por intermedio de las autoridades nacionales competentes, conforme a las normas internacionales pertinentes.

CAPITULO IV

NORMAS INTERNAS

(La entidad) adelantará las siguientes acciones:

- a) Desarrollará este código en los procedimientos, manuales e instrucciones.
- b) Establecerá un sistema de auditoría y control de su cumplimiento.
- c) Capacitará a su personal en su aplicación.

ANEXO 3

ACUERDO INTERBANCARIO

**PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE
EL CONTROL Y PREVENCION
DEL LAVADO DE ACTIVOS**

5 DE JUNIO DE 1996

INTRODUCCION

Dados los propósitos del sector financiero colombiano de impedir que su negocio sea utilizado para ocultar y manejar dineros provenientes de actividades ilícitas, y teniendo en cuenta que la capacitación del personal del sector es de vital importancia para la aplicación de los mecanismos de control y prevención, la Asobancaria estructuró el programa de capacitación contenido en este documento.

Este programa es resultado del convenio suscrito entre la Asobancaria y la Fiscalía General de la Nación. Tanto la Superintendencia Bancaria como la Fiscalía General de la Nación conocieron el texto de este programa y manifestaron su apoyo al mismo.

Siguiendo las directrices del Comité de Basilea que establece como principio «la capacitación suficiente y permanente de los empleados bancarios», se propone un plan de capacitación de carácter obligatorio para todos los funcionarios del sector financiero, teniendo presentes los diferentes niveles de cargos y funciones, desde aquellos cuya función básica es la asistencia a la clientela, hasta los niveles directivos; el programa se dirigirá también a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, se ha concebido un programa por módulos que tendrá cubrimiento a nivel nacional; por tanto, se aplicará por etapas, utilizando ayudas metodológicas como videos, cartillas, manuales y análisis de casos.

Este programa de capacitación fue aprobado como acuerdo interbancario en la junta directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en su reunión del 5 de junio de 1996 (Acta 501).

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA, ASOBANCARIA

CONSIDERANDO

1. Que las entidades financieras han venido adoptando mecanismos y procedimientos que les permitan prevenir que sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de dineros provenientes de actividades ilícitas;
2. Que las entidades financieras han venido desarrollando programas de capacitación sobre los temas relacionados con la prevención del lavado de activos;
3. Que uno de los principales mecanismos de prevención consiste en la adecuada y permanente capacitación del personal del sector financiero;

ACUERDA

Primero: Adoptar un programa de capacitación sobre control y prevención de lavado de activos ilícitos en el sistema financiero, complementario a los específicamente diseñados por cada entidad.

Segundo: Alcance y objetivos

El programa de capacitación será de carácter obligatorio para todo empleado de las entidades miembros de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, quienes tomarán

los módulos que contengan los aspectos que deben ser conocidos, teniendo presentes las funciones de cada cargo.

Los objetivos específicos del programa son los siguientes:

- Enseñar la competencia del Estado frente al sector financiero en el tema de lavado de activos.
- Describir los aspectos legales, administrativos y operativos del lavado de activos en el entorno colombiano.
- Sensibilizar a los funcionarios de las instituciones financieras sobre su responsabilidad ante el lavado de activos.
- Dar a conocer las funciones de las distintas autoridades que hacen parte del Comité Interinstitucional contra el Lavado de Activos.
- Describir el papel de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, como miembro del cuerpo consultivo.

Tercero: Contenido

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, determinará el contenido del programa de capacitación, teniendo como base los siguientes aspectos:

1. Contenido del programa básico

1.1 Presentación del programa y metodología

1.2 Sensibilización

1.2.1 Delincuencia económica, crimen organizado y evolución del fenómeno de la mafia.

1.2.2 Ética o tratados y derechos financieros (deontología)

1.3 Reglamentación internacional

1.3.1 Declaración de Basilea

1.3.2 Convención de Viena

1.3.3 Recomendación del Grupo de Acción Financiera, Gafi

1.3.4 Otros convenios internacionales

1.4 Reglamentación nacional

1.4.1 Decreto 1872 de 1992

1.4.2 Decreto 663 de 1993, arts. 102 a 107

1.4.3 Ley 190 de 1995, arts. 31, 39, 40, 41, 44

1.4.4 Normatividad complementaria y acuerdos interbancarios

1.5 Concepto, etapas esenciales y estrategia de lavado

1.5.1 Producción o receptación

- El término «producción» y las normas tendientes a reprimir directamente la creación de las fortunas ilícitas.

1.5.2 Circulación, transformación o estratificación

- Consideraciones preliminares: Distinción entre la etapa de producción y la etapa de circulación. Precisión y explicación de los elementos que componen el concepto de «circulación». Conceptos de circulación jurídica y circulación material.

- Aspectos fenomenológicos del lavado de activos (clasificación detallada y su relevancia casuística). Sectores del mercado para la reconversión de capitales ilícitos.

1.5.3 Inversión, integración o traslado de fondos

- Los sectores más privilegiados en materia de inversión de capitales ilícitos.

1.6 Intervención penal en la producción de capitales ilícitos

1.6.1 Actividad investigativa dirigida a impedir la producción de capitales ilícitos.

- Operaciones sospechosas

- Operaciones fraccionadas

1.6.2 Análisis de operaciones y reportes

1.7 Intervención penal en la circulación

1.7.1 Las subespecies penales no destinadas directamente a reprimir el lavado de activos.

(Favorecimiento y receptación). Análisis del caso colombiano.

1.7.2 Análisis del artículo 177 del Código Penal Colombiano (Ley 190 de 1995, art. 31).

1.7.3 Tipicidad de la conducta del lavado

1.7.4 Prospectiva de la tipicidad y punibilidad en el campo internacional.

- Orientaciones de la comunidad internacional
- Represión en algunos ordenamientos extranjeros
- 1.8 Intervención penal en inversión
 - 1.8.1 Análisis del artículo 177 del Código Penal Colombiano y legislación complementaria.
 - 1.8.2 Consideraciones sobre las subespecies del lavado y el «empleo» de capitales ilícitos.
- 1.9 Paraísos fiscales y circuitos económicos más utilizados.
 - 1.9.1 Operación simple
 - 1.9.2 Operación compleja
 - 1.9.3 Plazas *off-shore* (situadas en el extranjero)
- 1.10 Participación de las entidades financieras en la lucha contra el lavado de activos.
 - 1.10.1 Secreto bancario y la «no injerencia»
 - 1.10.2 Incidencia de las normas en el contexto colombiano y en el derecho comparado.
 - 1.10.3 Derecho a la intimidad económica del cliente
 - 1.10.4 Identificación y conocimiento del cliente
- Verificación de la entidad
- El anonimato

1.10.5 Análisis de las operaciones del cliente

- Obligaciones
- Tipología de operaciones
- Coherencia de las operaciones

1.10.6 Análisis del movimiento de cuenta

- Obligaciones
- Tipología de cuentas (activas e inactivas)

1.11 Conservación de documentos y tecnología informática

1.12 Obligación de vigilancia interna

1.13 Conductas ante la presencia de una operación sospechosa.

1.13.1 Niveles de jerarquía

1.13.2 Manejo operativo de señales de alerta

1.13.3 Cooperación con las autoridades y reportes

1.13.4 Programas de cumplimiento

1.13.5 Circuito de la declaración o reporte

1.14 Responsabilidad legal de los banqueros (civil, penal y administrativa)

2. Programa de intensificación

Este programa tiene como fin profundizar en áreas de interés, fomentar el apoyo concienzudo de las acciones de investigación

criminal que realicen las autoridades y reflexionar y criticar aspectos de la realidad, a partir de la formación de los empleados en sus áreas de responsabilidad dentro de las instituciones, divididas así:

- Alta gerencia
- Areas comerciales
- Areas operativas
- Oficinas.

ANEXO 4

**DECLARACION DE PRINCIPIOS Y
ACCIONES DEL SECTOR FINANCIERO FRENTE
AL LAVADO DE ACTIVOS**

5 DE JUNIO DE 1996

LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLOMBIANAS QUE FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO

CONSIDERANDO

- a) Que el sector financiero está en la obligación de adoptar medidas tendientes a proteger el interés público envuelto en la actividad financiera, tal como lo califica el artículo 335 de la Constitución Política.
- b) Que es obligación legal de las autoridades nacionales y de las entidades financieras mantener la confianza del público en el sector financiero y, por tanto, deben adoptar medidas para asegurar la estabilidad del sector.
- c) Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Colombiano obliga a las instituciones financieras a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas.
- d) Que de conformidad con las recomendaciones del Comité de Basilea, las entidades financieras no deberán ofrecer servicios o proporcionar asesoría cuando se trate de operaciones acerca de las cuales tienen buenas razones para suponer que están relacionadas con actividades ilícitas.

- e) Que, tal y como lo ha señalado la Superintendencia Bancaria, la libertad contractual se aplica plenamente en las relaciones jurídicas de las entidades financieras con sus clientes; por tanto, es factible que los establecimientos de crédito se puedan abstener válidamente de contratar con los particulares la prestación de servicios propios de la actividad bancaria y, por expresa autorización legal, los contratos de depósito en cuenta corriente y los de depósitos de ahorros pueden darse por terminados unilateralmente. (Documento de la Superintendencia Bancaria, titulado “Actividad Bancaria, servicio público y obligatoriedad de la prestación”).
- f) Que las entidades financieras colombianas, dentro de sus objetivos de cooperación nacional e internacional, deben evitar que eventuales medidas del gobierno de los Estados Unidos, dictadas al amparo de la situación de excepción decretada por la Orden Ejecutiva 12978, puedan afectar gravemente al sector financiero y a la economía colombiana en general.

DECLARAN

1. Que continuarán aplicando, con el máximo esfuerzo, todos los mecanismos posibles para prevenir la utilización del sector financiero en el ocultamiento y manejo de dineros provenientes de actividades ilícitas.
2. Que continuarán haciendo sus mejores esfuerzos para impedir que la Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos afecte gravemente los intereses del sistema financiero y de la economía del país.
3. Que continuarán con sus gestiones para auto-regular su comportamiento a través de la adopción de acuerdos interbancarios que desarrollen los Códigos de Conducta, establezcan procedimientos uniformes para el conocimiento del

cliente, refuercen los programas de capacitación y desarrollen los demás aspectos necesarios para prevenir la utilización del sector financiero colombiano en el ocultamiento y manejo de dineros provenientes de actividades ilícitas.

4. Que continuarán creando mecanismos de auto-regulación que permitan vigilar el cumplimiento de los acuerdos interbancarios.

Santafé de Bogotá, 5 de junio de 1996.

ANEXO 5

**COMISION DE SEGUIMIENTO PARA LOS
ACUERDOS INTERBANCARIOS SOBRE
EL LAVADO DE ACTIVOS**

5 DE JUNIO DE 1996

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA
Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA,
ASOBANCARIA**

CONSIDERANDO:

- a) Que uno de los propósitos de la Asociación Bancaria y de Entidades financieras de Colombia, Asobancaria, es el promover y mantener la confianza del público en el sector financiero, y proteger la imagen del mismo:

- b) Que la junta directiva de la Asobancaria, buscando la auto-regulación de la actividad desarrollada por las entidades financieras, ha expedido y continuará expidiendo acuerdos tendientes a lograr comportamientos uniformes sobre aspectos de vital importancia para desarrollo del sector financiero, dentro del marco legal y de los principios éticos y morales:

- c) Que es indispensable que el propio sector financiero adopte mecanismos de auto-regulación que le permita efectuar un seguimiento a los acuerdos interbancarios, especialmente aquellos relacionados con la adopción de regulaciones de carácter uniforme y de aplicación general, en materia de prevención, detección y represión de movimiento de capitales ilícitos.

Primera: Crear una comisión de seguimiento, cuya función será la de estudiar el comportamiento de las entidades financieras miembros de

la Asobancaria frente a los acuerdos que buscan una regulación de carácter uniforme y de aplicación general, en materia de prevención, detección y represión de movimiento de capitales ilícitos.

Segunda: La comisión de seguimiento estará integrada por cinco miembros de la junta directiva, que representen a cada tipo de instituciones afiliadas a la Asobancaria; es decir, un presidente de un banco, de una corporación de ahorro y vivienda, de una corporación financiera, de una sociedad fiduciaria y de un almacén general de depósito.

Tercera: Esta comisión presentará informes periódicos a la junta directiva, organismo que, de conformidad con sus atribuciones estatutarias, adoptará las medidas correspondientes.

ANEXO 6

**ACUERDO INTERBANCARIO
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**

5 DE JUNIO DE 1996

INTRODUCCION

Las instituciones financieras han venido estableciendo, desde hace algún tiempo, políticas y reglas internas claras para prevenir y detectar movimientos ilícitos de capitales, así como también sus propios códigos de conducta; no obstante, este conjunto de esfuerzos individuales requiere homogeneidad de las normas y procedimientos, por una parte, y un respaldo institucional, por la otra.

La junta directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en reunión del 4 de octubre de 1995, acordó la creación de un Comité de Conocimiento del Cliente, cuyo propósito es unificar procedimientos para vincular clientes, con el fin de facilitar el acatamiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, arts. 102 a 107, en particular del artículo 102, régimen general, el numeral 2, «Mecanismos de control», literal a), sobre el adecuado conocimiento de la actividad económica de los clientes.

El presente acuerdo fue aprobado en la reunión de la junta directiva de la Asobancaria del 5 de junio de 1996 y es el resultado del trabajo realizado por el Comité de Conocimiento del Cliente. Contiene la información mínima requerida por cada entidad financiera para seleccionar a sus clientes, tanto habituales como ocasionales, al igual que una guía para diseñar los formatos de vinculación de clientes para la apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y constitución de certificados de depósito a término (CDT).

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA, ASOBANCARIA

CONSIDERANDO

1. Que mediante el Acuerdo aprobado en la reunión de la junta directiva de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el 21 de octubre de 1992, se definió el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento de capitales ilícitos, dado que una entidad financiera puede llegar a ser utilizada, sin su conocimiento ni consentimiento, como intermediaria de depósitos, transacciones y transferencias de fondos originados o destinados a la ejecución de actividades criminales;
2. Que en el acuerdo al que se hace referencia en el numeral anterior se expresa que los miembros de la Asobancaria realizarán un esfuerzo razonable para seleccionar y conocer a sus clientes, sean éstos habituales u ocasionales, identificarlos debidamente y tener un conocimiento de sus transacciones y actividades, en orden a establecer la coherencia entre éstas;
3. Que en el Código Uniforme de Conducta propuesto a los miembros de la Asobancaria en relación con su función en la detección, prevención y represión de movimientos ilícitos de capitales, aprobado por la junta directiva el 21 de octubre de 1992, se establecieron en el capítulo I los documentos e información que las entidades financieras deben obtener de sus clientes, con el fin de seleccionarlos, identificarlos y conocer sus actividades económicas;
4. Que el adecuado conocimiento del cliente y de sus actividades es necesario para la determinación de un perfil de los clientes de una entidad financiera, que le facilitará a ésta la detección de operaciones inusuales;

5. Que es conveniente modificar el capítulo I del Código Uniforme de Conducta, mencionado en el numeral tercero, con el fin de complementar y unificar los documentos e información que las entidades financieras deben obtener de sus clientes;

ACUERDA

PRIMERO: Modificar el numeral 1, capítulo I del Código Uniforme de Conducta aprobado por la junta directiva en su reunión del 21 de octubre de 1992 (Acta 463), el cual quedará con el siguiente texto:

CAPITULO I

SELECCION E IDENTIFICACION DEL CLIENTE Y CONOCIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ECONOMICAS

La entidad financiera realizará un esfuerzo para seleccionar sus clientes tanto habituales como ocasionales, e identificarlos debidamente así:

1. Apertura de cuentas corrientes

1.1 Información mínima obligatoria

Para la apertura de cuentas corrientes deberá diligenciarse una solicitud que contenga, por lo menos, la siguiente información:

1.1.1 Persona natural

1.1.1.1 Información del solicitante

- Nombre completo
- Número de documento de identidad, lugar y fecha de expedición
- Lugar y fecha de nacimiento
- Dirección y teléfono de la residencia
- Ocupación, oficio o profesión

- Detalle de actividad (independiente, empleado o socio)
- Nombre, dirección, fax y teléfono de la empresa o negocio donde trabaja
- Sexo
- Estado civil
- Número de personas a cargo
- Nivel de estudios
- Clase de vivienda (propia o arrendada; datos del arrendatario y valor del arrendamiento)

1.1.1.2 Información financiera del solicitante

- Origen de los fondos con los cuales abre la cuenta
- Ingresos y egresos mensuales
- Total activos (vehículo, bienes raíces, semovientes) y pasivos (valor de las prendas, hipotecas y/o préstamos)

1.1.1.3 Datos del cónyuge

- Datos del cónyuge (nombres completos, documento de identidad, nivel de estudios, ocupación, dirección y teléfono de la empresa o negocio donde trabaja, ingresos y egresos)

1.1.1.4 Referencias

- Una familiar, identificando nombre, parentesco, teléfono y dirección
- Una personal, identificando nombre, teléfono y dirección
- Dos financieras, identificando nombre de la entidad, número de cuenta y oficina
- Dos comerciales, identificando nombre del establecimiento y teléfono
- Una o dos, tarjeta de crédito, identificando número de tarjeta, cupo, entidad otorgante y sucursal

1.1.1.5 Operaciones internacionales

Si la actividad del cliente implica transacciones en moneda extranjera, es necesario identificar:

- El tipo de transacciones que normalmente realiza: importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos en moneda extranjera, pago de servicios u otras
- Si tiene cuentas corrientes en moneda extranjera: número de cuenta, banco, ciudad, país y moneda

1.1.1.6 Anexos

Como anexos a la información enunciada en los numerales 1.1.1.1 a 1.1.1.5 se debe obtener como mínimo:

- Fotocopia del documento de identificación: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería.
- Registro de la huella dactilar del solicitante
- Registro de la firma del solicitante
- Certificado laboral
- Registro fotográfico¹
- Declaración voluntaria de origen de fondos
- Certificado de ingresos y retenciones o declaración de renta
- Balances del último año (para los casos que se aplique)
- Extractos de los últimos tres meses (cuenta corriente y/o ahorros, para los casos que se aplique)
- Constancia de honorarios (para los casos que se aplique).
- Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo
- Reporte de Centrales de Riesgo

1. Cuando se trate de operaciones que no guarden una relación aparente con las actividades del cliente.

1.1.2 Persona jurídica

1.1.2.1 Información del solicitante

- Razón social
- Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Nombre del representante legal
- Número de documento de identidad del representante legal
- Dirección, teléfono, fax y ciudad actual de la oficina principal, agencias y sucursales¹
- Tipo de empresa: privada, pública, mixta, otras
- Actividad económica principal: comercial, industrial, transporte, construcción, agroindustria, servicios financieros, etc., de acuerdo con lo establecido en el código internacional CIIU (Código Internacional de Industria Uniforme)

1.1.2.2 Información financiera del solicitante

- Origen de los fondos con los cuales abre la cuenta
- Ingresos y egresos mensuales
- Total activos (vehículo, bienes raíces, semovientes) y pasivos (valor de las prendas, hipotecas y/o préstamos)

1.1.2.3 Referencias

- Dos financieras, identificando nombre de la entidad, número de cuenta, producto y oficina

1.1.2.4 Operaciones internacionales

Si la actividad del cliente implica transacciones en moneda extranjera es necesario identificar:

- El tipo de transacciones que normalmente realiza: importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos en moneda extranjera, pago de servicios u otras

- Si tiene cuentas corrientes en moneda extranjera, el número de cuenta, el banco, la ciudad, el país y la moneda

1.1.2.5 Anexos

Como anexos a la información enunciada en los numerales 1.1.2.1 a 1.1.2.4 se debe obtener como mínimo:

- Certificado de existencia y representación legal vigente de la Cámara de Comercio o de la entidad competente
- Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Registro de la firma y huella digital del representante legal
- Fotocopia del documento de identificación del representante legal y de las personas con firma autorizada
- Reporte de Centrales de Riesgo
- Lista de los principales proveedores y clientes, incluyendo su ubicación geográfica¹
- Lista de los principales socios y/o accionistas¹
- Declaración voluntaria de origen de fondos
- Declaración de renta del último período gravable disponible
- Estados financieros del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de apertura¹
- Extractos de los últimos tres meses disponibles (cuenta corriente y/o ahorros)
- Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo

1.2 Información opcional

Como información adicional se recomienda a las entidades financieras obtener de sus clientes, para la apertura de las cuentas corrientes, lo siguiente:

- Información para productos: sucursal donde desea vincularse, forma y lugar de envío de correspondencia y extractos
- Datos para solicitud de crédito: tipo de garantía, valor solicitado, plazo y destino del préstamo

- Relación con otros clientes de la entidad: nombre y teléfono.

2. Apertura de cuentas de ahorro

2.1 Información mínima obligatoria

Para la apertura de cuentas de ahorro deberá diligenciarse una solicitud que contenga, por lo menos, la siguiente información:

2.1.1 Persona natural

2.1.1.1 Información del solicitante

- Nombre completo
- Número de documento de identidad, lugar y fecha de expedición.
- Lugar y fecha de nacimiento
- Dirección y teléfono de la residencia
- Ocupación, oficio o profesión
- Detalle de actividad (independiente, empleado o socio)
- Nombre, dirección, fax y teléfono de la empresa o negocio donde trabaja

2.1.1.2 Información financiera del solicitante

- Origen de los fondos con los cuales abre la cuenta de ahorros

2.1.1.3 Referencias

- Una familiar, identificando nombre, parentesco, teléfono y dirección.
- Una personal, identificando nombre, teléfono y dirección

2.1.1.4 Operaciones internacionales

Si la actividad del cliente implica transacciones en moneda extranjera es necesario identificar:

- El tipo de transacciones que normalmente realiza: importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos en moneda extranjera, pago de servicios u otras.

2.1.1.5 Anexos

Como anexos a la información enunciada en los numerales 2.1.1.1 a 2.1.1.4 se debe obtener como mínimo:

- Fotocopia del documento de identificación: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería.
- Registro de la huella dactilar del solicitante
- Registro de la firma del solicitante
- Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo
- Declaración voluntaria de origen de fondos

2.1.2 Persona jurídica

2.1.2.1 Información del solicitante

- Razón social
- Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Nombre del representante legal
- Número de documento de identidad del representante legal
- Dirección, teléfono, fax y ciudad actual de la oficina principal
- Tipo de empresa: privada, pública, mixta, otras
- Actividad económica principal: comercial, industrial, transporte, construcción, agroindustria, servicios financieros, etc., de acuerdo con lo establecido en el código internacional Ciiu.

2.1.2.2 Información financiera del solicitante

- Origen de los fondos con los cuales abre la cuenta de ahorro

2.1.2.3 Operaciones internacionales

Si la actividad del cliente implica transacciones en moneda extranjera es necesario identificar:

- El tipo de transacciones que normalmente realiza: importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos en moneda extranjera, pago de servicios u otras

2.1.2.4 Anexos

Como anexos a la información enunciada en los numerales 2.1.2.1 a 2.1.2.3 se debe obtener como mínimo:

- Certificado de existencia y representación legal vigente de la Cámara de Comercio o de la entidad competente.
- Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Registro de la firma y huella digital del representante legal
- Fotocopia del documento de identificación del representante legal y de las personas con firma autorizada.
- Declaración voluntaria de origen de fondos
- Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo

2.2 Excepción a la información mínima obligatoria

De acuerdo con lo consagrado en el numeral 4, artículo 102 del Decreto 663 de 1993, las entidades financieras podrán establecer una cuantía mínima respecto de la cual no será obligatorio solicitar toda la información relacionada en el numeral 2.1 para la apertura de cuentas de ahorro, cuando conocido el perfil del cliente se deduzca que la cuenta de ahorros no tendrá movimientos significativos.

La cuantía mínima establecida deberá ser informada y justificada por el representante legal de la entidad financiera a la Comisión de

Seguimiento de los acuerdos interbancarios relacionados con la prevención del lavado de activos (creada por la junta directiva en su reunión del 5 de junio de 1996). La determinación de la cuantía debe justificarse en función del mercadeo de los productos, capacidad operativa y nivel de desarrollo tecnológico de la entidad.

2.3 Información opcional

Como información opcional se recomienda a las entidades financieras obtener de sus clientes, para la apertura de las cuentas de ahorro, los siguientes datos:

2.3.1 Información del solicitante

2.3.1.1 Persona natural

- Nivel de estudios
- Número de personas a cargo
- Estado civil
- Ingresos mensuales y total de activos, incluyendo detalle de los mismos
- Relación con otros clientes de la entidad: nombre, teléfono

2.3.1.2 Persona jurídica

- Ingresos mensuales y total de activos, incluyendo detalle de los mismos
- Relación con otros clientes de la entidad: nombre, teléfono

2.3.2 Documentos opcionales

- Certificado de ingresos y retenciones
- Declaración de renta

- Estados financieros actualizados
- Certificado de honorarios
- Extractos de cuentas corrientes o de ahorros de los últimos tres meses

3. Constitución de certificados de depósito a término (CDT)

3.1 Información mínima obligatoria para la constitución de CDT con un solo beneficiario

Para la constitución de certificados de depósito a término (CDT), deberá obtenerse del cliente, por lo menos, la siguiente información:

3.1.1 Persona natural

3.1.1.1 Información del solicitante

- Nombre completo
- Número de documento de identidad, lugar y fecha de expedición
- Lugar y fecha de nacimiento
- Dirección y teléfono de la residencia
- Ocupación, oficio o profesión
- Detalle de actividad (independiente, empleado o socio)
- Nombre, dirección, fax y teléfono de la empresa o negocio donde trabaja

3.1.1.2 Información financiera del solicitante

- Origen de los fondos con los cuales abre el CDT

3.1.1.3 Referencias

- Una familiar, identificando nombre, parentesco, teléfono y dirección

- Una personal, identificando nombre, teléfono y dirección

3.1.1.4 Anexos

Como anexos a la información enunciada en los numerales 3.1.1.1 a 3.1.1.3 se debe obtener como mínimo:

- Fotocopia del documento de identificación: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería
- Registro de la huella dactilar del solicitante
- Registro de la firma del solicitante
- Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo
- Declaración voluntaria de origen de fondos

3.1.2. Persona jurídica

3.1.2.1 Información del solicitante

- Razón social
- Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Nombre del representante legal
- Número de documento de identidad del representante legal
- Dirección, teléfono, fax y ciudad actual de la oficina principal.
- Tipo de empresa: privada, pública, mixta, otras
- Actividad económica principal: comercial, industrial, transporte, construcción, agroindustria, servicios financieros, etc., de acuerdo con lo establecido en el código internacional CIU.

3.1.2.2 Información financiera del solicitante

- Origen de los fondos con los cuales abre el CDT

3.1.2.3 Anexos

Como anexos a la información enunciada en los numerales 3.1.2.1 a 3.1.2.2 se debe obtener como mínimo:

- Certificado de existencia y representación legal vigente de la Cámara de Comercio o de la entidad competente
- Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT)
- Registro de la firma y huella digital del representante legal
- Fotocopia del documento de identificación del representante legal y de las personas con firma autorizada
- Declaración voluntaria de origen de fondos
- Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo

3.2 Información opcional

Como información opcional se recomienda a las entidades financieras obtener de sus clientes, para la constitución de certificados de depósito a término (CDT), los siguientes datos:

3.2.1 Información del solicitante

3.2.1.1 Persona natural

- Nivel de estudios
- Número de personas a cargo
- Estado civil
- Ingresos mensuales y total de activos, incluyendo detalle de los mismos
- Relación con otros clientes de la entidad: nombre, teléfono

3.2.1.2 Persona jurídica

- Ingresos mensuales y total de activos, incluyendo detalle de los mismos
- Relación con otros clientes de la entidad: nombre, teléfono

3.2.2 Documentos opcionales

- Certificado de ingresos y retenciones
- Declaración de renta
- Estados financieros actualizados
- Certificado de honorarios
- Extractos bancarios de los últimos tres meses

3.3 Constitución de CDT con varios beneficiarios

Para cada beneficiario se debe obtener la información y anexos exigida para persona natural o jurídica. El registro de firma y huella dactilar debe obtenerse de, por lo menos, uno de los beneficiarios.

3.4 Constitución de CDT por intermedio de tercera persona

3.4.1 Por intermedio de apoderado

Se debe recibir el poder por escrito debidamente autenticado con reconocimiento de firma y contenido, documento donde deben aparecer la firma y la huella del beneficiario. En caso de ser varios beneficiarios, éstos deben estar registrados en el poder y necesariamente quien firma el poder debe ser uno de los beneficiarios. Para cada uno de los beneficiarios se debe obtener la información y anexos exigidos para persona natural.

3.4.2 Por intermedio de comisionistas de bolsa

El comisionista debe estar debidamente registrado en la Superintendencia de Valores.

La entidad financiera debe mantener actualizados:

- El certificado que acredite al comisionista de bolsa como tal.

- Registro de la firma del representante legal del comisionista de bolsa y la de los funcionarios facultados para tramitar este tipo de operación.

Dado que se entiende que los comisionistas de bolsa están obligados a adoptar los mecanismos establecidos en los artículos 102 a 107 del Decreto 663 de 1993 (art. 39 Ley 190 de 1995, Circular Externa No. 14 de 1995 de la Superintendencia de Valores) con el propósito de obtener la información de los clientes a quienes tramitan la expedición de títulos valores, las entidades financieras adoptarán los procedimientos para obtener la respectiva certificación sobre dicho cumplimiento.

3.5 Otro tipo de operaciones sobre CDT

En los casos de cambio o inclusión de nuevos beneficiarios, fusiones y fraccionamientos se debe cumplir con los requisitos exigidos en los numerales 3.1 a 3.4.

Cuando el endoso del título no es registrado con anterioridad a la fecha de pago, se debe obtener la firma y huella de quien cobra el título y anexar fotocopia del documento de identidad.

4. Declaración de origen de fondos

Las entidades financieras deberán solicitar a sus clientes la suscripción de una declaración de origen de fondos, para lo cual se propone el siguiente texto:

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado con el documento _____ de _____, identidad _____

No. _____, expedido en _____,

obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a la entidad financiera _____, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y certificados de depósito a término.

1. Los recursos que entregue en depósito provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.):

2. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Autorizo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda

responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ de 19_____, en la ciudad de _____.

Firma cliente

5. Aclaraciones

Los requisitos incluidos en este documento recogen lo exigido por la Superintendencia Bancaria en la Circular Básica 007 de 1996, sobre los cuales la Asobancaria ha solicitado que sean modificados algunos de ellos (información y anexos señalados en este documento con (*) para la apertura de cuentas corrientes).

A la fecha de publicación de este acuerdo no se ha recibido ningún concepto de la Superbancaria; en el momento en que se eliminen los requisitos señalados de la circular mencionada, a su vez, deben suprimirse de este acuerdo.

Para el caso de personas, tanto naturales como jurídicas extranjeras, es necesario tener en cuenta lo establecido en la legislación colombiana sobre el particular.

SEGUNDO: El presente acuerdo se aplicará a partir del 1 de septiembre de 1996.

La adhesión al acuerdo se producirá por la manifestación escrita de los representantes legales de las entidades miembros».

APARTE

GUIA PARA LA ELABORACION DE FORMATOS BASICOS DE VINCULACION DE CLIENTES: CUENTA CORRIENTE, CUENTA DE AHORROS Y CDT

La guía consta de cuatro columnas:

1. Columna 1: Tipo de información, para los siguientes subgrupos:
 1. Información del solicitante
 2. Información financiera
 3. Datos del cónyuge (persona natural para cuenta corriente)
 4. Referencias
 5. Operaciones internacionales
 6. Autorización para consulta y reporte a Centrales de Riesgo
2. Columna 2: Producto al cual aplica la información
3. Columna 3: Detalle de la información que debe contener el formato o registro de cliente
4. Columna 4: Anexos que deben solicitarse como soporte de la información.

Cada *tipo de información* se divide en colores, dependiendo del producto:

1. Rojo: Obligatoria para cualquier producto.
2. Verde: Adicional para cuenta de ahorro (complementario a lo requerido en rojo).
3. Azul: Adicional para cuenta corriente (complementario a lo requerido en rojo).

La información y anexos obligatorios (recuadros rojos) se deben solicitar para cualquier producto. Para cuenta corriente se adiciona la información y anexos que se encuentren en recuadros azules y verdes. Para cuenta de ahorros debe agregarse la información y anexos que estén en recuadros verdes.

La información y anexos relacionados anteriormente corresponden a la información mínima que debe tenerse en cuenta para cada tipo de producto.

ANEXO 7

LEY 333

(CAPITULOS I Y II)

19 DE DICIEMBRE DE 1997

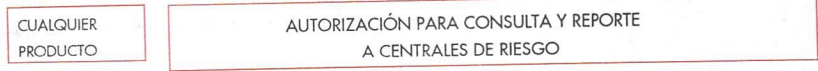
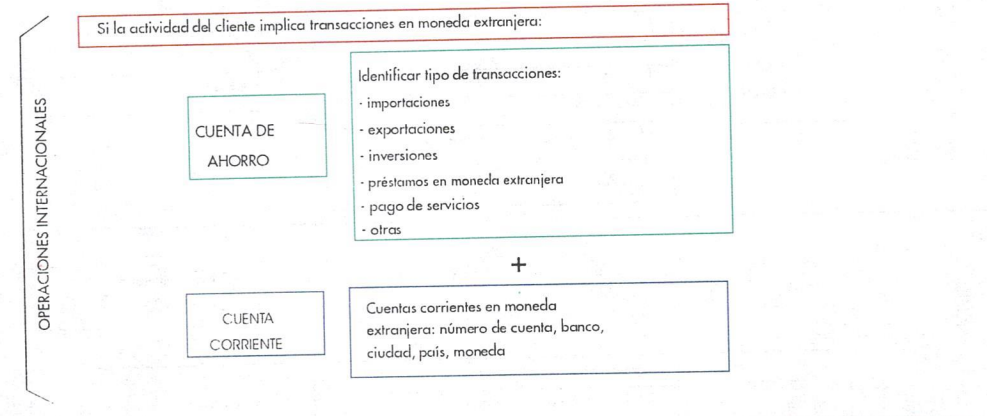
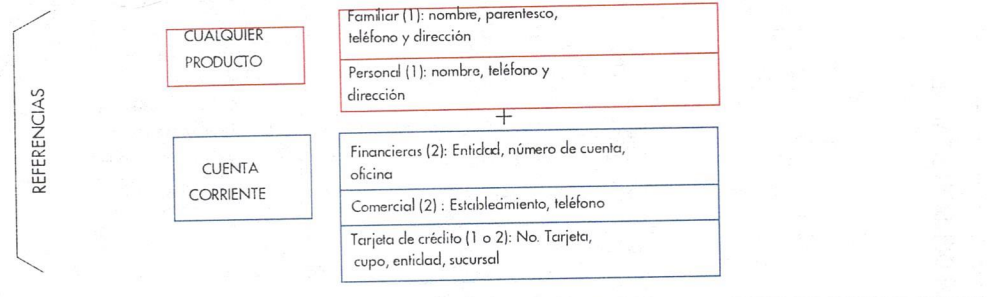
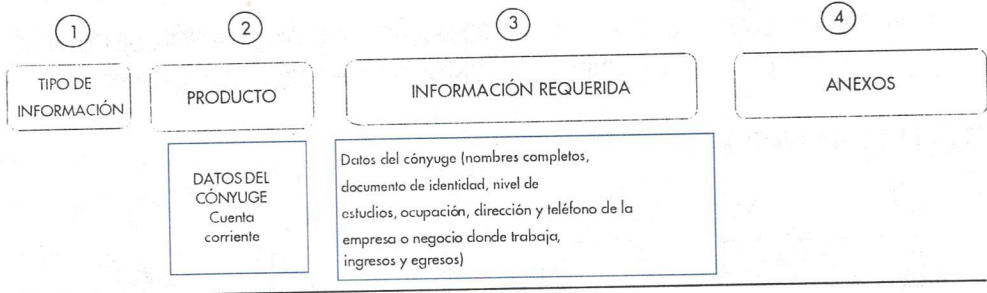
ANEXO

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FORMATOS BÁSICOS DE VINCULACIÓN DE CLIENTES: CUENTA CORRIENTE, CUENTA DE AHORRO, CDT Y CDAT

1. PERSONA NATURAL

| | ① | ② | ③ | ④ | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--|---|--|---|--|
| | TIPO DE INFORMACIÓN | PRODUCTO | INFORMACIÓN REQUERIDA | ANEXOS | | | |
| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | CUALQUIER PRODUCTO | Nombre completo Número de documento de identidad, lugar y fecha de expedición Lugar y fecha de nacimiento Dirección y teléfono de la residencia Ocupación, oficio o profesión Detalle de actividad (independiente, empleado o socio) Nombre, dirección, fax y teléfono de la empresa o negocio donde trabaja | Fotocopia del documento de identificación: Cédula de ciudadanía Tarjeta de identidad Cédula de extranjería Huella dactilar Firma | | | |
| | | CUENTA CORRIENTE | + | Sexo Estado civil Número de personas a cargo Nivel de estudios Clase de vivienda (propia o arrendada, datos del arrendatario y valor del arrendamiento) | + | Certificado laboral Fotografía | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | | CUALQUIER PRODUCTO | + | + | + | Origen de los fondos con los cuales abre la cuenta o el CDT | Declaración voluntaria de origen de fondos |
| | | CUENTA CORRIENTE | Ingresos y egresos mensuales Total activos y pasivos (vehículo, bienes raíces, semovientes). Valor de las prendas, hipotecas y/o préstamos | + | Certificado de ingresos y retenciones o declaración de renta, balances del último año, extractos de los últimos tres meses (cuenta corriente y/o de ahorros), constancia de honorarios. Reporte a Centrales de Riesgo | | |

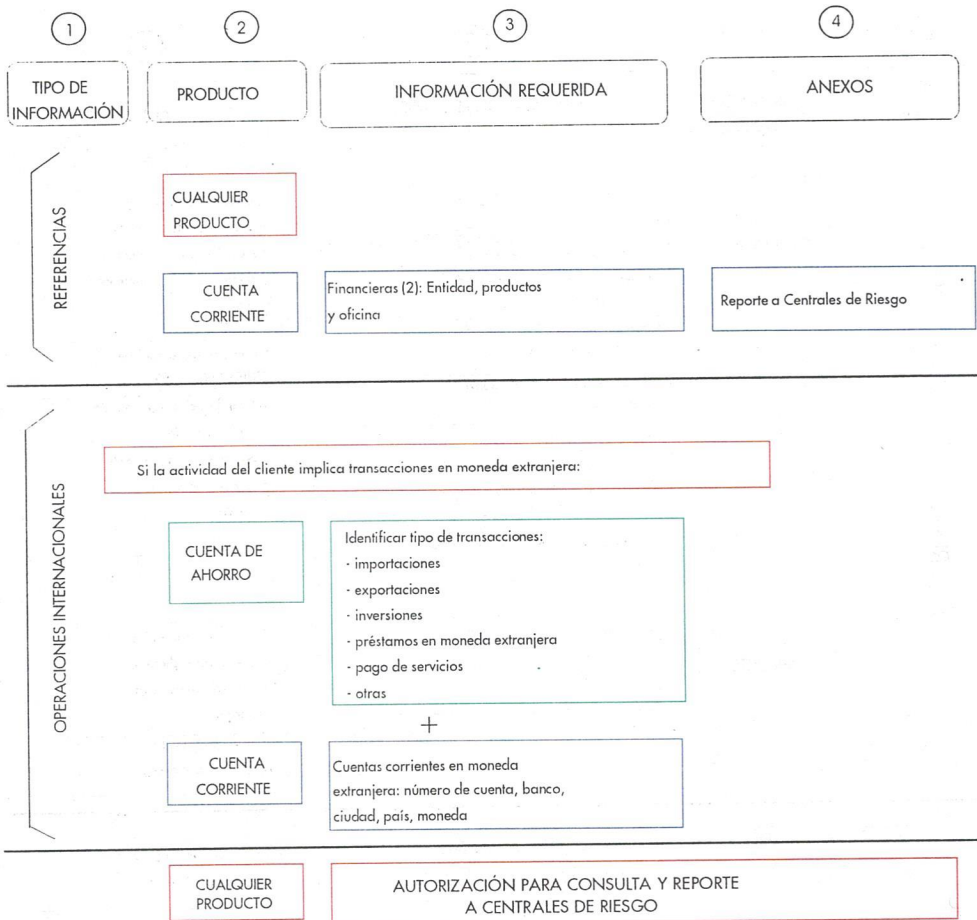
1. PERSONA NATURAL (continuación)



2. PERSONA JURÍDICA

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|---------------------|----------|---|--|
| | TIPO DE INFORMACIÓN | PRODUCTO | INFORMACIÓN REQUERIDA | ANEXOS |
| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | CUALQUIER PRODUCTO | | Razón social NIT Nombre del representante legal Número de documento de identidad del representante legal Dirección, teléfono, fax y ciudad actual de la oficina principal Tipo de empresa: privada, pública, mixta, otras. Actividad económica principal: comercial, industrial, transporte, construcción, agroindustria, servicios financieros, etc., de acuerdo con lo establecido en el código internacional CIU | Certificado de existencia y representación legal vigente de la Cámara de Comercio o de la entidad competente Fotocopia del NIT Firma y huella digital del representante legal Fotocopia del documento de identificación del representante legal y de las personas con firma autorizada. |
| | CUENTA CORRIENTE | | Dirección, teléfono, fax y ciudad actual de la oficina principal, agencias y sucursales | + Lista de los principales proveedores y clientes, incluyendo su ubicación geográfica. Lista de los principales socios y/o accionistas |
| INFORMACIÓN FINANCIERA | CUALQUIER PRODUCTO | | Origen de los fondos con los cuales abre la cuenta o el CDT | Declaración voluntaria de origen de fondos |
| | CUENTA CORRIENTE | | Ingresos y egresos mensuales Total activos y pasivos (vehículo, bienes raíces, semovientes). Valor de las prendas, hipotecas y/o préstamos | + Declaración de renta del último periodo gravable disponible, estados financieros del mes inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de apertura. Extractos de los tres últimos meses, disponibles (cuenta corriente y/o de ahorros) |

2. PERSONA JURÍDICA (continuación)



«Por la cual se establecen las normas de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita».

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

CAPITULO I

DE LA EXTINCION DEL DOMINIO

Artículo 1. Del concepto. Para los efectos de esta ley, se entiende por extinción del dominio la pérdida de este derecho en favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular.

Artículo 2. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:

1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.
2. Perjuicio del Tesoro Público que provenga de los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de

efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son hechos que deterioran la moral social los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico y social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada, o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.
4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas, salvo que sean objeto de decomiso o incautación ordenada dentro del proceso penal mediante providencia en firme.
5. También procederá la extinción del dominio cuando judicialmente se haya declarado la ilicitud del origen de los bienes en los eventos consagrados en los incisos 2 y 3 del artículo 7 de esta ley, y en el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 3. De los bienes. Para los efectos de esta ley se entenderá por bienes susceptibles de extinción del dominio todo derecho o bien mueble o inmueble, con excepción de los derechos personalísimos.

La extinción del dominio también se declarará sobre el producto de los bienes adquiridos en las circunstancias de que trata esta ley, los derivados de éstos, sus frutos, sus rendimientos, y sobre los recursos provenientes de la enajenación o permuta de bienes adquiridos ilícitamente

o destinados a actividades delictivas o considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito. Cuando se mezclen bienes de ilícita procedencia con bienes adquiridos lícitamente, la extinción del dominio procederá sólo hasta el monto del provecho ilícito.

Artículo 4. De los bienes adquiridos por acto entre vivos.

Tratándose de bienes transferidos por acto entre vivos, procederá la extinción del dominio cuando un tradente los haya adquirido en los casos contemplados en el artículo segundo y los adquirentes hubieren actuado con dolo o culpa grave respecto del conocimiento de las causales allí contempladas.

En los casos en que se hubiere constituido fiducia o encargo fiduciario sobre los bienes respecto de los cuales se pretenda la extinción del dominio, bastará para su procedencia que alguna de las causales señaladas en el artículo segundo sea predicable del encargante o constituyente, sin perjuicio de los derechos de la fiduciaria a su remuneración y de los derechos de beneficiarios y terceros que no hubieren actuado con dolo o culpa grave.

Las disposiciones de esta ley no afectarán los derechos que con arreglo a las leyes civiles se deriven de los negocios jurídicos válidamente celebrados ni los de su invalidez, nulidad, resolución, rescisión e ineficacia para las partes y terceros, ni los inherentes al pago de lo no debido ni al ejercicio de las profesiones liberales.

Artículo 5. De los bienes adquiridos por causa de muerte.

Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa de muerte, cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por el causante en cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 2 de la presente ley.

En el evento de haberse efectuado la partición y realizado el pago del impuesto por el adjudicatario, así como la ganancia ocasional, si la hubiere, el Estado deberá devolverlos para que sea procedente la ejecución de la sentencia.

Artículo 6. De los bienes equivalentes. Cuando no resultare posible ubicar, incautar o aprehender otros bienes determinados sobre los cuales verse la extinción del dominio, al momento de la sentencia podrá el juez declarar extinguido el dominio sobre un valor equivalente. Lo dispuesto en el presente artículo no podría interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Parágrafo. Antes de la sentencia de primera instancia, no podrá el juez que esté conociendo de la acción de extinción del dominio aprehender, ocupar u ordenar la práctica de medidas cautelares sobre bienes equivalentes.

CAPITULO II

DE LA ACCION DE EXTINCION DEL DOMINIO

Artículo 7. De la naturaleza de la acción. La acción de extinción del dominio de que trata esta ley es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, y procederá contra el titular real o presunto o los beneficiarios reales de los bienes, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, y sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. En ningún caso se podrá intentar la acción de extinción del dominio en forma independiente, si hay actuaciones penales en curso.

Si la acción penal se extingue o termina sin que se haya proferido decisión sobre los bienes, continuará el trámite ante el mismo funcionario que conoció del proceso penal y procederá la declaración de extinción del dominio de aquellos bienes adquiridos en cualquiera de las circunstancias de que trata esta ley.

Si terminando el proceso penal aparecieren nuevos bienes, en cualquier caso procederá la acción de extinción del dominio ante el mismo funcionario que conoció de la acción penal correspondiente.

Artículo 8. De la legitimación. La Dirección Nacional de Estupefacientes, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con su especialidad, de oficio, a petición de cualquier persona, o de las entidades o autoridades extranjeras u organismos internacionales, ejercerán la acción de extinción del dominio sobre los bienes adquiridos en las circunstancias de que trata la presente ley. La Fiscalía General de la Nación la iniciará de oficio.

Parágrafo. De conformidad con los tratados y convenios de colaboración recíproca, las entidades o autoridades extranjeras u organismos internacionales habilitados para ello podrán solicitar que se inicie la acción de extinción de dominio de que trata la presente ley.

Artículo 9. De la prescripción. La acción de extinción del dominio prescribirá en el término de veinte (20) años, contados desde la última adquisición o destinación ilícita de los bienes, cualesquiera sean.

Artículo 10. De la autonomía. La acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales.

La declaración de extinción del dominio corresponderá a los jueces competentes para conocer de las actuaciones penales. En consecuencia, las entidades estatales legitimadas, en los casos en que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, promoverán la acción consagrada en esa ley cuando la actuación penal termine por cualquier causa y no se haya declarado en ésta la extinción del dominio sobre los bienes considerados como producto, efecto, instrumento u objeto del delito o se hubiere declarado sólo sobre una parte. Por las demás causales, dichas entidades estatales deberán instaurar la acción con absoluta independencia de la actuación penal.

La providencia que declare la ilicitud de la adquisición del dominio de los bienes en un proceso penal y la sentencia condenatoria que así lo establezca constituyen prueba de la ilícita procedencia de los bienes.

ANEXO 8

LEY 365

21 DE FEBRERO DE 1997

Por la cual se establecen normas tendientes a combatir la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Artículo 1. El numeral cuarto (4^o) del artículo 42 del Código Penal quedará así:

“4. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, industria o comercio”.

Artículo 2. El Código de Procedimiento Penal tendrá un artículo 61A, del siguiente tenor:

“Artículo 61A. Cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público. Cuando en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público”.

Artículo 3. El artículo 44 del Código Penal quedará así:

“Duración de la pena. La duración máxima de la pena es la siguiente:

- Prisión hasta sesenta (60) años.
- Arresto hasta ocho (8) años.
- Restricción domiciliaria hasta cinco (5) años.
- Interdicción de derechos y funciones públicas hasta diez (10) años.
- Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, industria o comercio hasta cinco (5) años.
- Suspensión de la patria potestad hasta quince (15) años”.

Artículo 4. El artículo 58 del Código Penal quedará así:

“Artículo 58. Prohibición del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesión u oficio. Siempre que se cometa un delito con abuso del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesión u oficio, o contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez, al imponer la pena, podrá privar al responsable del derecho de ejercer la mencionada industria, comercio, arte, profesión u oficio, por un término hasta de cinco años”.

Artículo 5. El Código Penal tendrá un artículo con el número 63A, del siguiente tenor:

“Artículo 63A. Agravación por el lugar de comisión del delito. Cuando el hecho punible fuere dirigido o cometido total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del

territorio nacional, la pena se aumentará hasta la mitad, siempre que dicha circunstancia no constituya hecho punible autónomo ni elemento del mismo”.

Artículo 6. El artículo 176 del Código Penal tendrá un párrafo del siguiente tenor:

“**Parágrafo.** Cuando se ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación de hechos punibles de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión”.

Artículo 7. El artículo 177 del Código Penal quedará así:

“**Artículo 177. Receptación.** El que sin haber tomado parte en la ejecución de un delito adquiera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se aumentará de una tercera parte a la mitad”.

Artículo 8. El artículo 186 del Código Penal quedará así:

“**Artículo 186. Concierto para delinquir.** Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de (3) a seis (6) años.

Si actuaren en despoblado o con armas, la pena será prisión de tres (3) a nueve (9) años”.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios, la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

La pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir”.

Artículo 9. El Título VII del Libro II del Código Penal tendrá un Capítulo Tercero denominado “Del lavado de activos”, con los siguientes artículos:

“Artículo 247A. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, le (sic) dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por ese solo hecho, en pena de prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes que conforme al párrafo del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, hayan sido declaradas de origen ilícito.

Parágrafo 1. El lavado de activos será punible aun cuando el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados

anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

Parágrafo 2. Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeran mercancías al territorio nacional.

Parágrafo 3. El aumento de pena previsto en el parágrafo anterior, también se aplicará cuando se introdujeran mercancías de contrabando al territorio nacional.

Artículo 247B. Omisión de control. El empleado o directivo de una institución financiera o de una cooperativa de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por los artículos 103 y 104 del Decreto 663 de 1993 para las transacciones en efectivo incurrirá, por ese solo hecho, en pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 247C. Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo 247A se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por persona que pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos, y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.

Artículo 247D. Imposición de penas accesorias. Si los hechos previstos en los artículos 247A y 247B fueren realizados por empresario de cualquier industria, administrador, empleado, directivo o intermediario en el sector financiero, bursátil o asegurador según el caso, servidor

público en el ejercicio de su cargo, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de pérdida del empleo público u oficial o la de prohibición del ejercicio de su arte, profesión u oficio, industria o comercio según el caso, por un tiempo no inferior a tres (3) años ni superior a cinco (5)".

Artículo 10. El literal d) del artículo 369A del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“d) Delación de dirigentes de organizaciones delictivas acompañada de pruebas eficaces de su responsabilidad”.

“**Artículo 11.** El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“**Artículo 37. Sentencia anticipada.** Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada.

Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. Los cargos formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.

Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales.

El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera (1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad.

También se podrá dictar sentencia anticipada cuando, proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública, el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una octava (1/8) parte de la pena”.

Artículo 12. El artículo 37B del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“**Artículo 37B. Disposiciones comunes.** En los casos de los artículos 37 y 37A de este Código, se aplicarán las siguientes disposiciones:

1. **Concurrencia de rebajas.** La rebaja de pena prevista en el artículo 299 de este Código podrá acumularse a aquella contemplada en el artículo 37 o a la señalada en el artículo 37A, pero en ningún caso podrán estas últimas acumularse entre sí.
2. **Equivalencia a la resolución de acusación.** El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado en el caso del artículo 37 o el acta que contiene el acuerdo a que se refiere el artículo 37A, son equivalentes a la resolución de acusación.
3. **Ruptura de la unidad procesal.** Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden realizarse aceptaciones o acuerdos parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal.
4. **Interés para recurrir.** La sentencia es apelable por el fiscal, por el Ministerio Público, por el procesado y por su defensor, aunque por estos dos últimos sólo respecto de la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, y la extinción del dominio sobre bienes.
5. **Exclusión del tercero civilmente responsable y de la parte civil.** Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contem-

plados en los artículos 37 o 37A de este Código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil”.

Artículo 13. El artículo 71 del Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo numeral del siguiente tenor:

“6. De los procesos por los delitos de concierto para delinquir en los casos contemplados en el inciso 3º del artículo 186 del Código Penal, así como de los procesos por los delitos de que tratan los artículos 247A y 247B del Código Penal”.

Artículo 14. El artículo 340 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“Artículo 340. Extinción del derecho de dominio. Por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del patrimonio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Para estos efectos, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, así como los delitos de secuestro simple, secuestro extorsivo, extorsión, lavado de activos y testaferrato, los delitos contra el orden económico y social, delitos contra los recursos naturales, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada, se considera que causan grave deterioro de la moral social. En todo caso quedan a salvo los derechos de terceros de buena fe. Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extinción del dominio, sin excepción alguna, ingresarán al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Parágrafo. En las investigaciones y procesos penales adelantados por delitos de extorsión, secuestro extorsivo, testaferrato, lavado de activos, delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupe-

facientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, enriquecimiento ilícito de servidores públicos o de particulares, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados en moneda, ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico, hurto sobre efectos y enseres destinados a la seguridad y la defensa nacionales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, la declaración de que un bien mueble o inmueble es de origen ilícito es independiente de la responsabilidad penal del sindicado y de la extinción de la acción penal o de la pena. En estos casos procederá la extinción del dominio, de conformidad con lo dispuesto en la ley que regula esta acción real.

Salvo que el proceso termine por demostración de la inexistencia del hecho, la declaración de que un bien mueble o inmueble es de origen ilícito se hará en la resolución inhibitoria, en la resolución de preclusión de la investigación, en el auto de cesación de procedimiento o en la sentencia. En la misma providencia y con miras al adelantamiento del proceso de extinción del derecho de dominio se ordenará el embargo y secuestro preventivo de los bienes declarados de origen ilícito”.

Artículo 15. El artículo 369H del Código de Procedimiento Penal tendrá un párrafo del siguiente tenor:

“Parágrafo. Quien sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por organizar, fomentar, promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar el concierto o la asociación, en concurso con otro delito, podrá acogerse a la sentencia anticipada o audiencia especial y tendrá derecho a las rebajas por confesión y por colaboración eficaz con la justicia, pero en ningún caso la pena que se le imponga podrá ser inferior a la que corresponda en concreto, sin disminuciones para el delito más grave”.

Artículo 16. El numeral 4º del artículo 508 del Código de Procedimiento Penal quedará así:

“4. Si se tratare de la prohibición de ejercer una industria, comercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió”.

Artículo 17. El artículo 33 de la Ley 30 de 1986 quedará así:

“**Artículo 33.** El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales”.

Artículo 18. El artículo 34 de la Ley 30 de 1986 quedará así:

“**Artículo 34.** El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto-Ley 522 de 1971 (artículos 208, ordinal 5^o, y 214, ordinal 3^o del Código Nacional de Policía).

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, veinte (20) gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales”.

Artículo 19. El artículo 40 de la Ley 30 de 1986 quedará así:

“**Artículo 40.** En la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento por alguno de los delitos previstos en los artículos 33, 34 y 43 de esta ley, el funcionario judicial decretará el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no se hallen incautados con ocasión del hecho punible, en cuantía que

considere suficiente para garantizar el pago de la multa prevista en tales artículos, y designará secuestre. Una vez decretados el embargo y secuestro, tanto su práctica como el régimen de formulación, decisión y trámite de las oposiciones a la misma, se adelantarán conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

En la sentencia condenatoria se ordenará el remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso, para lo cual se tendrán en cuenta los trámites prescritos en el Código de Procedimiento Civil”.

Artículo 20. El artículo 43 de la Ley 30 de 1986 quedará así:

“**Artículo 43.** El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto-Ley 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto-Ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas.

Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales”.

Artículo 21. Adiciónase al artículo 209 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el siguiente párrafo:

“Parágrafo. Cuando los actos violatorios a que hace referencia el presente artículo recaigan sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) a favor del Tesoro Nacional. Esta suma se reajustará en la forma prevista en el inciso primero del presente artículo.

Esta multa podrá ser sucesiva mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicará sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar por cada infracción cometida.

Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá exigir la remoción inmediata del infractor y comunicar esta determinación a todas las entidades vigiladas”.

Artículo 22. Adiciónase el artículo 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente numeral:

“3. Disposiciones relativas a la prevención de conductas delictivas. Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de mil millones de pesos (\$1.000.000.000).

Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá ordenar al establecimiento multado que destine una suma hasta de mil millones de pesos (\$1.000.000.000) a la implementación de mecanismos correctivos de carácter interno que deberá acordar con el mismo organismo de control.

Estas sumas se reajustarán en la forma prevista en el inciso primero del presente artículo”.

Artículo 23. Entidades cooperativas que realizan actividades de ahorro y crédito. Además de las entidades Cooperativas de Grado Superior que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, también estarán sujetas a lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito.

Para las entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas –Dancoop– determinará las cuantías a partir de las cuales deberá dejarse constancia de la información relativa a transacciones en efectivo.

Así mismo, reglamentará y recibirá el informe periódico sobre el número de transacciones en efectivo a que hace referencia el artículo 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como también el informe mensual sobre registro de las múltiples transacciones en efectivo a que hace referencia el numeral 2º del artículo 103 del mismo Estatuto, que realicen las entidades cooperativas que no se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Las obligaciones contenidas en este artículo empezarán a cumplirse en la fecha que señale el Gobierno Nacional.

Artículo 24. Modifícase el literal a) del numeral 1º del artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

“a) La identidad, la firma y la dirección de la persona que físicamente realice la transacción. Cuando el registro se lleve en forma electrónica, no se requerirá la firma”.

Artículo 25. El artículo 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero quedará así:

“Artículo 104. Información periódica. Toda institución financiera deberá informar periódicamente a la Superintendencia Bancaria el número de transacciones en efectivo a las que se refiere el artículo anterior y su localización geográfica, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta ese organismo”.

Artículo 26. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

En especial, deróganse los literales e), f) y h) del artículo 369A, el artículo 369B y el inciso del artículo 369E del Código de Procedimiento Penal; los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley 104 de 1993; el artículo 2º de la Ley 241 de 1995; el inciso 2º del artículo 28 del Código Penal, modificado por el artículo 31 de la Ley 40 de 1993 y el artículo 41 de la Ley 30 de 1986.

Subróganse el artículo 44 de la Ley 30 de 1986, el artículo 7º del Decreto 180 de 1988 –adoptado como legislación permanente por el artículo 4º del Decreto extraordinario 2266 de 1991–, el artículo 1º del Decreto-Ley 1194 de 1989 –adoptado como legislación permanente por el artículo 6º del Decreto 2266 de 1991–, el artículo 5º de la Ley 40 de 1993 y el inciso 4º del artículo 32 de la Ley 40 de 1993, que modificó el artículo 355 del Código Penal de 1980.

Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley sólo podrán concederse los beneficios por colaboración con la justicia previstos en la Ley 81 de 1993, en los términos en que es modificada por la presente ley.

Quienes al momento de entrar en vigencia la presente ley hubiesen solicitado de las autoridades judiciales competentes el reconocimiento de alguno de los beneficios consagrados en otras leyes, siempre y cuando se den los presupuestos para su aplicación, permanecerán sometidos para efectos de la regulación de tales beneficios a dicha normatividad.

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 21 de febrero de 1997.

ANEXO 9

ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO

- DECRETO 663 DE 1993
(Artículos 102 a 107)**
- CIRCULAR EXTERNA 061 DE 1996,
DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA**
- CIRCULAR EXTERNA 052 DE 1993,
DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA**

DECRETO 663 DE 1993
(Artículos 102 a 107)

CAPITULO XVI

PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

Artículo 102. Régimen general

- 1. Obligación de control a actividades delictivas.** Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, para dar apariencia de legalidad a las actividades activas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

- 2. Mecanismos de control.** Para los efectos del numeral anterior, esas instituciones deberán adoptar mecanismos y reglas de conducta que deberán observar sus representantes legales, directores, administradores y funcionarios, con los siguientes propósitos:
 - a) Conocer adecuadamente la actividad económica que desarrollan sus clientes, su magnitud, las características básicas de las transacciones en que se involucran corrientemente y, en particular,

la de quienes efectúan cualquier tipo de depósitos a la vista, a término o de ahorro, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario; o los depositan en cajillas de seguridad;

- b) Establecer la frecuencia, volumen y características de las transacciones financieras de sus usuarios;
- c) Establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarden relación con la actividad económica de los mismos;
- d) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación, o a los cuerpos especiales de policía judicial que ésta designe, cualquier información relevante sobre manejo de fondos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas, y
- e) Los demás que señale el gobierno nacional.

3. Adopción de procedimientos. Para efectos de implantar los mecanismos de control a que se refiere el numeral anterior las entidades vigiladas deberán diseñar y poner en práctica procedimientos específicos, y de designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos.

Los mecanismos de control y auditoría que adopten las instituciones deberán ser informados a la Superintendencia Bancaria a más tardar el 30 de diciembre de 1992.

Este organismo podrá en cualquier tiempo formular observaciones a las instituciones cuando juzgue que los mecanismos adoptados no son suficientes para los propósitos indicados en el numeral segundo del

presente artículo, con el fin de que éstas introduzcan los ajustes correspondientes. Cualquier modificación a los mecanismos adoptados deberá ser informada a la Superintendencia Bancaria para evaluar su adecuación a los propósitos anotados.

4. Alcance y cobertura del control. Los mecanismos de control y auditoría de que trata este artículo sólo podrán versar exclusivamente sobre las transacciones, operaciones o saldos cuyas cuantías sean superiores a las que se fijen como razonables y suficientes. Tales cuantías se establecerán en el mecanismo que adopte cada entidad atendiendo al tipo de negocios que realiza, amplitud de su red, los procedimientos de selección de clientes, el mercadeo de sus productos, capacidad operativa y nivel de desarrollo tecnológico.

Artículo 103. Control de las transacciones en efectivo

1. Transacciones sujetas a control. Toda institución financiera deberá dejar constancia, en formulario especialmente diseñado al efecto, de la información relativa a las transacciones en efectivo que realice, en moneda legal o extranjera cuyo valor sea superior a las cuantías que periódicamente señale la Superintendencia Bancaria.

Estos formularios deberán contener, por lo menos:

- a) La identidad, la firma y dirección de la persona que físicamente realice la transacción;
- b) la identidad y la dirección de la persona en nombre de la cual se realice la transacción;
- c) la identidad del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere;

- d) la identidad de la cuenta afectada por la transacción, si existiere;
- e) el tipo de transacción de que se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de cajero u órdenes de pago, transferencias, etc);
- f) la identificación de la institución financiera en la que se realizó la transacción,
- g) la fecha, el lugar, la hora y el monto de la transacción.

Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda legal como extranjera que en su conjunto superen cierto monto, serán consideradas como una transacción única si son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante el día o en cualquier otro plazo que fije la Superintendencia Bancaria.

Las transacciones realizadas entre instituciones financieras sujetas a control y vigilancia, no requerirán registro especial.

2. Control de múltiples transacciones en efectivo. Cuando el giro ordinario de los negocios de un cliente determinado implique la realización corriente de numerosas transacciones en efectivo, la entidad financiera respectiva podrá llevar un registro de transacciones en efectivo en lugar del formulario individual al que se refiere el numeral anterior, en el cual se anotará, por lo menos, toda la información que debe consignarse en dicho formulario, salvo por lo previsto en el numeral 1o. de la letra a) de la presente disposición. Las entidades financieras que decidan llevar dichos registros deberán informar mensualmente a la Superintendencia Bancaria las personas que sean objeto de este procedimiento.

Artículo 104. Información periódica. Toda institución financiera deberá informar periódicamente a la Superintendencia Bancaria el

número de transacciones en efectivo a las que se refiere el numeral anterior y su localización geográfica conforme a las instrucciones que al efecto imparta ese organismo.

Artículo 105. Reserva sobre la información reportada. Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de policía judicial que ésta designe la información a que se refiere la letra d) del numeral 2o. del artículo 102, las instituciones financieras sólo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo soliciten los directores regionales o seccionales de la Fiscalía General de la Nación, quienes podrán ordenarlo durante las indagaciones previas o en la etapa de instrucción, directamente o por conducto de las entidades que cumplen funciones de policía judicial, exclusivamente para efectos de investigaciones de delitos cuya realización les compete (2400).

Las autoridades que tengan conocimiento de las informaciones y documentos a que se refieren los artículos anteriores deberán mantener reserva sobre los mismos.

Las entidades y sus funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado, o intenten efectuar operaciones sospechosas, que han comunicado a la Fiscalía General de la Nación información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha información.

Artículo 106. Modificación de normas sobre control. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 1o. del artículo 102 y numeral 1o. del artículo 103 del presente estatuto, el gobierno nacional podrá modificar las disposiciones de este capítulo relacionadas con los requisitos y procedimientos que deben adoptar con tal propósito las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (2400, 2420).

Artículo 107. Sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores por la no adopción o aplicación de los mecanismos de control dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las consecuencias penales a que hubiere lugar.

MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS Y REPORTE DE TRANSACCIONES

Cir. Externa 61/96, Superbancaria.

6. Mecanismos de control y prevención de lavado de activos

6.1 Responsabilidad de las entidades vigiladas. Todas las entidades vigiladas están en la obligación de implementar un sistema integral para la prevención de lavado de activos, SIPLA.

Este sistema integral debe comprender medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de cualquier operación en efectivo, documentaria, de servicios financieros y otras, sean utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

6.2 Presupuestos para el adecuado cumplimiento del presente instructivo. Para el adecuado cumplimiento del presente instructivo, las entidades vigiladas, sus representantes legales, directivos, administradores, empleados y revisores fiscales tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes presupuestos:

- Se hace necesario implementar medidas de control para la prevención de actividades delictivas no sólo con respecto a transacciones en efectivo, en moneda legal o extranjera, sino también con respecto a las documentarias y frente a toda clase de servicios o productos financieros y del sistema asegurador.
- Los activos ilícitos son aquellos que provienen de cualquier delito, como, por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico.

- Es deber de los directivos de las entidades vigiladas colaborar con la Administración de Justicia no sólo atendiendo los requerimientos expresos de las autoridades, sino auxiliándolas oficiosamente en la lucha contra el delito.
- La reserva bancaria no es oponible a las solicitudes de información formuladas de manera específica por las autoridades dentro de las investigaciones de su competencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Nacional y en los artículos 63 del Código de Comercio, 275 del Código de Procedimiento Penal y 288 del Código de Procedimiento Civil.
- Es necesario contribuir al fortalecimiento del sistema de pagos de la economía y al aseguramiento de la confianza del público en el sector financiero y asegurador, velando por la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones.
- Se debe asegurar el estricto y oportuno cumplimiento de las normas legales encaminadas a prevenir y detectar el lavado de activos, particularmente de las contenidas en los artículos 102 a 105 del estatuto orgánico del sistema financiero, a efecto de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional del sistema financiero y asegurador colombiano.

6.3 Mecanismos de control

6.3.1 Conocimiento de clientes y conocimiento del mercado.

El conocimiento de los clientes y del mercado le permite a una entidad protegerse adecuadamente del lavado de activos a través de sus operaciones.

Concepto de cliente. Son clientes de una entidad vigilada, aquellas personas naturales o jurídicas con las que se establece y/o se mantiene una relación contractual de carácter financiero.

Conocimiento del cliente. De acuerdo con las características particulares de los diferentes productos o servicios que ofrezca, cada entidad deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de control que permitan alcanzar un conocimiento adecuado de todos sus clientes. En cuanto a su identificación y la determinación de su actividad económica a efecto de definir su perfil financiero.

El conocimiento del cliente debe empezar por el registro de entrada al sistema y el cumplimiento de los requisitos que determine la entidad para cada uno de los productos a través de los cuales se puede vincular. Es necesario que la entidad indague, por los medios que considere más eficaces, acerca de datos personales y comerciales relevantes.

Todos estos datos, deben verificarse, estar soportados adecuadamente y actualizarse en forma permanente.

La política de conocimiento del cliente supone el cumplimiento de requisitos específicos establecidos en normas de carácter general para acceder a cualquier producto o servicio, particularmente el de las proferidas por el Banco de la República que reglamentan los aspectos cambiarios, y

Conocimiento del mercado. Cada entidad deberá diseñar y poner en práctica mecanismos de control que le permitan alcanzar un conocimiento adecuado del mercado correspondiente a cada clase de producto o servicio que ofrezca, para determinar las características usuales a las transacciones que se desarrollan dentro del mismo y compararlas con las transacciones que realicen quienes negocien con esos productos o servicios.

6.3.2 Control de operaciones

- a) **Segmentación del mercado.** Con el fin de lograr un adecuado control de las operaciones que realizan, las entidades vigiladas

deben adoptar parámetros de segmentación, o cualquier otro instrumento de eficacia, por niveles de riesgo, por clase de producto, o por cualquier otro criterio, que les permita identificar las operaciones inusuales.

La adecuada segmentación debe permitirle a la entidad determinar el rango en el cual se desarrollan normalmente las operaciones que realizan los clientes y las características del mercado.

- b) **Consolidación de operaciones por cliente.** Para determinar las operaciones inusuales es necesario consolidar, dentro de cada mes calendario, todas las operaciones de un mismo cliente.

Las operaciones débito y crédito no deben sumarse entre sí;

- c) **Señales de alerta.** Para facilitar la detección de las operaciones inusuales, cada entidad deberá definir en su Manual de Procedimientos un listado de señales de alerta.

Estas señales de alerta deben considerar la naturaleza específica de cada entidad, las diversas clases de productos o servicios que ofrecen los niveles de riesgo, o cualquier otro criterio que a juicio de la entidad resulte adecuado, y

- d) **Desarrollo tecnológico.** Para facilitar la detección de las operaciones inusuales, las entidades vigiladas deben implementar niveles de desarrollo tecnológico que aseguren la mayor cobertura y alcance de sus mecanismos de control.

El nivel de tecnología implementado por las entidades vigiladas deberá permitirles hacer un cubrimiento de operaciones realizadas en todas sus oficinas, con el fin de consolidar la información relacionada con transacciones efectuadas por un mismo cliente.

6.3.3 Detección de operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas

- a) **Concepto.** Son inusuales aquellas operaciones cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de los clientes o, que por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos para determinado rango de mercado.
- b) **Detección de operaciones inusuales.** El perfil básico de operaciones de un cliente debe inscribirse dentro del segmento de mercado que corresponda a las características de sus transacciones, en tal forma que se detecten las operaciones inusuales con la ayuda de tecnología adecuada, con base en señales de alerta predefinidas y en el criterio prudente de la entidad.

El conocimiento del mercado y su segmentación, de acuerdo con los lineamientos determinados por la entidad y la identificación de las transacciones que se salgan de esos parámetros, apoyado por un adecuado nivel de desarrollo tecnológico, contribuyen también a la identificación de operaciones inusuales, y

- c) **Determinación de operaciones sospechosas.** La confrontación de las operaciones detectadas como inusuales, con la información acerca de los clientes y los mercados, debe permitir, conforme el buen criterio de la entidad, identificar si una operación es o no sospechosa.

6.3.4 Control de transacciones en efectivo

- a) **Monto de las transacciones sujetas a registro individual.** De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 del estatuto orgánico del sistema financiero, toda institución financiera debe dejar constancia, en formulario especialmente diseñado para el efecto, de la información relativa a transacciones en

efectivo cuyo valor, a partir de la entrada en vigencia de la presente circular, sea igual o superior a las siguientes sumas:

- **Instituciones financieras**, diez millones de pesos (\$10.000.000) si es en moneda legal o diez mil dólares (US\$10.000) o su equivalente en otras monedas, según la tasa de cambio del día en que se realice la operación conforme indique el Banco de la República.
- **Casas de cambio plenas**, tres mil dólares (US\$3.000) en el caso de giros, y cinco mil dólares (US\$5.000) para operaciones de compra y venta.
- **Casas de cambio fronterizas**, el equivalente a dos mil dólares (US\$2.000) en la moneda del país vecino.

Este monto será actualizado anualmente por la Superintendencia Bancaria.

b) Determinación de transacciones múltiples como una sola operación. Aquellas transacciones que se realicen en una o varias oficinas, durante un (1) mes calendario, por o en beneficio de una misma persona, que en su conjunto iguallen o superen las cuantías que se indican a continuación, deberán considerarse como transacción única.

- **Instituciones financieras:** cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) o cincuenta mil dólares (US\$50.000) o su equivalente.
- **Casas de cambio plenas o cambistas:** diez mil dólares (US\$10.000).
- **Casas de cambio fronterizas:** el equivalente a dos mil dólares (US\$2.000) en la moneda del país vecino.

Estas transacciones múltiples deben incluirse dentro de los reportes consolidados que trimestralmente dirigen las entidades financieras a la Superintendencia Bancaria sobre operaciones en efectivo;

- c) **Organización interna de la información.** Las instituciones financieras y las casas de cambio de todo tipo están obligadas a conservar debidamente organizados por orden cronológico y a disposición de las autoridades, los formularios establecidos en el numeral 1o. del artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La información contenida en esos formularios deberá organizarse internamente por orden alfabético o número de identificación, en forma centralizada, de manera que permita atender requerimientos de las autoridades y pueda ser utilizada eficientemente por cada entidad para la detección de operaciones inusuales o sospechosas, y

- d) **Clientes exceptuados del registro individual.** Aquellos clientes que por el giro normal de sus negocios realicen múltiples transacciones en efectivo, habiéndose establecido que sus actividades son lícitas, pueden ser excluidos del diligenciamiento del formulario individual.

En estos casos, se debe mantener un registro especial sobre las características específicas y el volumen de los negocios de estos clientes, en el que consten las razones por las cuales fueron exonerados.

Las entidades financieras deben incluir en sus Manuales de Procedimientos los requisitos generales que deben cumplir estos clientes.

Este régimen de excepción debe basarse en el estricto conocimiento del cliente.

6.3.5 Capacitación. Las entidades vigiladas están en la obligación de desarrollar programas de capacitación dirigidos a todos sus funcionarios, con el fin de instruirlos en el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de activos, y, particularmente, para indicarles cuáles son los mecanismos de control desarrollados por la entidad y su aplicación y cumplimiento.

Esos programas de capacitación deben ser constantemente revisados y actualizados por la entidad, de acuerdo con sus necesidades internas y la legislación vigente.

6.4 Reportes

6.4.1 Relativos a las transacciones en efectivo. El control a las transacciones en efectivo debe permitirle a la entidad detectar operaciones inusuales además de ser un sustento estadístico que le proporciona a la Superintendencia Bancaria un elemento adicional en la determinación de sus políticas de supervisión.

El reporte consolidado de transacciones en efectivo dirigido a la Superintendencia Bancaria no exime a la entidad financiera ni a las casas de cambio de la detección de las operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con efectivo, ni de su reporte a la Fiscalía General de la Nación.

- a) **Reporte consolidado a la Superintendencia Bancaria.** Toda institución financiera y casa de cambio de cualquier índole deberá remitir un informe global trimestral sobre el número de transacciones en efectivo, a la Unidad Especial para la Prevención de Lavado de Activos, mediante el diligenciamiento de la proforma F.0000-11 conforme las instrucciones contenidas en la página 273 del Anexo 1 de la Circular 100 de 1995, y

- b) **Cientes exceptuados del registro individual de transacciones en efectivo.** De acuerdo con lo establecido en el numeral 2o. del artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades financieras y las casas de cambio están en la obligación de informar mensualmente a la Superintendencia Bancaria los nombres de todos los clientes exonerados de llenar el formulario de transacciones en efectivo.

Esa información debe remitirse a la Superintendencia Bancaria de acuerdo con las instrucciones impartidas en la página 273 del Anexo 1 de la Circular 100 de 1995.

6.4.2 Reporte de transacciones sospechosas a la Fiscalía General de la Nación

- a) **Aspectos generales.** Una vez se determine que una operación es sospechosa deberá seguirse el trámite, previa y debidamente reglamentado en el Manual de Procedimientos, para hacer el respectivo reporte a la Fiscalía General de la Nación.

Para efectos del reporte no se requiere que la institución vigilada tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, o que los recursos que maneja provienen de esas actividades, ni tampoco identificar el tipo penal; sólo se requiere que la entidad considere que las operaciones son sospechosas.

Bajo el entendido de que el reporte de operaciones sospechosas a la fiscalía no constituye denuncia penal, no se exige que deba estar suscrito por funcionario alguno de la entidad;

- b) **Contenido del reporte.** El reporte de transacciones sospechosas deberá remitirse a la Fiscalía General de la Nación mediante formato especial, de acuerdo con las instrucciones impartidas en la circular 100 (Anexo II, pág. 38), utilizando el formato que aparece en la página 39 del mismo anexo.

Los documentos originales de soporte se conservarán con las debidas seguridades, a efecto de hacerlos llegar de manera completa y oportuna a la fiscalía cuando ésta los solicite, y

- c) **Reporte de operaciones rechazadas por la entidad.** En aquellos casos en que de conformidad con el ordenamiento jurídico, la entidad se abstenga de realizar una transacción que se estime como sospechosa, subsiste la obligación de reportarla a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las instrucciones impartidas en esta circular y con el fin de contribuir a la protección del sector financiero y asegurador, en general.

6.5 Código de conducta. Las “reglas de conducta” a las que hace referencia el numeral 2o. del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero deben estar contenidas en un código de conducta de imperativo cumplimiento, de manera que sus postulados se observen en cada acto, por convicción y como manifestación de un propósito preventivo.

El código de conducta debe contener los criterios que sean necesarios para resolver los “conflictos de interés” y anteponer la observancia de unos principios éticos al logro de metas comerciales, comprometiendo con ello a toda la entidad.

Sin perjuicio de las funciones sancionatorias que competen a esta superintendencia, las entidades deben contemplar procedimientos sancionatorios adecuados frente a la inobservancia del código de conducta.

Corresponde a la junta directiva adoptar el código de conducta, disponer su acatamiento y difusión, y aprobar oportunamente las actualizaciones que sean pertinentes.

6.6 Manual de procedimientos

6.6.1 Generalidades. Los mecanismos de control adoptados por la entidad vigilada deben consagrarse en un manual de procedimientos específicos, aprobado por la junta directiva, que considere la naturaleza jurídica y las características propias de cada entidad y de sus diferentes productos. Debe constituir un listado de órdenes claras, como desarrollo de la política institucional de la entidad contra el lavado de activos.

6.6.2 Contenido básico. Todos los aspectos mencionados en esta circular deben estar contenidos en este manual. Adicionalmente se deben incluir los siguientes:

- Políticas coordinadas de control y canales de comunicación entre la oficina principal y sus sucursales y agencias.
- Procedimientos para controlar el cumplimiento de las normas contenidas en el manual.
- Instancias de reporte y consulta para los funcionarios de la entidad con relación a sus actividades preventivas del lavado de activos.
- Desarrollo de los demás elementos con que cuenta la entidad para protegerse del lavado de activos, como programas de capacitación interna; funciones y categoría del oficial de cumplimiento; funciones de la auditoría y de la revisoría fiscal; responsabilidades de cada empleado en la detección y reporte interno de operaciones inusuales y sospechosas; sanciones y correctivos por el incumplimiento de los procedimientos; conservación de registros.
- Todos los demás que la entidad vigilada considere pertinentes.

6.6.3 Actualización. Los manuales de procedimientos deben ser actualizados constantemente, de acuerdo con las necesida-

des de la institución. Cualquier modificación a los mecanismos adoptados deberá ser informada a la Superintendencia Bancaria.

El no pronunciamiento por parte de la Superintendencia Bancaria acerca del contenido de esos manuales no implica que éstos se estimen como suficientes.

6.7 Auditoría sobre los mecanismos de control

6.7.1 Oficial de cumplimiento

- a) **Concepto.** Las entidades vigiladas tienen la obligación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3o. del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de designar un oficial de cumplimiento.

Este funcionario debe ser designado por la junta directiva, ser de alto nivel administrativo, tener capacidad decisoria, estar apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico que le permita cubrir las diferentes áreas de gestión y contar con el efectivo apoyo de las directivas de la entidad.

Adicionalmente, la Superintendencia Bancaria podrá formular observaciones cuando estime que el cargo y nivel de responsabilidad que éste ocupa no le permiten cumplir de manera idónea sus funciones, y

- b) **Función.** La función del oficial de cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es verificar la adecuada observancia de la totalidad de los procedimientos específicos diseñados por la institución con el fin de prevenir el lavado de activos.

También le corresponde reportar al competente las posibles faltas que comprometan la responsabilidad de los funcionarios.

De manera particular, debe vigilar todos los aspectos relacionados en esta Circular, en la ley y los que determine la entidad.

La designación de un oficial de cumplimiento no exime a la entidad ni a los demás funcionarios de la obligación de detectar y reportar internamente las operaciones inusuales, determinar las sospechosas y disponer su reporte a la fiscalía.

El oficial de cumplimiento deberá presentar informes a la junta directiva sobre la efectividad de los mecanismos adoptados.

Las entidades vigiladas deberán informar a la unidad especializada para la prevención de lavado de activos de la Superintendencia Bancaria, el nombre, cédula de ciudadanía y cargo del funcionario designado como oficial de cumplimiento.

6.7.2 Auditoría interna. El diseño y aplicación de los mecanismos de control es responsabilidad de la administración de cada entidad.

Esos mecanismos deben ser evaluados por la auditoría interna con base en los procedimientos de auditoría generalmente aceptados, para verificar su aplicación.

6.7.3 Revisoría fiscal. De conformidad con lo señalado en el numeral 3o. del artículo 207 del Código de Comercio y en el numeral cuarto, capítulo tercero, título primero de la presente circular, a la revisoría fiscal le corresponde, entre otros, los deberes de velar por el cumplimiento de la ley y de colaborar con las autoridades.

En consecuencia, dicho órgano deberá instrumentar los controles adecuados que le permitan detectar incumplimientos de las instrucciones que para la prevención de

lavado de activos se consagran en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la presente circular y reportarlos a la junta directiva.

6.8 Conservación de documentos. Con el propósito de garantizar un mayor grado de colaboración con las autoridades, las entidades deben conservar los documentos relativos a la prevención de lavado de activos por un período no menor de diez (10) años.

Esta disposición es aplicable también en los casos de fusión de entidades.

6.9 Plazos

6.9.1 Reporte consolidado de transacciones en efectivo a la Superintendencia Bancaria. Las entidades vigiladas deberán enviar la información de que trata el literal a) del numeral 6.4.1 del presente capítulo, a la Unidad Especial para la Prevención de Lavado de Activos, dentro de los veinte (20) primeros días de los meses enero, abril, julio y octubre de cada año.

6.9.2 Clientes exentos de llenar el formulario de control de transacciones en efectivo. Dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes inmediatamente siguiente al de entrada en vigencia de la presente circular, deberá ser enviado a la Unidad Especializada para la Prevención de Lavado de Activos, un listado con los nombres de todos los clientes que en ese momento estén exonerados (literal b) numeral 6.4.1 del presente capítulo) de llenar el formulario.

Para su actualización dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes las entidades deberán remitir a esta

Superintendencia, al área antes mencionada, los nombres de los nuevos clientes exonerados, y los que dejaron de serlo, durante el mes inmediatamente anterior.

Una vez determinados en el manual de procedimientos los criterios de selección de estos clientes, la lista de los mismos no podrá incorporar personas que no cumplan los correspondientes requisitos.

6.9.3 Reporte de transacciones sospechosas a la Fiscalía. El reporte de las transacciones sospechosas detectadas en cada mes calendario, debe ser entregado a la Fiscalía General de la Nación dentro del mes calendario siguiente en un informe consolidado.

En el evento de que una entidad vigilada no detecte operaciones sospechosas deberá informarlo a la fiscalía en el mismo plazo.

Los mecanismos de control implementados por la entidad deberán permitirle detectar las operaciones inusuales a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia.

6.9.4 Informes sobre actualización de manuales de procedimiento. Todas las entidades deberán enviar, a más tardar dos meses después de la entrada en vigencia de la presente circular, a la Unidad Especializada para la Prevención de Lavado de Activos, una carta en la que se informe sobre el número del acta de junta directiva en la que se haya aprobado la actualización de los manuales de acuerdo con lo dispuesto en la presente circular.

Las entidades que se creen, después de entrada en vigencia esta circular, deberán informar, a más tardar un mes después de iniciar operaciones, el número de acta de junta directiva en la cual se haya adoptado el manual de procedimientos.

La información sobre posteriores actualizaciones de esos manuales debe hacerse llegar a la superintendencia dentro de los cinco (5) días siguientes a su adopción.

Los manuales deben permanecer en cada entidad a disposición de esta superintendencia.

6.10 Práctica insegura. La Superintendencia Bancaria podrá calificar como práctica insegura la realización de operaciones con entidades financieras, nacionales o extranjeras, que no se protejan adecuadamente contra el lavado de activos (2400, 2420, 2429).

NOTA. Se estima, atendiendo el contenido, profundidad y actualización del tema tratado en la circula transcrita, que la misma deroga tácitamente la Circular Externa 75 de 1992 de la misma entidad.

REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO PARA SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS

(2431) Circ. Externa 52/93, Superbancaria

Tomando en consideración la naturaleza especial de las operaciones desarrolladas por las sociedades de servicios financieros, se ha estimado conveniente efectuar algunos ajustes, en cuanto a ellas respecta, a lo dispuesto en el numeral 4o. de la Circular Externa 075 de 1992. En tal sentido se imparten las siguientes instrucciones.

1. El envío de la información sobre transacciones en efectivo, en los términos, cuantía y demás modalidades previstas por las circulares 075 de 1992, 015 y 019 de 1993, deberá cumplirse por las sociedades de servicios financieros cuando estas efectivamente se hayan realizado, es decir, cuando se verifique que se han recibido o efectuado depósitos, retiros, pagos, inversiones o cualquier otro tipo de operación en efectivo en moneda legal por un valor igual o superior a la suma de siete millones quinientos mil pesos (\$7.500.000) o en moneda extranjera por un valor superior a la suma de diez mil dólares (US\$10.000), de acuerdo con lo previsto en las circulares anteriormente citadas.

Cabe aclarar que, cuando las mencionadas operaciones sean realizadas a través de una red de oficinas de un establecimiento de crédito, son las sociedades de servicios financieros contratantes del servicio las obligadas a efectuar la correspondiente remisión de información sobre transacciones en efectivo.

2. En el evento en que no se haya realizado este tipo de transacciones en efectivo, la entidad respectiva no estará obligada a efectuar el correspondiente reporte. De conformidad con lo anterior, se presumirá que la no realización de un reporte obedece a la ausencia de transacciones en efectivo que deban ser informadas a esta

superintendencia. En todo caso, la entidad vigilada y sus administradores serán responsables por la omisión en la realización oportuna de un reporte cuando exista información que, conforme a las disposiciones vigentes, deba ser comunicada.

MIEMBROS DE LA ASOBANCARIA

BANCOS

- BANCAFE
- BANCO ANDINO
- BANCO ANGLO COLOMBIANO
- BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, BCH
- BANCOLDEX
- BANCO COLPATRIA
- BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO, BANCOQUIA
- BANCO COOPERATIVO DE COLOMBIA, BANCOOP
- BANCO DE BOGOTA
- BANCO DE BOSTON
- BANCO DE COLOMBIA
- BANCO DE CREDITO
- BANCO DE OCCIDENTE
- BANCO DEL ESTADO
- BANCO DEL PACIFICO
- BANCO DE LA REPUBLICA
- BANCO EXTEBANDES
- BANCO GANADERO

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

- ALCALDAS
- ALMABIC
- ALMACENAR
- ALMADELCO
- ALMAGRAN
- ALMAGRARIO
- ALMAVIVA
- ALOCCIDENTE
- ALPOPULAR

CORPORACIONES FINANCIERAS

- CORFES S.A.
- CORFIBOYACA
- CORFICALDAS
- CORFICOLOMBIANA
- CORFICUNDINAMARCA
- CORFIDESARROLLO
- COFINORTE
- CORFINSURA
- CORFIOCCIDENTE
- CORFISANTANDER
- CORFIVALLE
- IFI
- INDUFINANCIERA S.A.
- ING CORPORACION FINANCIERA
- LATINCORP
- PROGRESO

- BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO, BIC
- BANCO INTERCONTINENTAL, INTERBANCO
- BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA
- BANCO NACIONAL DEL COMERCIO
- BANCO POPULAR
- BANCO REAL DE COLOMBIA
- BANCO SELFIN
- BANCO SUDAMERIS DE COLOMBIA
- BANCO SUPERIOR
- BANCO TEQUENDAMA
- BANCO UCONAL
- BANCO UNION COLOMBIANO
- BANK OF AMERICA
- CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO
- CAJA SOCIAL
- CITIBANK DE COLOMBIA
- COOPDESARROLLO

SOCIEDADES FIDUCIARIAS

- FIDUCIARIA ALIANZA S.A.
- FIDUCIARIA BNC S.A.
- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
- FIDUCIARIA TEQUENDAMA S.A.

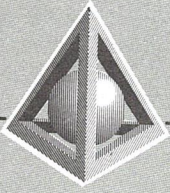
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

- HORIZONTE

CORPORACIONES DE AHORRO Y

VIVIENDA

- AHORRAMAS
- COLMENA
- UPAC COLPATRIA
- CONAVI
- CONCASA
- DAVIVIENDA
- GRANAHORRAR
- LAS VILLAS



COLOMBIAN BANKING
AND FINANCIAL ENTITIES
ASSOCIATION
ASOBANCARIA

**The colombian
financial system's
action against
asset laundering**

CONTENS

FOREWORD

PROLOGE

| | |
|--|-----|
| 1. BACKGROUND | 173 |
| 2. ACTIONS BY THE COLOMBIAN FINANCIAL SECTOR | 179 |
| 2.1 Asobancaria's Risk Administration Committee | 179 |
| 2.2 Agreement of joint cooperation between the Colombian General Prosecutor's Office and the Colombian Banking and Financial Entities Association, Asobancaria | 180 |
| 2.3 National and international cooperation | 182 |
| 2.4 Declaration of the financial sector's principles and actions against asset laundering | 187 |
| 2.5 Follow-up commission for interbank agreements on asset laundering | 187 |
| 2.6 Specialized training on asset laundering | 188 |
| 2.7 Financial intelligence unit | 190 |
| 3. PERFORMANCE OF THE FINANCIAL SECTOR WITH REGARDS TO EXISTING NORMS ON CLIENT KNOWLEDGE AND DETECTION OF SUSPICIOUS OPERATIONS | 192 |

| | |
|---|-----|
| 3.1 Adoption of procedures tending to improve client knowledge | 192 |
| 3.2 Report of suspicious operations | 193 |
| 3.3 Reports of Cash transactions | 194 |
| 4. SCHEDULE | 195 |
| SCHEDULE 1 | 197 |
| Agreement on the role of the financial system in the detection, prevention and repression of illicit capital movements, October 21, 1992 | |
| SCHEDULE 2 | 205 |
| Uniform code of conduct of the Colombian Banking and Financial Entities Association –Asobancaria– with in regards to their role in the detection, prevention and repression of illicit capital movements, October 21, 1992 | |
| SCHEDULE 3 | 215 |
| Interbank agreement | |
| Training program on control and prevention of asset laundering, June 5, 1996 | |
| SCHEDULE 4 | 225 |
| Declaration of principles and actions from the financial sector against asset laundering, June 5, 1996 | |
| SCHEDULE 5 | 231 |
| Follow-up commission for inter-bank agreements on asset laundering, June 5, 1996 | |

| | |
|--|-----|
| SCHEDULE 6 | 235 |
| Inter-bank agreement | |
| Client knowledge, June 5, 1996 | |
| SCHEDULE 7 | 261 |
| Law 333, December 19, 1996 | |
| SCHEDULE 8 | 269 |
| Law 365, February 21, 1997 | |
| SCHEDULE 9 | 287 |
| Organic Statute of the Colombian Financial Sector | |
| – Decree 663 of 1993 (articles 102 through 107) | |
| – External bulletin 061 (1996), Bank Superintendency | |
| – External bulletin 052 (1993), Bank Superintendency | |
| ASOBANCARIA MEMBERS | 309 |

FOREWORD

Founded in November 1993 as part of the country's economic and institutional reorganization, the Association of Colombian Banking and Financial Entities - Asobancaria - represents the Colombian financial sector.

Asobancaria groups all local and foreign, public and private commercial banks (35); savings and loan associations (8); two thirds of the financial corporations (investment banking) (16), general warehouse deposits (9), four trust companies and one pension/severance fund management company.

Asobancaria is a citizen's organization watching over public interests and acting as the financial sector's authorized spokesman with the Colombian government and the various private and public entities, defending the sector's most legitimate interests.

During its six decades of existence, Asobancaria has been a recognized leader in the analysis and improvement of financial activities, following the country's economic policies. Its contributions in these areas are characterized by their objectivity and their analytical strictness, which has led this business group to earn the highest credibility levels.

Its organizational structure, operating under a fully decentralized model, allows it to be a leader in a number of technical projects of

great importance for the sector, and to provide a wide variety of services directed not only to its members but also to other sectors within the economy, which require them as a direct result of the security and reliability they offer, and in recognition to the Colombian financial sector's know-how.

PROLOGUE

The subject of "asset laundering" revolves mainly around drug dealings, even though it has a clear relation with other equally dangerous criminal activities.

It is for this reason that analysis of the work that needs to be done by the various countries and agents involved in the subject cannot be separated from world wide strategies with regards to drug dealing repression and eradication, especially since this problem is a universal one.

This means that the fight against drug dealing requires of the combined efforts of all countries, and that its success greatly depends on a more aggressive strategy by drug using countries.

Obviously, this global situation projects over, and has enormous repercussions on, the issue of "asset laundering".

Without a doubt, the leading role that the Colombian criminal organizations now play in the production and trading of hallucinogenic substances implies that the country will have to assume its responsibilities and adopt a firmer position.

Nevertheless, in weighting our role and our responsibilities, we can never lose sight of the fact that an important portion of the inflow of drug related funds usually comes from, and goes to, other countries.

Two facts are relevant here. First of all, a large portion of the funds coming from drug related activities is now in Colombia. Second, even though most of these funds may be controlled from within Colombia, this fact not necessarily results in their transit through the country or in active participation by local agents.

It is thus unacceptable to point Colombia and other neighboring countries as centers of asset laundering activities, nor to identify all operations with or between Colombian nationals as suspicious ones, just for the fact that a Colombian person or entity may be involved in the transaction.

Such implications only show flippancy and lack of thoroughness in the analysis of the issue, but, which is even more serious, a failure to focus on the real problem, using it as an excuse to evade some of the countries' other real responsibilities.

The above considerations are necessary to be able to better evaluate the legal framework defining the Colombian financial sector's role with regards to prevention, detection and repression of illicit capital movements.

The Colombian Criminal Code did not consider asset laundering as a crime in itself, something which was no impediment for repressing the movement of funds originating from drug dealings. Law 190 of 1995 typified asset laundering activities in Colombia as concealment.

Through External Bulletin 033 of 1997, the Bank Superintendency subsequently established that currency exchange houses should report cash transactions in excess of \$750 American dollars or their equivalent in other currencies, this limit for special or cross-border exchange houses being the equivalent of US\$500 in the neighboring country's currency; these amounts will be annually adjusted by the Bank Superintendency.

Acquiescence in concealing property and funds originating from drug dealings is also repressed based on criminal concepts such as complicity, association to commit an offense and illicit enrichment, and some others of a more procedural type.

As such, there are clear penal norms which allow for confiscation of property used for production and illicit trading of drugs, as well as of funds originating from such activities. By the same token, lending one's name to purchase properties with money from drug dealings (figureheading) is considered illicit. It is essential to point out that bank confidentiality in Colombia does not oppose criminal investigations.

Colombia's ratification of the "United Nations Convention Against Drug Dealing and Psychotropic Substances", better known as the Vienna Convention, raises (and follows) the issue of typifying asset laundering within the terms of article 3, numeral 1, of said Convention.

According with Colombian law, all nationals have to report any possible violation to criminal norms to the authorities. This could have been sufficient to determine the conduct of the financial institution's administrators and directors with regards to "asset laundering".

Nevertheless, financial institutions have for a long time now been establishing clear policies and internal regulations oriented towards preventing and detecting illicit capital movements. It is so that the Colombian financial sector, aware of its responsibility in this process, has permanently and on its own accord sought to improve upon mechanisms which will allow it to fulfill its goals.

Looking towards a quick definition of the tools required for this fight, the financial institutions have established, as a primary objective, the

adoption of mechanisms which will facilitate the process and provide the required cooperation to the authorities.

We reach a new phase now, namely the agreement between the Association of Colombian Banking and Financial Entities - Asobancaria - and the General Prosecutor's Office, as well as Asobancaria's participation as a part of the consultancy group for the International Inter-institutional Commission for Asset Laundering Control, created by the Colombian Government through Decree 950 of 1995.

Looking at the problem from an international context, Colombian financial institutions have promoted the establishment of channels of international cooperation, such as the creation of a Latin American committee for the prevention and control of asset laundering, and the improvement of relationships with the authorities from the various countries entrusted with the control of this problem.

This book attempts to collect the most significant actions, both from the Colombian Government and from the entire financial system with regards to the permanent fight against actions by agents within the Colombian economy in the movement of illicit capital.

1. BACKGROUND

The Colombian financial system, aware of its all-important role in the process of prevention, control and repression of illicit capital movement, has constantly looked, on his own accord, for better mechanisms which will allow it to fulfill this mission, initially contained in the inter-bank agreement approved during the Association of Colombian Banking and Financial Entities Board of Directors' meeting of October 21, 1992 (Schedule 1). This agreement takes shape considering that the set of individual efforts require of a minimum of uniformity in norms and procedures, on one hand, and of full institutional support on the other.

Generally speaking, the agreement consists in adhering to a set of principles, in regards to which each entity will establish its own code of conduct. The first four common basic principles of this agreement are:

- Client selection and identification, together with an adequate knowledge of his economic activities.
- Client knowledge, and knowledge of his operations with the financial entity.
- Recording and documentation of cash operations.
- Cooperation with the authorities, providing then with the required information for investigative and probatory purposes.

This agreement is the basis for Decree 1872 of 1992, which essentially made the principles and procedures subject of the aforementioned financial sector's agreement into a law, now a part of the Financial Sector's Organic Statute, Decree 663 of 1993 (Schedule 9), which sets forth that financial entities are responsible for adopting adequate and sufficient control measures in order to avoid being used as instruments for disguising, handling, investing and in any way using funds or other assets originating from criminal activities, or to give an appearance of legitimacy to criminal activities or transactions and funds related to such activities.

In complying with this general responsibility, the financial institutions must adopt clear mechanisms and codes of conduct to be observed by their employees, legal representatives, directors and administrators, aiming to obtaining the following:

- a) An adequate knowledge of their client's economic activities, their scope, the basic characteristics of their usual operations, and especially, of the activities of those people making any type of sight, savings or term deposits, or who may deliver property in trust accounts or deposit them in safety deposit boxes.
- b) Determination of the frequency, volume and nature of their client's financial transactions.
- c) Determination of the coherence of their clients' economic activities with regards to the volume and frequency of access to their funds.
- d) Immediate report to the General Prosecutor's Office, or to any judicial police bodies which may have been designated by it, of any information relevant to movement of funds whose amounts and nature do not bear a reasonable relation with the clients' economic activity, or of client transactions which, by reason of their number, of the amounts involved, or of their individual

nature, may lead to reasonably thinking that the financial entity may be being used to transfer, handle, process or invest money or resources originating from criminal activities.

With regards to this last issue, both the entities and their employees will not inform the persons having made, or having tried to make, unusual operations or transactions, about the fact that a report has been filed with the General Prosecutor's Office; they furthermore undertake to keep this information in strict confidentiality.

In setting the above mentioned control amounts, the nature of the respective financial entity's business must be taken into account, as well as its network's size, client selection procedures, product marketing, operational capacity and technological development.

There is also an obligation to properly document all cash transactions. For this purpose, all entities will keep a record, in a form specially designed for this purpose, with information about transactions made, in local or foreign currency, for amounts in excess of values to be periodically indicated by the Bank Superintendency.

Presently, this amount is set at ten million Colombian pesos, which at this time are equivalent to ten thousand US dollars.

With regards to foreign currency operations, this value has been set at ten thousand US dollars, or its equivalent in other currencies.

Multiple cash transactions, both in legal tender or in foreign currency, which when added together exceed the amounts indicated above, will be considered as a single operation, should they be conducted by or on behalf of a certain person during one single day, or during a period of time to be established by the Bank Superintendency.

Whenever the a certain client's ordinary course of business implies numerous regular cash transactions, the financial entity will keep a

general record of all such transactions instead of filling out individual forms for each transaction. This record will include the same information contained in the individual forms, on an aggregate basis.

Financial entities using this mechanism will file a monthly report with the Bank Superintendency on the persons subject to this procedure.

It is worth mentioning that financial entities must appoint responsible officers to corroborate the adequate fulfillment of such controls and procedures.

In order to allow for a greater degree of uniformity in the adoption of internal measures, Asobancaria has proposed a basic uniform code of conduct, which allowed individual financial entities to adopt their own codes of conduct, in accordance with Decree 663 of 1993 (Organic Statute of the Financial System). Similarly, all Colombian financial institutions have implemented their own codes of conduct, as mandated by the Government, and within the framework proposed by this Association. The wording for the sample code is included in Schedule 2.

This set of measures is framed within the general objective of positioning the sector on the same level with international standards with regards to this matter, particularly the following ones:

- The United Nations Convention against Drug Dealing and Psychotropic Substances, approved in Vienna on December 19, 1988.
- The Recommendation from the European Council of June 27, 1980, and the Declaration of Principles, adopted on December 1988 by the Bank Regulatory and Supervisory Committee of the Group of Ten, or the Basle Committee.
- The recommendations from the Inter-American Commission Against Drug Abuse, CICAD, belonging to the Organization of American States, OAS.

- Recommendations from the Economic World Summit, or Group of Seven (G-7), better known as “FATF”, corresponding to the English designation for Economic Summit’s Financial Action Task Force on Money Laundering.

At the same time, financial institutions supported by the technical committees created within Asobancaria have been developing studies and carrying out work tending to permanently complying with said norms and with Law 190 of 1995, the “Anti Corruption Statute”. Said Law introduces changes to the Colombian Criminal Code and includes the offense of receiving, legalizing and concealing of goods and property originating from illegal activities (article 31, Law 190/95, article 177 of the Criminal Code).

Law 190 of 1995 typified asset laundering as a crime (receiving, concealing and legalizing goods originating from illegal activities), something which requires financial institutions to increase their controls in order to prevent that their employees or administrations may become involved in criminal investigations.

Supplementing the above regulation, the Colombian Government approved Law 333 on December 19, 1996, which considers termination of property rights for goods originating from illicit activities, or for those used in criminal activities; it also defines money laundering as a crime against social moral. Enrichment brought about by this crime may be the cause of termination of property rights through a court order which may affect property or funds deposited with a financial institution. (Schedule 7).

Recently, by law 365, on 1997, asset laundering’s legal terms were improved giving it total autonomy in relation with the origin crimes. On the other hand, law 365/1997 created a new law transgression named “Omisión de control” for insured the compliance of the duty of report currency transactions to the authorities. (Schedule 8).

The work developed by the Colombian financial institutions has sought direct application of all these regulations, through the use of control mechanisms, as well as adoption of policies and procedures within the entities, and specialized training for their employees on the background, on their responsibilities and obligations for daily detection, prevention and repression of illicit capital movement through the financial sector.

2. ACTIONS BY THE COLOMBIAN FINANCIAL SECTOR

2.1 Asobancaria's Risk Administration Committee

The Risk Administration Committee was created during early 1994 in response to the sector's need to have a special treatment for all of its risks. It is formed by all the area's Vice-presidents responsible for this issue. Presently, the Committee has nine members, representing various types of entities such as banks, savings and loans associations and financial corporations.

This Committee has arduously worked in the prevention and control of asset laundering, and has been a determinant factor in the design of the agreement executed with the Colombian General Prosecutor's Office (more on this later). In following this Agreement, the Committee holds periodic meetings with the Deputy Prosecutor's General in order to define and follow-up the more important short, medium and long term issues. The bases for the Agreement were defined during one of these meetings, held on December 1995 and attended by the General Prosecutor, the Deputy General Prosecutor and by representatives from the financial sector and from the Association of Colombian Banking and Financial Entities.

Along these lines, members of the Committee have participated actively, providing the guidelines for the following work:

- Definition of the Interbank Agreement on Customer Knowledge
- Definition of the Training Agreement on Asset Laundering
- Definition of the work to be done as a result of the trip made by the presidents of the financial entities and Asobancaria to the United States during June 1996.

- Definition of the US trip and the Committee's work agenda, during August 1996, in continuing the rapprochement policies with foreign governments.

2.2 Agreement of joint cooperation between the Colombian General Prosecutor's Office and the Association of Colombian Banking and Financial Entities, Asobancaria

The subject of money laundering has been one of the main topics of Asobancaria's Board of Directors meetings, and of some of its internal committees. Since April 1995 it became apparent that there was a need to establish a joint cooperation agreement between Asobancaria and the Colombian General Prosecutor's Office. As a result of this, the first approaches were made to design a joint cooperation program based on practical and effective actions.

The agreement was written based on practical bases, which contributed to obtaining the results sought by the Government regarding this subject. The sector's experts advice was obtained for some of the support elements required for each area, so that the results expected by the State's control entities could be obtained. This fact confirms the sector's real interest in providing solutions with tangible results.

The Association of Colombian Banking and Financial Entities, Asobancaria, has held meetings with the Ministry of Justice, the Bank Superintendency and the Colombian General Prosecutor's Office in order to pin point the financial sector's required cooperation and duties with regards to prevention and control of asset laundering, and with regards to clarifying the Agreement's real scope in light of the new norms issued by Congress and by the Colombian Government (Law 190 of 1995, Decree 950 of 1995), identifying at the same time the following bases for its development:

- Information, development and implementation of agile and reliable mechanisms for reporting allegedly suspicious transactions,

and for adequately addressing and optimizing information management.

- Support in the creation of the Colombian General Prosecutor's Office's Special National Unit Against Asset Laundering. To this effect, the Association of Colombian Banking and Financial Entities offered to provide all help required for the establishment and/or development of this Unit with regards to issues related to logistic infrastructure and the use of more adequate technologies.
- Specialized training programs for all employees from the financial sector and from the Colombian General Prosecutor's Office.

The Joint Cooperation Agreement between the Colombian General Prosecutor's Office and Asobancaria was signed in September 1995, with the presence of the Minister of Justice, of the Bank Superintendency and of representatives from the financial sector. It is worth noting that this Agreement is a starting point, and represents a joint effort in the fight against asset laundering.

Additionally, and with the purpose of giving shape to the actions required for adequately developing the Agreement, Asobancaria created a task force, which has been in permanent contact with the Colombian General Prosecutor's Office and which has carried out some preliminary work with it, while this Office's operational structure and logistical and technological requirements are defined in detail.

Subsequent to signing the Agreement, cooperation between financial entities and the Colombian General Prosecutor's Office has improved; similar agreements have been subscribed since then by entities such as the Association of Commercial Financing Entities (AFIC), the Association of Fiduciaries and the Bogotá Stock Exchange.

In several occasions, the General Prosecutor has recognized the financial sector's cooperation in the development of this Agreement, something which has set an example of what can be done in the country.

2.3 National and international cooperation

Inter-institutional Commission Against Asset Laundering

Through Decree 950 of 1995, the Colombian Government created the Inter-institutional Commission Against Asset Laundering, and included Asobancaria as a part of its consulting group; as such, all of Asobancaria's actions have been framed within this context. The Commission was modified through Decree 754 of 1996, which links the Inter-institutional Commission Against Asset Laundering with the Commission for the Fight Against Illicit Enrichment and Financing of Subversive Groups.

In order to guarantee adequate coordination and proper application of the work carried out, in addition to cooperation with the Colombian General Prosecutor's Office, formal work meetings have been held with the Bank Superintendency and the Ministry of Justice.

Mutual Cooperation Agreement Between the Colombian Government and the Government of the United States of America

It is important to point out that on February 27, 1992, the Colombian Government signed the "Mutual Cooperation Agreement Between the Colombian Government and the Government of the United States of America to Fight, Prevent and Control Money Laundering Originating from Illicit Activities".

This agreement originates from the concern of both countries over the fact that asset laundering affects both countries, and from the need to adopt stringent and rigorous measures in order to prevent and

eliminate asset laundering; from the need for cooperation between financial institutions, recognizing that they must be subject to special non-discriminatory treatment with regards to investigation, prevention and sanction of transactions in any way related to laundering, through a positive and decisive cooperation with the authorities in the prevention and control of asset laundering.

A mutual cooperation commitment is being set forth in this agreement, as follows:

- Guaranteeing that financial institutions from each country record information on money transactions and pass it on to the respective entities, storing said information for a period of at least five (5) years.
- Facilitating mutual cooperation and assistance, as required by both countries for a timely exchange of information.
- Making their best effort to promulgate and apply all laws and regulations which may be required for cooperation and assistance, as defined in the agreement.

A meeting, sponsored by the American Ambassador, was held during December 1995. One of the proposals submitted during this meeting was to channel through Asobancaria all concerns and requests from the financial institutions, entity which would at the same time make all the necessary contacts with the American Embassy in order to carry out the required actions. As such, Asobancaria is aiming to tighten international cooperation in order to apply efficient mechanisms which will decisively support the world's fight against asset laundering.

Contacts have been established with entities such as FinCEN in the United States, or Tracfin in France, or CEPBLAC in Spain in order to establish the required cooperation and information channels for the

prevention and control of asset laundering, and to know in detail the operational procedures used in other countries, as one of Asobancaria and its members' first priorities.

A commission, formed by members of Asobancaria's Board of Directors, made a trip during June 1996 in order to meet with representatives from the State Department, the Justice Department and from OFAC and FinCEN in the United States, to share directly with them the actions being taken by the financial sector regarding the asset laundering issue.

Delegates from the risk administration committee, together with the sector's representatives, made another trip to the United States during August, in continuing with the policies of cooperation with the American Government, with the main purpose of knowing in the best possible detail the operation of American entities in charge of administrating and handling asset laundering information.

Actions with Latin American Bank Association, FELABAN

The creation of a task force against asset laundering, similar to the Europe's GAFI, has been promoted as a prevention mechanism through the Latin American Bank Association, FELABAN, which groups bank associations from Latin American countries. In this way, a forum for permanent analysis of these issues is created, which may also propose to the respective governments the adoption of specific measures for a collective effort against asset laundering, and the creation of any necessary agreements to aid in this effort.

FELABAN's created a committee to tackle the issue, composed by Panama, Colombia, Brazil and Chile. The first meeting was held on the occasion of the international congress on fraud prevention, document forgery and electronic fraud, which took place during August 29 and 30 in Panama.

This means that not only the Colombian financial sector has adopted internal measures aiming to preventing illegal activities, but that on an international level is positively contributing in the definition of specific cooperation actions.

As a result of this participation is the Declaration of Principles of the Latin American Bank Federation - FELABAN - addressing prevention of undue use of the financial system in laundering of assets originating from drug dealings and from other illegal activities, approved by FELABAN's Directive Committee during a meeting held in Cartagena de Indias, Colombia, and the Declaration of the Latin American Committee for Prevention and Control of Asset Laundering held in Panama on August 30, 1996 .

In general terms, the Declaration defines cooperation principles for each country's authorities on general information exchange, prevention methods and technical aspects between associations and entities members of Felaban, and proposes that its members adopt prevention policies inside their affiliated entities, to include issues such as:

- Ethical and professional commitment in the prevention of laundering of assets originating from drug deals and from other illicit activities.
- The commitment to provide control and supervision authorities with all necessary cooperation for the prevention and investigation of this crime, as per current applicable legislation in each country.
- Definition of programs within each entity's internal environment, covering at least the following aspects of prevention:
 - Legal issues of the crime
 - Professional and legal responsibilities of the bank's employees and managers

- Client knowledge
- Identification of suspicious activities
- Establishment of specific prevention programs
- Employee training and awareness
- Client orientation
- Establishment of auditing systems
- Cooperation with the authorities

As already mentioned, all of these efforts go hand in hand with the government's policies with regards to the importance that this issue be handled jointly between the various countries, and not as individual strategies by single nations or financial systems.

The August 30, 1996 declaration by the Latin American Committee in Panama develops concepts for the preparation of "guidelines" for prevention of asset laundering, recommends adoption of certain general self-regulation rules, and provides details on various warning signals which should make detection of unusual or suspicious operations easier for financial institutions and for their employees.

Inter American Convention Against Asset Laundering

The Colombian Minister of Finance and Public Credit submitted during May of 1996 a proposal to the Inter American Convention Against Asset Laundering, stating the Colombian position with regards to this issue.

During his presentation, the minister invited the OAS to swiftly comply with the order received, having an Inter American

Convention Against Asset Laundering in mind. Reasons such as the need to create a binding element in order to ensure timely fulfillment of continental strategy, limitation of the money laundering concept, the instruments' restriction in their fight against drug related laundering, and the excessive emphasis placed on the financial system were the focal points of his speech.

2.4 Declaration of the financial sector's principles and actions against asset laundering

As per recommendations from the sectorial boards of banks, financial corporations, savings and loans associations and trust companies, and with the purpose of insisting in self regulation with regards to asset laundering, the Board of Directors, during its June 5 meeting, approved the subscription of the document titled "DECLARATION OF THE FINANCIAL SECTOR'S PRINCIPLES AND ACTIONS AGAINST ASSET LAUNDERING" by the Colombian financial institutions, with which the sector's collective position against the problem is reiterated, and which sets forth homogeneous conduct patterns.

The text of this declaration is included in Schedule 4.

2.5 Follow-up commission for interbank agreements on asset laundering

The Asobancaria's Board of Directors created during their June 5 1996 meeting a follow-up commission, whose role is to study the behavior of financial entities members of Asobancaria with regards to agreements seeking for a uniform and general application regulation regarding prevention, detection and repression of movements of illicit capital. The Follow-up Commission is composed by five members of the Board of Directors, representing each type of the institutions affiliated to Asobancaria, namely presidents from a bank, from a corporation, from a savings and loans association, from a trust company and from a general deposit store. This Commission submit

periodical reports to the Board of Directors, which, as per its statutory duties, will implement the necessary measures.

The text of the approved document is included in Schedule 5.

2.6 Specialized training on asset laundering

Within each of its own entities, the financial sector, through Asobancaria and with the aid of the Bank Superintendency, has offered numerous training courses which not only seek to make existing norms and procedures known, but also to provide the financial sector employee with an awareness of this issue.

The colombian financial entities and Asobancaria have developed several open programs and seminars, with participation of foreign and local experts on the subject. As such, the "International Seminar on the Detection and Prevention of the Movement of Illicit Capital in the Banking System" took place during August 31 and September 1, 1994 in Bogotá, a joint effort by Asobancaria and Bancafé.

During July 17, 18 and 19, 1995, Bogotá was home for the "Prevention and Repression of Illicit Capital Laundering: a Practical Approach" symposium, coordinated by Banco Popular. Dominique de Wit, General Commitment and Legal Affairs Director for Credite Agricole Mutuel du Calvados in France, was present at the event.

In addition to the above mentioned events, and following the guidelines issued by the Basle Committee, which sets forth the concept of "sufficient and permanent training of bank employees" as a principle, and as part of the sector's training plans with regards to prevention and control of asset laundering, the interbank agreement called "Training Program for Control and Repression of Asset Laundering Within the Financial System" (schedule 3) was adopted by Asobancaria's Board of Directors, the result of which is a commitment by the financial entities

to have all of their employees, participating in the program and to be trained and updated in the subject. This program would supplement each individual entity's training.

This program started on February 1997 and it would train 120.000 financial employees and other 20.000 employees of adherent entities. Until now 10.000 person have been trained

The program's main objectives are:

- Provide information with regards to the State's role with the financial sector in the subject of asset laundering.
- Describe legal, administrative and operational aspects of asset laundering in Colombia's environment.
- Create an awareness with the financial institutions' officials on their responsibility towards asset laundering.
- Inform of the obligations of the various authorities belonging to the Inter-institutional Committee Against Asset Laundering.
- Describe the role of the Association of Colombian Banking and Financial Entities as a member of the advisory group.

The basic contents of the training program includes:

1. Awareness
2. Conceptual issues
3. Regulatory issues
4. Criminal issues
5. "Financial paradises"

6. Policies and principles
7. Institutional issues
8. Intensification program

Part of the Colombian General Prosecutor's Office basic training program, training programs have been offered to comptrollers about the inner workings and the main types of operations within the financial system. This 60 hour training course has been reinforced with specific addresses on the issue of money laundering by Asobancaria's president and vice-president, as well as from officers from the Colombian General Prosecutor's Office, directed to the financial sector in several Colombian cities.

A Forum on Asset Laundering took place on February 14, 1996 as a part of this training program, with the cooperation of the Colombian General Prosecutor's Office and with the participation of the Minister of Justice and the Bank Superintendency. Over 300 top level officers from the financial sector attended the event, together with special guests from the Colombian General Prosecutor's Office, the Bank Superintendency and the American Embassy, among others.

In addition to this, the III Risk Administration Congress took place on November 14 and 15, 1996 in Rionegro, Antioquia. The academic program featured the asset laundering issue, discussed by local and international experts, mainly from the United States and Europe, in front of an audience consisting of Colombian and Latin American bankers, and representatives from the government, from the Bank Superintendency, the Ministry of Justice, and the Colombian General Prosecutor's Office.

2.7 Financial intelligence unit

Asobancaria was invited to participate in the task force lead by the Ministries of Finance and Public Credit and of Justice, given its

participation in the advisory group for the Inter-institutional Commission Against Asset Laundering. The Bank Superintendency and the Colombian General Prosecutor's Office participated in this task force were. The task force carried out an investigation, the result of which was a recommendation to the Financial Intelligence Unit on the model which would best respond to the Colombian reality. It is expected that the Government will implement this mechanism during 1997 and that, as requested in several opportunities, savings will apply on a general level, meaning that those sectors from the economy liable to be used for laundering operations will not tax the financial sector with new and excessive charges and expenses.

3. PERFORMANCE OF THE FINANCIAL SECTOR WITH REGARDS TO EXISTING NORMS ON CLIENT KNOWLEDGE AND DETECTION OF SUSPICIOUS OPERATIONS

The norms do not set forth the obligation to detect suspicious operations, but only the adoption of preventive mechanisms. These mechanisms and procedures were adopted by the financial sector, and were timely delivered to the Bank Superintendency.

It is worth remembering that the norms requiring adoption of codes of conduct and procedures are of an administrative nature, and are oriented to preventing financial entities from being used as instruments for concealing, handling, investing or processing of funds originating from illicit activities.

Eventual administrative sanctions which the Bank Superintendency may impose for not adopting or applying control mechanisms (as indicated in article 107 from Decree 663 of 1993) do not carry any implication to the effect that the sanctioned entity may be an asset launderer, as some of the media and some public officials have erroneously lead the public to think. The borderline between administrative and criminal issues must be clearly defined, and for this it is necessary that both the authorities and the general public know the interpretation and scope of those norms, as well as each actor's role.

It is required that the financial sector adopts prevention mechanisms. Its obligation is one of means and not one of results. Nowhere in the world would any authority even consider thinking that it is the financial entities' obligation to detect illegality of all funds deposited with them.

3.1 Adoption of procedures tending to improve client knowledge

Client knowledge procedures are one of the basic aspects in preventing the sector from being used for movement of illicit funds. This is why the financial sector is constantly striving to improve upon them.

Considering the fact than isolated efforts are inadequate to face such a complex problem, and reaffirming the financial sector's interest in adopting common and practical mechanisms which will help control and prevention of asset laundering, in December 1995 Asobancaria formed a Special Committee whose purpose was to define and unify procedures for better knowing clients for all types of operations. These procedures (initially intended for checking account, savings account, and certificates of deposit products) were adopted as an interbank agreement on June 4, 1996 (Schedule 6), and have been mandatory since September 1, 1996. This agreement seeks to standardize the mechanisms used for all operations carried out by all of the sector's entities: checking accounts, savings accounts, term deposits, common funds and international operations, among others. This agreement was adopted almost in its entirety by the Bank Superintendency, and was issued on October 21, 1996 as External Bulletin 072. This is a clear example of the proactive and cooperative attitude of the financial sector towards the authorities.

3.2 Report of suspicious operations

As already mentioned, in Colombia it is an obligation for all citizens to cooperate with the authorities and to report events that might lead to legal investigations. We recognize the fact that the number of reports of suspicious operations submitted by the financial sector to the Colombian General Prosecutor's Office has not met the original expectations; there are several causes behind this.

At the beginning there was not enough clarity on the concept of unusual operations and on the manner in which the reports should be filed. Being a personalized report, there was a fear in the financial institutions' employees, making it thus necessary to amend the existing norms and to exonerate the person filing the report from all responsibility. Only with the issuance of Law 190 of 1995, Anti-corruption Statute, was a norm to this effect included (article 42, Law 190/95). In addition to the above, processing the form tended to be a complex and confusing matter.

Recently, this penal type was improved through Law 365 of 1997, giving it full autonomy with regards to source crimes, and also creating the crime of omission of control in order to guarantee that entities will comply with the duty of reporting cash transactions.

Thanks to the Colombian General Prosecutor's Office's cooperation, a reciprocal cooperation agreement was signed, which included, among other things, that the reports should be considered institutional and not personal.

Once this norm was adopted, as a result of an increase of activities by the authorities, the volume of reports submitted began to increase substantially.

3.3 Reports of Cash transactions

Since 1992, and according with Decree 1872 (included in Decree 663 of 1993), the financial entities have been delivering information to the Bank Superintendency about cash transactions for amounts in excess of Col. \$7,500,000 or US \$10,000. This was later modified through External Bulletin 061 of 1996 from the Bank Superintendency, setting these limits at Col. \$10,000,000 or US \$10,000.

External Bulletin N° 061 of 1996, issued by the Bank Superintendency, established that entities must submit to the General Prosecutor's Office a report of all transactions they consider to be suspicious, without this meaning that the surveilled entity must be certain that it is indeed a criminal activity, or that the funds involved originate from criminal activities.

It is a known fact that, in order to comply with this requirement, the financial sector has had to invest in programs and/or hire additional personnel. Truly speaking, right from the beginning the entities have faced operational problems, which in some cases have prevented them from timely submitting the information.

5. SCHEDULE

SCHEDULE 1

**AGREEMENT ON THE ROLE OF THE
FINANCIAL SYSTEM IN THE DETECTION,
PREVENTION AND REPRESSION OF ILLICIT
CAPITAL MOVEMENTS**

OCTOBER 21, 1992

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ASSOCIATION
OF COLOMBIAN BANKING AND FINANCIAL ENTITIES
ASOBANCARIA**

CONSIDERING:

- a) That the member financial institutions may come to be used, both unknowingly and unwillingly, as intermediaries for deposits, transactions and transfers of funds originating from or destined to criminal activities;
- b) That the member financial institutions may assume a role of cooperation or assistance with those state authorities responsible for the investigation and repression of criminal activities;
- c) That, even though the internationally known “money laundering” is not, in itself, considered as a crime under the Colombian legislation, the member financial institutions may determine various types of operations which may, on account of their direct relation with organized crime, be the subject of special reports to the authorities;
- d) That the member financial institutions have for sometime now established internal policies, rules, and internal codes of conduct aiming to prevent and detect illicit capital movements;
- e) That it is necessary to merge individual efforts made by the member financial institutions into a single and uniform regulation

of general application with regards to the prevention, detection and repression of illicit capital movements;

- f) That, in agreement with numeral 10 from article 29 of the Association's By-laws, it is the Board of Directors' responsibility to "set forth the rules, uses and practices, in order to rationalize and standardize common procedures within the financial sector".

PROPOSES ADHERENCE OF ALL MEMBERS TO THE FOLLOWING PRINCIPLES:

1. Client selection, identification and knowledge

The Association members will make a reasonable effort in order to select and better know their clients, either regular or occasional, to properly identify them, and to have an adequate knowledge of their transactions and activities, in order to establish their soundness.

For this purpose, a form, or set of forms, will be designed in order to identify and receive a declaration on the source of the funds affecting the following transactions, whenever they are made in cash and exceed seven million pesos (\$7,000,000), amount which will be periodically readjusted by Asobancaria's Board of Directors, or its equivalent in foreign currency:

- a) Opening of checking or savings accounts
- b) Opening of term deposits
- c) Drafts and money transfers
- d) Purchase and sale of foreign currency
- e) Safety deposit box services

Moreover, common registration procedures for recording personal information, identification and references will be adopted, as well as for the declaration which will be submitted for the operation.

2. Safekeeping of information for probatory purposes

Members will adopt technical procedures are required to guarantee the safe keeping and integrity of all information regarding cash transactions in excess of seven million pesos (\$7,000,000), amount to be periodically adjusted by Asobancaria's Board of Directors, or its equivalent in foreign currency, in order to guarantee its usefulness for probatory purposes.

3. Cooperation with the authorities

The Association members will cooperate with the judicial and police authorities responsible for crime investigation and repression, providing them any information required, and that from any suspicious activities, based on previously established parameters.

Cooperation with foreign judicial and police authorities will be handled through the proper local authorities in accordance with existing, international norms.

In accordance with article 15 from the Political Constitution, fulfillment of this principle will not be considered as a violation of bank secrecy.

4. Refraining from certain operations

The Asobancaria members will refrain from carrying out operations which have a clear relationship with criminal activities, based on types and profiles set forth by a committee specially created for this purpose.

5. Adaptation of internal codes of conduct

Asobancaria's members will adapt their internal codes of conduct in order to develop the aforementioned principles, based on the code to be prepared by Asobancaria.

To develop said principles, the Board hereby proposes the following instruments for execution of the respective agreement:

1. Centralized and uniform record keeping of information.
2. Determination of technical procedures for physical and electronic safekeeping of information for probatory purposes.
3. Establishment with the authorities of a uniform and clear procedure.
4. Preparation of codes of conduct, regulations and guidelines to be used as patterns for adapting those currently available from the Association members.
5. Make a call for international cooperation, looking for consultancy services and advice on:
 - a) Audit parameters and procedures for the detection of illicit capital movements.
 - b) Personnel training.
6. Definition and updating of suspicious operation's profiles by a specially designated committee, created for that purpose.
7. Strengthen of procedures regarding personnel selection.
8. Promotion, among to the various State entities, of the issuance of an adequate legal framework on this matter.

This agreement was approved during the Board of Directors' October 21 meeting, 1992, and was made available at the Association's General Secretary for endorsement by all members until November 15, 1992.

The document will be considered endorsed through written confirmation by the members' legal representatives.

SCHEDULE 2

UNIFORM CODE OF CONDUCT OF THE ASSOCIATION OF COLOMBIAN BANKING AND FINANCIAL ENTITIES ASSOCIATION -ASOBANCARIA- WITH IN REGARDS TO THEIR ROLE IN THE DETECTION, PREVENTION AND REPRESSION OF ILLICIT CAPITAL MOVEMENTS

OCTOBER 21, 1992

(ENTITY)

CONSIDERING:

1. That through an agreement approved during the Colombian Banking and Financial Entitie's Association's Board of Directors meeting held on October 21, 1992, the role of the financial system in the detection, prevention and repression of illicit capital movements was defined, considering the fact that (Entity) is exposed to being unknowingly and unwillingly be used as an intermediary for deposits, transactions and transfers of funds originating from or destined to criminal activities;
2. That as per Decree 1872 of November 20, 1992, all entities subject to control and surveillance by the Bank Superintendency must adopt adequate and sufficient control measures aimed to preventing that, in carrying out their normal operations, they may be used as instruments for concealing, handling, investing or managing money or other goods originating from criminal activities, or to give an appearance of legitimacy to said activities or to transactions or funds related to same.

ADHERES TO THE FOLLOWING PRINCIPLES

1. Client selection and identification, and knowledge of his/her economic activities.

2. Knowledge of the client and of his/her transactions with (Entity).
3. Cooperation with the authorities, supplying them with the required information for investigative and probatory purposes.

CHAPTER I

CLIENT SELECTION AND IDENTIFICATION, AND KNOWLEDGE OF HIS/HER ECONOMIC ACTIVITIES

(Entity) will make its best effort to select its clients, both regular and occasional, and to properly identify them, as indicated below:

1. Opening of checking and savings accounts

On opening of an account, a form will be filled out, which will include the client's minimum identification information, such as full name, profession, occupation, address and phone number.

Additionally, and in order to obtain a client's full identification, (Entity) will request the following:

- a) A minimum amount can be established in regards to which the following requirements should be met, should the client's profile be one that would suggest that the account is not to have significant movements. The minimum amount should be justified based on: product marketing, and on the entity's operational capacity and technological development level.
- b) Submit a copy of the Colombian citizenship document (cédula) or the foreigner's identification document for natural residents or foreigners, as the case may be, including the right forefinger print.
- c) Showing of the passport and the right forefinger print for non resident natural persons (individuals).

- d) Checking of the colombian citizenship document with the Information Center of the Colombian Banking and Financial Entitie's Association.
- e) Submittal of the Tax Identification Number (NIT) and a current Certificate of Existence and Representation in the case of national legal persons (entitie's), or of an equivalent document, duly notarized with the respective consulate in the case of foreign legal persons (entitie's).

Nevertheless, and with regards to the legal representative or the attorney, both of legal (entitie's) and natural persons (individuals), local or foreign, paragraphs a) and b) for natural persons will apply (individuals). This fact should be accredited for representation purposes.

- f) Form _____ will be filled out for deposit of the first installment, should it exceed seven million five hundred thousand pesos (\$7,500,000), and should it be made in cash.
- g) Personal, banking and commercial references.

2. Cash deposits in excess of seven million five hundred thousand pesos (Col. \$7.500.000)

1. Form _____ will be filled out for cash deposits in excess of, seven million five hundred thousand pesos (Col. \$7,500,000).
2. In case of regular and well known clients, who due to the nature of their business or licit activities must handle significant amounts of cash, the (Entity) and the client, subject to _____'s prior approval, will settle all cash activity on a monthly basis, and will fill out form _____.

3. Form _____ will be used for opening of term deposits for cash amounts equal to or in excess of seven million five hundred thousand pesos (\$7,500,000).

4. Drafts and transfers

Form _____ will be used for cash drafts and transfers for amounts equal to or in excess of seven million five hundred thousand pesos (\$7,500,000).

5. Purchase and sale of foreign currency in cash

The client will fill out form _____ for all foreign currency cash purchases and sales for amounts equal to or in excess of ten thousand US dollars (US \$10,000).

6. Cash trust accounts or contracts

Form _____ will be filled out for cash trust accounts for amounts equal to or in excess of seven million five hundred thousand pesos (\$7,500,000).

7. Safety deposit boxes

Given the nature of safety deposit box contracts, (Entity) will only execute them with regular and well known clients for whom the legitimacy of their business can be clearly inferred.

8. Deposit of goods

In the case of deposits of goods appraised over \$ _____, (Entity) will identify its client as per numeral 1 of chapter 1 of this code, as applicable, and will fill out the deposit form, which will include both a description of the goods and their appraised value. Should the good deposited be appraised below the value set herein,

or should (Entity) provide customs zone services, or should the goods be deposited as a result of an operation made by the client with a credit entity, (Entity) will, at any time before delivering the goods, make an effort to identify the minimum contents of the deposit registration document, which will include, among others, name, identification document, tax identification number, address, phone number, goods deposited, and profession or occupation.

9. Other operations

For any operation other than those indicated herein, (Entity) will obtain adequate client identification information as per minimum requirements set forth in numeral one of this chapter.

In the case of those operations referred to in numerals 2, 3, 4 and 5, the set of cash transactions which, when added together, exceed seven million five hundred thousand pesos (\$7,500,000), ten thousand US dollars (US \$10,000) or its equivalent in other currencies, will be considered as a single transaction, should they be conducted by or on behalf of the same person during the same day, in one or more offices, and which may be subject of accumulation using technical and operational means available to the entity during its normal course of activities, so that it will be possible for the officer in charge to determine if, through addition of the amounts of the individual transactions made by or on behalf of a certain person, the amounts specified herein will be reached or exceeded. In this case, form _____ will be filled out.

CHAPTER II

KNOWLEDGE OF THE CLIENT AND OF HIS/HER TRANSACTION WITH (ENTITY)

Based on client identification information and selection, and according with chapter 1 of this code, (Entity) will set forth general

analysis criteria for all operations carried with it, in order to determine their coherence with the client's activity.

For this, it will establish, as a minimum, the following general analysis criteria:

1. Activity of checking and savings accounts with monthly averages in excess of \$ ____.

Average of the amounts deposited during ____ months, in order to determine changes (periodicity) in which it was exceeded ____ times.

(The minimum control average for account activity, the period and the deviation, will be set based on the entity's operational capacity and its technological development).

2. Operations with (Entity) other than those indicated in the above numeral.

As a minimum criteria for analysis of operations other than those described in the previous numeral, consideration will be given as to whether they imply a substantial, unjustified and sudden change in aspects such as the following, taking into consideration their specific nature:

- a) Liquidity volume, specifically in cash, with regards to the normal business development.
- b) Decrease of financing sources with regards to business levels or economic activities.
- c) Decrease on financial liabilities with regards to non specified financing sources.

- d) Abnormal exports, that is, their excessive increase, or exports which are not related to the client's normal activities, or for which there may not be a reasonable demand abroad.
- e) Immediate settlement of liabilities with (the entity) without reasonable justification as to sources of income.

(Application of these general analysis criteria may be limited to certain operations and to certain amounts, depending on the type of business, its operational capacity and its technical development).

Additionally, (Entity) will make visits to the clients' head offices, depending on the volume of their business transactions.

CHAPTER III

COOPERATION WITH THE AUTHORITIES THROUGH DELIVERY OF INFORMATION FOR INVESTIGATIVE AND PROBATORY PURPOSES

(Entity) will cooperate with the General Prosecutor's Office or with any special Judicial Police forces which it may designate, reporting the following:

1. Any relevant information on operations which, due to their value or nature, reasonably suggest a substantial deviation from the client's economic activities, through the (Entity)'s knowledge deriving from application of criteria and procedures established above.
2. Client transactions which, on account of their number, amounts or characteristics, may reasonably suggest that (Entity) is being used for illicit activities, as per profiles, parameters and definitions previously assigned to said activities and operations by a committee formed for this purpose with officials from the General Prosecutor's Office, from the Bank Superintendency and from the Colombian Banking and Financial Entities Association.

With regards to these information requirements, (Entity) will comply with them whenever so required by the Regional Directors or by the Colombian General Prosecutor's Office's branch offices, without prejudice to complying with it immediately and sufficiently, but no later than five (5) banking days after said information becomes available.

3. Any other information requested by the General Prosecutor's Office, in a legal and proper form, directly or through those entities acting as Judicial Police. The information will be reported in magnetic media, through the Bank Superintendency, in form, periodicity and technical conditions to be established by said entity.

(Entity) and its employees will not inform clients who may have conducted, or who may intend to conduct, suspicious operations, as defined in numeral 2, that the General Prosecutor's Office has been informed of said operations, and will maintain secrecy with regards to them. Cooperation with foreign judicial and police entities will be handled through the proper local authorities and as per applicable international norms.

CHAPTER IV

INTERNAL NORMS

(Entity) will undertake the following actions:

- a) To integrate this code within its own procedures, manuals and instructions.
- b) To establish an auditing and control system to guarantee its fulfillment.
- c) To train its employees in its application.

SCHEDULE 3
INTERBANK AGREEMENT
TRAINING PROGRAM ON CONTROL AND
PREVENTION OF ASSET LAUNDERING

JUNE 5, 1996

INTRODUCTION

Given the Colombian financial sector's objectives of preventing that it may be used for concealment and handling of funds originating from illicit activities, and taking into account that training of the sector's personnel is essential for an adequate application of control and prevention mechanisms, Asobancaria has prepared the training program described in this document.

It is the result of the agreement executed between Asobancaria and the General Attorney's Office. Both the Bank Superintendency and the General Attorney's Office had access to the program's contents, and expressed their support.

Following the Basle Committee guidelines, which set forth as basic principle that of "sufficient and permanent training of bank employees", a mandatory training program is proposed for all employees of the financial sector, giving due consideration to their positions and responsibilities, from those whose basic function is that of serving clients to those in executive positions. The program will also be directed to the General Attorney's Office employees.

As such, a modular program has been designed, providing national coverage; it will be phase-implemented, using visual aids such as videos, booklets, manuals and case analysis.

This training program was approved as an interbank agreement during Asobancaria's Board of Directors meeting of June 5, 1996 (Minutes No. 501).

**THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ASSOCIATION OF
COLOMBIAN BANKING AND FINANCIAL ENTITIES -
ASOBANCARIA,**

CONSIDERING

1. That financial entities have recently adopted mechanisms and procedures which prevent them from being used as instruments for concealment, handling, investment or processing of funds originating from illicit activities;
2. That financial entities have been developing training programs on subjects related to the prevention of asset laundering;
3. That one of the main prevention mechanisms is a permanent and adequate training of the financial sector's personnel;

DECIDES

First: To adopt a training program on the control and prevention of laundering of illicit assets within the financial system, supplementing those programs specifically designed by each entity.

Second: Scope and objectives.

This training program will be mandatory for all personnel employed by all members of the Association of Colombian Banking and Financial Entities, and will use the modules containing those issues relevant to each position's functions.

The program's specific objectives are the following:

- Instruct the State's authority and the financial sector on asset laundering issues.
- Describe legal, administrative and operational aspects of asset laundering within the Colombian environment.
- Create an awareness within all financial institution's employees on their responsibility towards asset laundering.
- Make known the functions of the various authorities which are a part of the Inter-Institutional Committee Against Asset Laundering.
- Describe the Association of Colombian Banking and Financial Entities' role as an advisory body.

Third: Contents

The Association of Colombian Banking and Financial Entities, Asobancaria, will determine the training program's contents, taking the following issues into consideration:

1. Basic program contents

1.1 Program and methodology outline

1.2 Awareness

1.2.1 Economic delinquency, organized crime and evolution of the Mafia phenomenon.

1.2.2 Ethics or financial treaties and rights (deontology)

1.3 International regulation

- 1.3.1 Basle Declaration
- 1.3.2 Vienna Convention
- 1.3.3 Recommendation from the Financial Action Group - GAFI
- 1.3.4 Other international agreements
- 1.4 National regulation
 - 1.4.1 Decree 1872 of 1992
 - 1.4.2 Decree 663 of 1993, articles 102 through 107
 - 1.4.3 Law 190 of 1995, articles 31, 39, 40, 41 and 44
 - 1.4.4 Supplementary norms and interbank agreements
- 1.5 Concept, basic phases and laundering strategy
 - 1.5.1 Production and receiving
 - The term “production” and the norms aimed to directly repressing formation of illicit capital.
 - 1.5.2. Circulation, transformation or stratification
 - Preliminary considerations: Distinction between the production and the circulation phases. Pinpointing and explanation of the elements forming the “circulation” concept. Judicial and material circulation concepts.
 - Phenomenological issues of asset laundering (detailed classification and its case-by-case relevance). Market sectors for re-conversion of illicit capital.

- 1.5.3 Investment, integration or transfer of funds
 - The most exposed sectors with regards to illicit capital investment
- 1.6 Penal intervention in illicit capital production
 - 1.6.1 Investigative activity oriented towards preventing production of illicit capital.
 - Suspicious operations
 - Fractionated operations
 - 1.6.2 Analysis of operations and reports
- 1.7 Penal intervention in circulation
 - 1.7.1 Penal sub-species not directly destined to repression of asset laundering.
 - (Favoring and receiving - analysis of the Colombian case)
 - 1.7.2 Analysis of Article 177 from the Colombian Penal Code (Law 190 of 1995, article 31).
 - 1.7.3 Typification of laundering conduct
 - 1.7.4 Analysis of typification and punishability in the international field.
 - Orientation of the international community
 - Repression of some foreign regulations
- 1.8 Penal intervention in investments

- 1.8.1 Analysis of Article 177 from the Colombian Penal Code and its related legislation.
- 1.8.2 Considerations on laundering sub-species and the use of illicit capital.
- 1.9 Fiscal paradises and the most commonly used economic circuits.
 - 1.9.1 Simple operation
 - 1.9.2 Complex operation
 - 1.9.3 Off-shore locations (foreign)
- 1.10 Participation of financial entities in the fight against asset laundering.
 - 1.10.1 Bank secrecy and “non involvement”
 - 1.10.2 Incidence of norms within the Colombian context and in the comparative law.
 - 1.10.3 Client’s right to economic privacy
 - 1.10.4 Client identification and knowledge
 - Verification by the entity
 - Anonymity
 - 1.10.5 Analysis of client operations
 - Obligations
 - Types of operations

– Coherence of operations

1.10.6 Analysis of account activity

– Obligations

– Types of accounts (active, inactive)

1.11 Record keeping and computer technology

1.12 Obligation of internal surveillance

1.13 Reaction with regards to suspicious operations

1.13.1 Hierarchy levels

1.13.2 Operational management of warning signals

1.13.3 Cooperation with authorities and reporting

1.13.4 Execution programs

1.13.5 Declaration or report flow chart

1.14 Bankers' legal responsibility (civil, penal and administrative).

2. Intensification program

This program's purpose is to go deeper into areas of interest, to promote conscientious support of all criminal investigative actions being carried out by the authorities, and to reflect and criticize real issues, such as education of employees in their areas of responsibility within their respective institutions, divided as follows:

- Top management
- Commercial areas
- Operational areas
- Branches

SCHEDULE 4

**DECLARATION OF PRINCIPLES AND ACTIONS
FROM THE FINANCIAL SECTOR AGAINST
ASSET LAUNDERING**

JUNE 5, 1996

**THE COLOMBIAN FINANCIAL ENTITIES SIGNING
THIS DOCUMENT**

CONSIDERING

- a) That the financial sector is under obligation to adopt measures oriented towards protecting the interests of all public involved in financial activities, as set forth in article 335 of the Political Constitution.

- b) That it is a legal obligation of all Colombian authorities and of financial entities to preserve the public's trust in the financial sector, and that as such they must adopt the required measures in order to guarantee the sector's stability.

- c) That the Colombian Financial Sector's Organic Statute requires that financial institutions adopt adequate and sufficient control measures oriented to preventing that, in the normal course of their activities, they may be used as instruments for concealment, handling, investment or processing, in any way, of funds or other goods originating from criminal activities.

- d) That, in accordance with the Basle Committee recommendations, financial entities will not offer their services, or provide consultancy services, for operations about which there may be sufficient reason to suppose are related to illicit activities.

- e (That, as indicated by the Bank Superintendency, contractual freedom is fully applied in legal relations between financial entities and their clients; as such, it is possible that credit institutions may validly abstain from contracting banking services with the general public, through explicit legal authorization, being able to unilaterally close checking and savings accounts (document from the Bank Superintendency titled “Banking Activity: services to the public and how compulsory they are”).

- e) That, as included in their national and international cooperation objectives, Colombian financial institutions must take steps to avoid that eventual measures taken by the Government of the United States, issued on an exception basis in following Executive Order 12978, may seriously affect the financial sector and the Colombian economy in general.

DECLARE

1. That they will continue to make their best efforts in the application of all possible mechanisms which will prevent the financial sector from being used for concealment and handling of funds originating from illicit activities.

2. That they will continue to make their best efforts in order to prevent that the Executive Order from the President of the United States may seriously affect the financial system’s interests and the Colombian economy.

3. That they will continue their endeavors to self-regulate their behavior, through adoption of inter-bank agreements aiming to develop codes of conduct, will establish uniform client knowledge procedures, will reinforce training programs, and will develop all other elements required for preventing the Colombian financial sector from being used for concealment and handling of funds originating from illicit activities.

4. That they will continue to create self-regulation mechanisms allowing them to ensure compliance with inter-bank agreements.

Santafé de Bogotá, June 5, 1996

SCHEDULE 5

**FOLLOW-UP COMMISSION FOR
INTER-BANK AGREEMENTS ON ASSET
LAUNDERING**

JUNE 5, 1996

THE ASSOCIATION OF COLOMBIAN BANKING AND FINANCIAL ENTITIES' BOARD OF DIRECTORS

CONSIDERING:

- a) That one of the Association of Colombian Banking and Financial Entities' purposes is that of promoting and maintaining public trust in the financial system, thus protecting its image;
- b) That the Association of Colombian Banking and Financial Entities' Board of Directors, looking to self-regulate all activities carried out by financial entities, has issued, and will continue to issue, agreements aimed to obtaining uniform behavior on critical issues for the financial sector's development, within a legal framework and one of ethical and moral principles;
- c) That it is essential that the financial sector adopts self-regulation mechanisms which will allow it to adequately make a follow-up on inter-bank agreements, especially those related with the adoption of regulations of a uniform nature and of general application with regards to the prevention, detection and repression of illicit capital movements.

First: Create a follow-up commission, whose function will be to study the behavior of all of Asobancaria's member financial entities relating to agreements looking for a uniform and general application regulation with regards to the prevention, detection and repression of illicit capital movements.

Second: The follow-up commission will be formed by five members from the Board of Directors, each one representing each type of institutions affiliated to Asobancaria, that is, presidents from a bank, from a savings and loans association, from a financial corporation, from a trust company and from a general deposit store.

Third: Said commission will submit periodic reports to the Board of Directors, which will take any necessary actions, as per its statutory rights.

SCHEDULE 6
INTER-BANK AGREEMENT
CLIENT KNOWLEDGE

JUNE 5, 1996

INTRODUCTION

Financial institutions have been for some time now establishing clear internal policies and norms for the prevention and detection of illicit capital movements, as well as their own codes of conduct. Nevertheless, these individual efforts require of homogeneity of all norms and procedures, on one hand, and of institutional support on the other.

The Association of Colombian Banking and Financial Entities' Board of Directors, in its October 4, 1995 meeting, agreed on the creation of a Client Knowledge Committee, whose purpose is to unify procedures used for accepting new clients and to make it possible to comply with the Financial Sector's Organic Statute, articles 107 through 107, especially article 102, general regime, numeral 2 "control mechanisms", paragraph a), on the adequate knowledge of the clients' economic activities.

This agreement was approved during Asobancaria's Board of Directors meeting of June 5, 1996, and is the result of the work carried out by the Client Knowledge Committee. It contains the minimum information required by each financial entity in order to select its clients, both regular and occasional, as well as a guide for designing the application forms for opening of checking and savings accounts, and for making term deposits.

THE ASSOCIATION OF COLOMBIAN BANKING AND FINANCIAL ENTITIES' BOARD OF DIRECTORS

CONSIDERING

1. That through Agreement approved during the Association of Colombian Banking and Financial Entities' Board of Directors meeting of October 21, 1992, the role of the financial system in the detection, prevention, and repression of illicit capital movements was defined, considering that a financial entity may come to be unknowingly and unwillingly used as an intermediary for deposits, transactions and transfers of funds originating from, or destined to, criminal activities;
2. That the aforementioned Agreement sets forth that Asobancaria's members will make a reasonable effort to select and know their clients, either regular or occasional, to properly identify them, and to have an adequate knowledge of their transactions and activities, in order to establish their coherence;
3. That Chapter I of the Uniform Code of conduct proposed to Asobancaria's members with regards to their role in the detection, prevention and repression of illicit capital movements, as approved during the Board of Directors' meeting of October 21, 1992, indicates the documents and the information which financial entities must obtain from their clients in order to conduct a proper selection process, to identify them and to gain knowledge about their economic activities;
4. That an adequate knowledge of the client and his activities is required in order to establish a client's profile for any given financial entity, allowing it to detect unusual operations;
5. That it is necessary to amend Chapter I from the Uniform Code of conduct, as mentioned in numeral three, in order to supplement and

unify the documents and the information which the financial entities must obtain from their clients.

AGREES

FIRST: Amend numeral 1, Chapter I of the Uniform Code of conduct as approved by the Board of Directors during its October 21, 1992 meeting (Act 463), to read as follows:

"CHAPTER I

CLIENT SELECTION AND IDENTIFICATION, AND KNOWLEDGE OF HIS ECONOMIC ACTIVITIES

The financial entity will make its best efforts to select its clients, both regular and occasional, properly identifying them as follows:

1. Opening of checking accounts

1.1 Minimum mandatory information

A form containing at least the following information will be filled out for opening of checking accounts:

1.1.1 Natural person

1.1.1.1 Applicant's information

- Full name
- Identification number, date and place of issue
- Date and place of birth
- Home address and telephone
- Occupation or profession
- Details of economic activity (independent, employee, partner)

- Employer's name, address, telephone, fax
- Sex
- Marital status
- Number of dependent persons
- Education
- House (own, leased, rented; landlord's information and rent paid)

1.1.1.2 Applicant's financial information

- Source of funds used to open the account
- Monthly income and expenses
- Total assets (car, real estate, livestock) and liabilities (mortgage value, loans)

1.1.1.3 Spouse's information

- Spouse's information (full name, identification information, education, occupation, employer's address and telephone, income and expenses).

1.1.1.4 References

- From a family member, providing name, relationship and address
- Personal reference, providing name, telephone and address
- Two financial references, providing the entity's name, account number and branch
- Two commercial references, providing company names and phone numbers
- One or two credit cards, providing card numbers, issuing entity and branch

1.1.1.5 International operations

Should the client's activities involve transactions in foreign currency, identify the following:

- Type of transactions normally made: imports, exports, investments, loans in foreign currency, service payments, etc.
- Should applicant have checking accounts in foreign countries: account number, bank, city, country, currency

1.1.1.6 Annexes

The following must be obtained as a minimum as annexes to information required in numerals 1.1.1.1 through 1.1.1.5.

- Copy of identification document: citizenship card, identity card, foreigner's card.
- Applicant's fingerprints
- Applicant's signature
- Work certificate
- Photograph¹
- Voluntary declaration on source of funds
- Income and retentions certificate, income tax return
- Last year's balance sheet (as applicable)
- Bank statements from the previous three months (checking and/or savings accounts, as applicable)
- Fees certificate (as applicable)
- Authorization for checking and reporting to Risk Central
- Risk Central report

1.1.2 Legal person

1.1.2.1 Applicant's information

- Business name
- Tax Identification Number
- Legal representative's name
- Identification number of legal representative

1. Refer to numeral 5. Clarifications at the end of the document.

- Address, phone number, fax, and present location of the head offices, agencies and branch offices¹
- Type of company: private, public, mixed, other
- Main economic activity: commercial, industrial, transportation, construction, agro-industry, financial services, etc., according with the International Uniform Industry Code.

1.1.2.2 Applicant's financial information

- Source of funds used to open the account
- Monthly income and expenses
- Total assets (car, real estate, livestock) and liabilities (mortgage value, loans)

1.1.2.3 References

- Two financial references, providing company name, account number, product and branch

1.1.2.4 International operations

Should the client's activities involve transactions in foreign currency, identify the following:

- Type of transactions normally made: imports, exports, investments, loans in foreign currency, service payments, etc.
- Should applicant have checking accounts in foreign countries: account number, bank, city, country, currency

1.1.2.5 Annexes

The following must be obtained as a minimum as annexes to information required in numerals 1.1.2.1 through 1.1.2.4.

- Valid certificate of existence and legal representation issued by the Chamber of Commerce or the relevant entity
- Copy of the Tax Identification Number
- Legal representative’s signature and fingerprints
- Copies of identification documents of the legal representative and of persons with authorized signatures
- Risk Central report
- List of main suppliers and clients, including their geographic location¹
- List of main partners and/or shareholders¹
- Voluntary declaration of source of funds
- Income tax returns for the last tax period
- Financial statements from the month previous to the month in which application is filed¹
- Last year’s balance sheet (as applicable)
- Bank statements from the previous three months (checking and/or savings accounts, as applicable)
- Authorization for checking and reporting to Risk Central

1.2 Optional information

As additional information, it is recommended that financial entities obtain from their clients the following information for opening of checking accounts:

- Product information: branch in which account is to be opened, address and manner in which mail and statements are to be delivered
- Information for credit requests: type of guarantee, amount requested, term and destination.
- Relationship with other entity’s clients: names and phone numbers.

2. Opening of savings accounts

2.1 Minimum required information

In order to open a savings account, a form containing at least the following information will be filled out:

2.1.1 Natural person

2.1.1.1 Applicant's information

- Full name
- Identification number, place and date of issue
- Date and place of birth
- Home address and phone number
- Occupation or profession
- Details on economic activity (independent, employee, partner)
- Employer's name, address, telephone, fax

2.1.1.2 Applicant's financial information

- Source of funds used to open the account

2.1.1.3 References

- From a family member, providing name, relationship and address
- Personal reference, providing name, telephone and address

2.1.1.4 International operations

Should the client's activities involve transactions in foreign currency, identify the following:

- Type of transactions normally made: imports, exports, investments, loans in foreign currency, service payments, etc.

2.1.1.5 Annexes

The following must be obtained as a minimum as annexes to information required in numerals 2.1.1.1 through 2.1.1.4.

- Copy of identification document: citizenship card, identity card, foreigner's card.
- Applicant's fingerprints
- Applicant's signature
- Authorization for checking and reporting to Risk Central
- Voluntary declaration on source of funds

2.1.2 Legal person

2.1.2.1 Applicant's information

- Business name
- Tax Identification Number
- Legal representative's name
- Identification number of legal representative
- Address, phone number, fax, and present location of the head offices
- Type of company: private, public, mixed, other
- Main economic activity: commercial, industrial, transportation, construction, agro-industry, financial services, etc., according with the International Uniform Industry Code.

2.1.2.2 Applicant's financial information

- Source of funds used to open the account

2.1.2.3 International operations

Should the client's activities involve transactions in foreign currency, identify the following:

- Type of transactions normally made: imports, exports, investments, loans in foreign currency, service payments, etc.

2.1.2.4 Annexes

The following must be obtained as a minimum as annexes to information required in numerals 2.1.2.1 through 2.1.2.3.

- Valid certificate of existence and legal representation issued by the Chamber of Commerce or the relevant entity
- Copy of the Tax Identification Number
- Legal representative's signature and fingerprints
- Copies of identification documents of the legal representative and of persons with authorized signatures
- Voluntary declaration of source of funds
- Authorization for checking and reporting to Risk Central

2.2 Exceptions to minimum required information

As per numeral 4, article 102 of Decree 663 of 1993, financial entities will be able to set a minimum amount under which information indicated in numeral 2.1 will not be required for opening of savings accounts, whenever the client's profile is known and it can be assumed that the account will not have significant activity.

The minimum amount established will be reported and justified by the financial entity's legal representative to the Follow-up Commission created by the Board of Directors in its June 5, 1996 meeting. Said determination will be justified depending on the entity's product marketing, operational capacity and technological development level.

2.3 Optional information

As additional information, it is recommended that financial entities obtain from their clients the following information for opening of savings accounts:

2.3.1 Applicant's information

2.3.1.1 Natural person

- Education
- Number of dependent persons
- Marital status
- Monthly income and detailed total assets
- Relationship with other entity's clients: names and telephone numbers

2.3.1.2 Legal person

- Monthly income and detailed total assets
- Relationship with other entity's clients: names and telephone numbers

2.3.2 Optional documents

- Income and retention certificate
- Income tax return
- Current financial statements
- Fees certificate
- Savings or checking account statements for the last three months

3. Term deposits

3.1 Minimum required information for single beneficiary term deposits

The following information will be obtained for term deposits:

3.1.1 Natural person

3.1.1.1 Applicant's information

- Full name
- Identification number, date and place of issue
- Date and place of birth
- Home address and telephone number
- Occupation or profession
- Details on economic activity (independent, employee, partner)
- Employer's name, address, telephone, fax

3.1.1.2 Applicant's financial information

- Source of funds used to open the account

3.1.1.3 References

- From a family member, providing name, relationship and address
- Personal reference, providing name, telephone and address

3.1.1.4 Annexes

The following must be obtained as a minimum as annexes to information required in numerals 3.1.1.1 through 3.1.1.3.

- Copy of identification document: citizenship card, identity card, foreigner's card.
- Applicant's fingerprints
- Applicant's signature
- Authorization for checking and reporting to Risk Central
- Voluntary declaration on source of funds

3.1.2 Legal person

3.1.2.1 Applicant's information

- Business name
- Tax Identification Number
- Legal representative's name
- Identification number of legal representative
- Address, phone number, fax, and present location of the head offices
- Type of company: private, public, mixed, other
- Main economic activity: commercial, industrial, transportation, construction, agro-industry, financial services, etc., according with the International Uniform Industry Code.

3.1.2.2 Applicant's financial information

- Source of funds used to open the account

3.1.2.3 Annexes

The following must be obtained as a minimum as annexes to information required in numerals 3.1.2.1 through 3.1.2.2.

- Valid certificate of existence and legal representation issued by the Chamber of Commerce or the relevant entity
- Copy of the Tax Identification Number
- Legal representative's signature and fingerprints
- Copies of identification documents of the legal representative and of persons with authorized signatures
- Voluntary declaration of source of funds
- Authorization for checking and reporting to Risk Central

3.2 Optional information

As additional information, it is recommended that financial entities obtain from their clients the following information for making term deposits:

3.2.1 Applicant's information

3.2.1.1 Natural person

- Education
- Number of dependent persons
- Marital status
- Monthly income and detailed total assets
- Relationship with other entity's clients: names and telephone numbers

3.2.1.2 Legal person

- Monthly income and detailed total assets
- Relationship with other entity's clients: names and telephone numbers

3.2.2 Optional documents

- Income and retention certificate
- Income tax return
- Current financial statements
- Fees certificate
- Bank statements for the last three months

3.3 Multiple beneficiary term deposits

All information required for natural or legal persons will be obtained from each beneficiary. Signature and fingerprints from at least one beneficiary are required.

3.4 Term deposits through third parties

3.4.1 Through a proxy

A duly notarized power of attorney, certified as to signature and contents, is required; the document will include the beneficiary's signature and fingerprint. In case of multiple beneficiaries, they must be included in the power of attorney, and the person signing it must be a beneficiary. All information required for natural persons will be obtained from each beneficiary.

3.4.2 Through a stock broker

The broker must be duly registered with the Superintendency of Securities.

The financial entity will keep the following documents up to date:

- A certificate accrediting the stock broker
- Signature of the stock broker's legal representative and of all officers authorized to conduct this type of operation.

Considering that it is understood that stock brokers are required to adopt those mechanisms set forth in articles 102 through 107 from Decree 663 of 1993 (article 39, Law 190 of 1995) in order to obtain information from those clients for which securities are being issued, the financial entities will adopt the procedures required to obtain the respective certification.

3.5 Other term deposit operations

In case of changes or addition of beneficiaries, mergers and divisions, all requirements set forth in numerals 3.1 through 3.4 will be complied with.

Whenever the title endorsement has not been registered prior to the maturity date, the signature and fingerprint of the person cashing the title will be required, together with a copy of his identification document.

4. Declaration of the source of the funds

Financial entities will request from their clients a signed declaration on the source of the funds, for which the following wording is proposed:

DECLARATION OF SOURCE OF FUNDS

The undersigned _____, identified with identification document _____ issued in _____, acting voluntarily and on his own behalf, and attesting to the fact that everything indicated herein is true and correct, makes the following declaration to _____ on the source of the funds, in order to comply with that set forth in External Bulletin 007 of 1996 issued by the Bank Superintendency, the Financial Sector's Organic Statute, Decree 663 of 1993, Law 190 of 1995 (Anti-corruption Statute), and with all other related legal regulations applicable to opening and handling of checking and savings accounts and for term deposits.

1. The sources of the funds deposited are the following (details of occupation, profession, activity, business, etc.):

-
2. I hereby declare that resources deposited do not originate from any of the illegal activities contemplated in the Colombian Penal Code or in any norm which may amend or add to it.
 3. I will not allow third parties to make deposits to my accounts with funds originating from the illicit activities contemplated in the Colombian Penal Code or in any norm which may amend or add to it, nor will I make any transactions destined to such activities or on behalf of persons in any way related to same.

4. I hereby authorize the institution to close all accounts and deposits I may hold in it in case of infringement of any of the regulations and norms contained in this document, and hereby hold the entity harmless of all responsibility deriving from false, inaccurate or erroneous information which I may have provided in this document, or from violation of same.

In witness whereof, having read and understood the above, I sign this document on _____, in _____.

Client's signature

5. Clarifications

The requirements included in this document follow the Bank Superintendency's requirements set forth in Basic Bulletin 007 of 1997, some of which Asobancaria has requested be amended (information and annexes marked with an * for opening of checking accounts).

On the date of publication of this agreement there has been no ruling from the Bank Superintendency. Once the indicated requirements on the aforementioned bulletin are eliminated, they will be automatically deleted from this agreement.

In case of natural and legal persons, attention should be paid to that set forth by the Colombian law to this respect.

SECOND: This agreement will come into force on September 1, 1996.

Adherence to this agreement will be come about by written notification from the member entities' legal representative".

SCHEDULE

GUIDE FOR PREPARATION OF BASIC FORMS FOR ACCEPTANCE OF CLIENTS FOR CHECKING AND SAVINGS ACCOUNTS AND FOR TERM DEPOSITS

The guide has four columns:

Column 1: Type of information for the following sub-groups:

1. Applicant's information
2. Financial information
3. Spouse's information (natural person for checking account)
4. References
5. International operations
6. Authorization for checking and reporting to Risk Central

Column 2: Product for which information is required

Column 3: Detail of information which must be included in the client's application form

Column 4: Annexes which must be requested as supporting information

A color code is assigned to each *type of information*, depending on the product:

Red: Compulsory for any product

Green: Additional for savings accounts (additional to the information required in red)

Blue: Additional for checking accounts (additional to the information required in red and in green)

The compulsory information and attachments (red boxes) must be obtained for any product. Checking accounts require the additional information and attachments requested in the blue and green boxes. Savings accounts require the information and attachments requested in the green boxes.

The above information and attachments constitute the minimum information to be required for each type of product.

SCHEDULE
INSTRUCTIONS FOR COMPLETION OF BASIC FORMS TO BE USED WHEN ACCEPTING
A NEW CLIENT FOR: CHECKING ACCOUNTS, SAVINGS ACCOUNTS
AND TERM DEPOSIT OPERATIONS

1. INDIVIDUALS

| ① | ② | ③ | ④ |
|---------------------------------|------------------|--|---|
| TYPE OF INFORM. | PRODUCT | INFORMATION REQUESTED | ATTACHMENTS |
| APPLICANT'S GENERAL INFORMATION | ANY PRODUCT | Full name I.D. number and place & date of issue Place and date of birth Home address and telephone number Job or profession. Detail of business activity (independent, employee or partner) Business name, address, fax and telephone No. | Photocopy of applicant's I.D. Colombian citizenship card for adults Colombian citizenship card for minors Alien's Colombian I.D card Applicant's fingerprint record Applicant's signature record |
| | CHECKING ACCOUNT | + | + |
| FINANCIAL INFORMATION | ANY PRODUCT | Origin of the funds with which the account is being opened | Voluntary statement as to the origin of the funds |
| | CHECKING ACCOUNT | + | + |
| | | Monthly income and expenses Total assets (car, real state, livestock) and liabilities (amount of pledges, mortgages and/or loans) | Income and withholding certificate issued by employer or income tax return statement. Balance sheets of the past year. Bank statement of the past three months (checking and/or saving as applicable). Certificate of payment of professional fees. Risk Agency report |

These instructions include all requirements of Banking Superintendency, Rule 007/96

Page 1/4

1. INDIVIDUALS

| ① TYPE OF INFOR. | ② PRODUCT | ③ INFORMATION REQUESTED | ④ ATTACHMENTS |
|--------------------------|---|---|------------------|
| | SPOUSE'S INFORMATION CHECKING ACCOUNT | Information on the spouse (full name, I.D., education level, business address and telephone number, income and expenses) | |
| REFERENCES | ANY PRODUCT | One from a relative, showing name, kin degree, telephone number and address One personal, showing name, telephone number and adress. | |
| | | + | |
| | CHECKING ACCOUNT | Two financial, showing name of entity, account number and name of branch Two comercial, showing name, telephone number One or two from credit card institutions, showing Card No., credit limit, card issuer and branch | |
| | | | |
| INTERNATIONAL OPERATIONS | If the client's activities imply foreign currency transactions: | | |
| | SAVINGS ACCOUNT | Type of transactions: - Imports - Exports - Investments - Foreign currency loans - Payment of services/utilities - Others | |
| | | + | |
| | CHECKING ACCOUNT | Account number, bank, city, country and currency | |
| | ANY PRODUCT | AUTORIZATION TO CONSULT AND REPORT TO RISK AGENCIES | |

These instructions include all requirements of Banking Superintendency, Rule 007/96

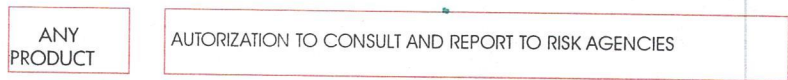
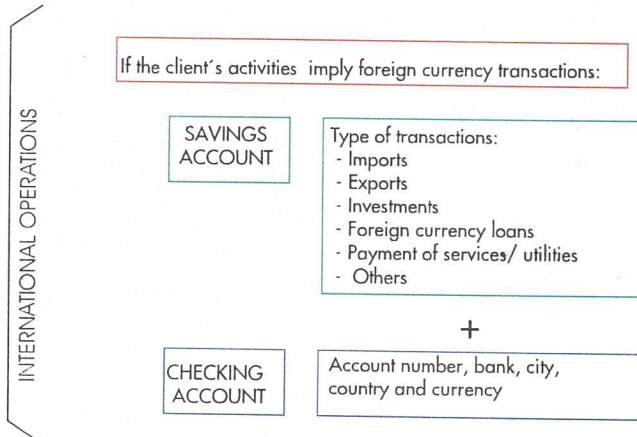
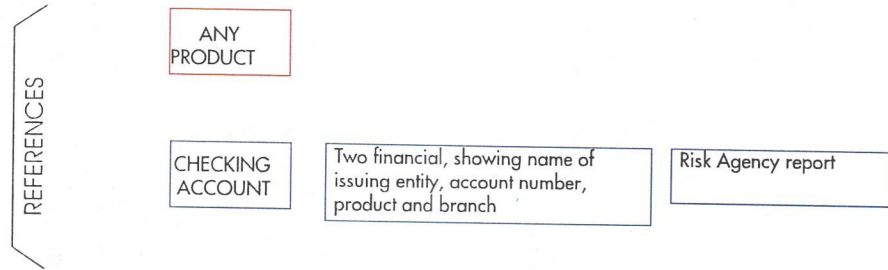
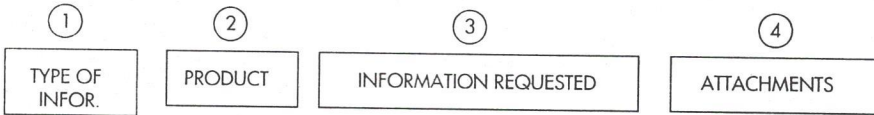
Page 2/4

2. JURIDICAL PERSONS - CORPORATIONS

| ① TYPE OF INFOR. | ② PRODUCT | ③ INFORMATION REQUESTED | ④ ATTACHMENTS |
|---------------------------------|------------------|---|---|
| APPLICANT'S GENERAL INFORMATION | ANY PRODUCT | Corporate name Tax identification number (NIT) Name of the legal representative Legal representative's I.D. number Address, telephone & fax numbers and city of the main office. Company type: private, public, mixed capital, others Main economic activity: commercial, industrial, transportation, financial services, agrobusiness, construction, etc., as provided for by the CIIU international code (Uniform Industry International Code). | Standing certificate of existence and legal representation issued by the Chamber of Commerce or other competent authorities Photocopy of the company's tax identification number Fingerprint and signature record of the company's legal representative Photocopy of the I.D. of the legal representative and others persons whose signatures are authorized |
| | CHECKING ACCOUNT | + Address, telephone & fax numbers of the main office, agencies and branches | + List of main suppliers and clients, including their geographical location List of main partners and/ or shareholders |
| | ANY PRODUCT | Origin of the funds with which the account is to be opened | Voluntary statement as to the origin of the funds |
| | CHECKING ACCOUNT | + Monthly income and expenses Total assets (car, real state, livestock) and liabilities (amount of pledges, mortgages and/ or loans) | + Latest available income tax return statement for the preceding fiscal period. Financial statements corresponding to the month immediately preceding the month during which the application is submitted Available bank statements of the past 3 months (checking and/ or savings) |

These instructions include all requirements of Banking Superintendency, Rule 007/96 Page 3/4

2. JURIDICAL PERSONS - CORPORATIONS



These instructions include all requirements of Banking Superintendency, Rule 007/96

Page 4/4

SCHEDULE 7

LAW 333

DECEMBER 19, 1996

Whereby provisions regarding ASSET FORFEITURE are enacted

THE CONGRESS OF COLOMBIA DECREES :

CHAPTER I

FORFEITURE

Article 1.- Concept. For the purposes of this law, asset forfeiture is understood to be the loss of the right in favor of the State, without any payment or compensation whatsoever.

Article 2.- Grounds. Courts shall provide judgments declaring the forfeiture of the assets arising directly or indirectly from the exercise of the activities established herein or which have been used as means or instruments to carry out the same. Such activities are :

1. Illicit wealthgain of public servants or private individuals.
2. Damage to the Public Treasury arising from the crimes of embezzlement, illegal interest in entering into contracts, of contracts entered into without legal requirements, illegal issuance of money ; illicit exercise of monopolistic activities or revenue-raising activities reserved for the State, theft of instruments or goods designated for national security and defense ; crimes against property which comprise assets of the State ; improper use of privileged information ; use of privileged information ; use of matters subject to confidentiality.

3. Serious deterioration of the social morale. For purposes of this law, it is understood that the acts which deteriorate the social morale are those contemplated in the National Narcotics Statute as amended, acting as a straw man, asset laundering, crimes against the social economic order, crimes against natural resources ; manufacturing and traffic of arms and ammunition for the exclusive use of the military forces, graft, bribery, influence peddling, rebellion, sedition, riot, or arising out of kidnapping, extortive kidnapping or extortion.
4. Acts in which the goods are used as means or instruments of criminal actions or are designated for them, unless they are subject to confiscation or attachment ordered within the criminal procedure by means of firm judgment.
5. Asset forfeiture shall also be applicable when the illegality of the origin of the goods has been judicially declared in the events established in paragraphs 2 and 3 of article of this Law, and in the Code of Criminal Procedure.

Article 3. Assets. - For the purposes of this Law all proprietary interests of chattels or real property will be understood as property subject to forfeiture, except for the very personal rights that are afforded by law to every human being.

Forfeiture shall also be declared over the product of goods acquired in the circumstances mentioned herein, those derived from them, their yields, returns, and over the resources arising out of the sale or exchange of goods acquired illegally or designated for criminal activities or which are considered as a product, effect, instrument or object of crime. When goods of an illicit origin are mixed with goods legally acquired, asset forfeiture will apply only up to the amount of the illicit gain.

Article 4. Assets acquired by acts between living individuals. - In the case of goods transferred through an act between living individuals, asset forfeiture shall apply when a seller has acquired them in the cases contemplated in article two and the buyers have acted intentionally or with gross negligence with regard to the knowledge of the grounds contemplated herein.

In cases in which a trust or fiduciary administration has been established over the assets for which asset forfeiture is sought, it will suffice for any one of the grounds established in article two to be predicated in the trustee or trustor in order for it to be applicable, without prejudice to the rights of the trust company to its remuneration and to the rights of the beneficiaries and third parties who have not acted intentionally or with gross negligence.

The provisions of this Law will not affect the rights which, according to civil laws, are derived from legal agreements validly entered into, nor the invalidity, annulment, resolution, rescission or unenforceability there of upon the parties and third parties, nor those inherent to the payment of sums not owed nor to the exercise of liberal professions.

Article 5. - Assets acquired by cause of death. Asset forfeiture shall apply in inheritance proceedings, when said asset have been acquired by the deceased in any of the circumstances established in article two herein.

In the event that the partition has been completed and the heir has paid taxes, including windfall gains if any, the State must return them in order for the judgment to be enforced.

Article 6. - Equivalent assets. When it is not possible to locate, impound or apprehend certain assets subject to asset forfeiture, at the moment of the judgment the Judge will be able to declare the forfeiture of the asset in question, for an equivalent value. The provisions of this article may not be interpreted in detriment of third parties acting in good faith.

Paragraph.- Before the first stage judgment, the judge that hearing the asset forfeiture case cannot apprehend, take possession of, or order the practice of precautionary measures on equivalent assets.

CHAPTER II

ACTION OF ASSET FORFEITURE

Article 7.- Nature of the action. The asset forfeiture action set forth herein bears a jurisdictional and *in rem* nature, and it shall apply against the real or alleged holder or the real beneficiaries of the asset, regardless of who has them or who has acquired them, but without prejudice to the rights of third parties acting in good faith. In no case may the asset forfeiture action be used independently, if there are criminal proceeding under way.

If the criminal action is extinguished or terminated without the issuance of a decision over such assets, the procedure shall continue before the same officer that heard the criminal case and the declaration forfeiture shall apply to those assets acquired under any circumstances mentioned herein.

If, once the criminal procedure in terminated, new assets appear, in any case the asset forfeiture action shall proceed before the same officer that heard the corresponding criminal action.

Article 8. Legitimation. The National Narcotics Directorship, the General Accountant's Office, and the General Prosecutor's Office, according to their specialization shall officiously or upon petition by person, or by foreign entities or authorities or international organizations, exercise the asset forfeiture action on grounds stated herein. The Prosecutor General's Office shall initiate it officiously.

Paragraph. According to the treaties and reciprocal collaboration agreements, the foreign entities or authorities or international

organizations authorized to do so may request the initiation of the asset forfeiture action hereunder.

Article 9. Statute of limitation. The asset forfeiture action shall expire after a twenty (20) year period beginning on the last acquisition or illicit destination of assets, as the case may be.

Article 10. Autonomy. Asset Forfeiture is different and independent from criminal liability proceeding is supplementary to criminal action.

The declaration of asset forfeiture shall reside with the judges that are competent to take cognizance on actions. Consequently, authorized state entities, in case in which the assets stem from criminal activity, shall enforce the action established herein when the criminal action ends for whatever reason without declaring the forfeiture of all or part of the assets considered a product, effect, instrument or object of the crime. For all other grounds, said State agencies must enforce the action with absolute independence of the criminal proceedings.

Court judgment declaring the illegality of the acquisition of the ownership rights over assets in a criminal proceeding and the corresponding judgments shall be proof of the illicit origin of the assets.

SCHEDULE 8

LAW 365

FEBRUARY 21, 1997

“Whereby the rules are established aimed to COMBAT ORGANIZED CRIME and other measures are issued”

THE CONGRESS OF COLOMBIA

DECREES:

Article 1. Sub-Article 4 of Article 42 of the Criminal Code, shall read as follows:

4. Prohibition of the exercise of a trade, profession or activity, industry or business.

Article 2. The Criminal Procedure Code is supplemented with the following Article 61A:

Article 61A. Cancellation of the legal capacity of enterprises or organizations engaged in the development of criminal activities or closing of their business premises or establishments open to the public.- When at any time in the process the judicial officer finds proof that legal entities, enterprises or organizations have been either totally or partially engaged in the development of criminal activities, he shall order the competent authority with, prior compliance with the legal requirements established for that purpose, proceed to the cancellation of their legal capacity or to the closing of their business premises or establishments open to the public.

Article 3. Article 44 of the Criminal Code, shall read as follows:

Article 44. Duration of the penalty.- The maximum duration of the penalty shall be:

- Imprisonment, for up to sixty (60) years.
- Arrest, for up to eight (8) years.
- Home detention, for up to five (5) years.
- Prohibition of rights and public functions, for up to ten (10) years.
- Prohibition of the exercise of a trade, profession or activity, industry or business, for up to five (5) years.
- Loss of the parental rights, for up to fifteen (15) years.

Article 4. Article 58 of the Criminal Code, shall read as follows:

Article 58. Prohibition of the exercise of an industry, business, trade, profession or activity.- Whenever a crime is committed which abuses the exercise of an industry, business, trade, profession or activity, or failing to comply with the obligations arising from said activities, the judge after assessing the penalty, shall deprive the responsible party of his rights to practice said industry, business, trade, profession or activity, for a period of up to five (5) years.

Article 5. The Criminal Code shall be supplemented with the following Article 63A:

Article 63A. Aggravation for the place of commission of a crime.- When the punishable deed is totally or partially directed or committed from within a penitentiary by whomever is deprived from his liberty, or totally or partially outside of the national territory, the penalty shall

be increased by up one-half, provided that said circumstances do not constitute an autonomous punishable act or an element of same.

Article 6. Article 176 of the Criminal Code shall be supplemented with the following paragraph:

Paragraph. Anyone who assists in evading the action of an authority or hinders the corresponding investigation of the punishable deeds of extortion, illicit enrichment, kidnapping with extortion, or trafficking in toxic drugs, narcotics or psychotropic substances, shall be subject to imprisonment of four (4) to twelve (12) years.

Article 7. Article 177 of the Criminal Code, shall read as follows:

Article 177. Receiving. Anyone who without having taken part in the commission of a crime, purchases, possesses, converts or transfers real properties or movable assets which have their mediate or intermediate origin in a crime, or who carries out any other act to conceal or hide their illicit origin, shall be subject to imprisonment for one (1) to five (5) years and a fine of five (5) to five hundred (500) legal minimum monthly salaries, provided that this by itself does not constitute a separate greater crime.

If the conduct is carried out with regard to an asset whose value exceeds one thousand (1.000) legal minimum monthly salaries, the penalty shall be increased by from one-third to one-half.

Article 8. Article 186 of the Criminal Code, shall read as follows:

Article 186. Conspiracy to commit a crime: When several persons have conspired to commit crimes, each of them shall be subject, for that act alone, to imprisonment for three (3) to six (6) years.

If the action is carried out in an uninhabited place or with weapons, the penalty shall be from three (3) to nine (9) years.

When the conspiracy is to commit terrorism, drug trafficking, kidnapping with extortion, extortion, or to conform death squads, private justice groups or groups of paid killers, the penalty shall be imprisonment for ten (10) to fifteen (15) years and a fine of from two thousand (2.000) up to fifty thousand (50.000) legal minimum monthly salaries.

The penalty shall be increased from twice to three times for those who organize, promote, direct, command, constitute or finance a conspiracy or association to commit a crime.

Article 9. Title VII of Book II of the Criminal Code, will have a Third Chapter titled “On the Laundering of assets” with the following articles:

Article 247A. Laundering of Assets: One who acquires, keeps and protects, invests in, transports, converts, maintains, custody of, or administers properties which have their mediate or intermediate origin in the activities of extortion, illegal enrichment, kidnapping with extortion, rebellion or are related to trafficking in toxic, narcotic, or psychotropic drugs, or who gives appearance of legality legalizes the goods or property which come from such activities, hides, conceals, or covers up their true nature, origin, location, use, movement or the rights over such properties, or who carries out any other act to hide or to cover up their illicit origin; for this alone, shall receive a prison from six (6) to fifteen (15) years and a fine of five hundred (500) to fifty thousand (50.000) legal minimum monthly salaries.

The same penalty shall be applied when the conduct described in the previous paragraph is carried out on properties which, according to the paragraph of article 340 of the Criminal Procedure Code, have been declared of illicit origin.

First Paragraph. Asset laundering shall be punishable even when the crime from which the property or goods come from, or from those acts which are punishable in the previous sections, may have been carried out, either partially or completely, abroad.

Second Paragraph. The penalties contemplated by this article shall be increased by one-third (1/3) to one half (1/2) when, for the realization of the illegal acts, foreign exchange or foreign commerce operations are conducted, or when merchandise is introduced into Colombian territory.

Third Paragraph. The increase in the penalty contemplated by in the previous Paragraph will also be applied when merchandise is smuggled into Colombian territory.

Article 247B. Failure to Control- An employee or officer of financial institution or a savings and loan cooperative who, with the intent to conceal or to cover up the illicit origin of money, fails to comply with any or all control mechanisms established in Articles 103 and 104 of Decree 663 of 1993 for cash transactions, shall be subject for this act alone, to imprisonment for two (2) to six (6) years and a fine of one hundred (100) to ten thousand (10.000) legal minimum monthly salaries.

Article 247C. Specific aggravating circumstances: The imprisonment penalties to which article 247 A refers, shall be increased by from one-third to one-half when the conduct is carried out by a person connected with a legal entity, a corporation or an organization engaged in the laundering of assets and from one half to third-fourths when carried out the made heads, managers, or persons in charge of said legal entities, corporations or organizations.

Article 247D. Imposition of accessory penalties: If the acts contemplated in articles 247A and 247 B were carried out by the a manager of any industry, manager, employee, director or intermediary

in the financial or stock sector or insurer, as the case may be, or a public officer in the exercise of his duty, he shall be penalized, in addition to the corresponding penalty, by dismissal from his public or official job or by the prohibition of the exercise of his trade, profession or activity, industry or business, as the case may be, for a period not less nor more three (3) years nor higher than five (5).

Article 10. Literal d) of Article 369 A of the Criminal Procedure Code, shall read as follows:

d): Accusation of heads of criminal organizations, accompanied by proof of his responsibility.

Article 11. Article 37 of the Criminal Procedure Code, shall read as follows:

Article 37. Advanced judgment.- Once the resolution that defines the legal situation is executed and prior to the closing of the investigation, the defendant may apply for an advanced judgment.

Once the application is filed, the prosecutor, if he deems it necessary, may extend the investigation and the practice of evidence within a maximum period of eight (8) days. The charges presented by the prosecutor general and their acceptance by the defendant will be consigned to a document subscribed by those who may have participated.

The proceedings will be remitted to a competent judge who, within the following ten (10) working days, shall render judgment according to the facts and accepted circumstances, provided that no breach of fundamental guarantees has occurred.

The judge shall assess the corresponding penalty and for the amount which he determines he shall make a decrease of one-third (1/3) by reason of the defendant having accepted his responsibility.

Advanced judgment may also be given, when the resolution of accusation is issued and before the date for the public hearing is fixed and the defendant accepts his criminal responsibility for all the facts consigned therein. In this case, the abatement will be of one eighth (1/8) of the penalty.

Article 12. Article 37 B of the Criminal Procedure Code, shall be:

Article 37B. General provisions: For purposes of the provisions of articles 37 and 37A of this Code, there shall be applied the following regulations:

1. **Concurrence of abatements.** The penalty abatement contemplated in article 299 of this Code may be cumulative to that provided by articles 37 or 37A of this Code, but in no case can these last be cumulative among themselves.
2. **Equivalence of the resolution of the accusation.** The document containing the charges accepted by the defendant in the case of article 37 or the document containing the agreement to which article 37A refers to, are equivalent to the resolution of accusation.
3. **Break of the process unity.** In the case of several defendants or crimes, acceptances or partial agreements may be carried out, in which case the process unity will be broken.
4. **Interest for appeal.** The judgment may be appealed by the prosecutor, the Public Ministry, by the defendant and by his attorney, although the last two only in regards to the assessing of penalty, the substitution of the penalty of conditional execution and the extinguishment of property title over assets.
5. **Exclusion of the third party responsible at a civil level and of the civil party.** When the advanced judgment is issued in the events contemplated in articles 37 or 37A of this Code, in said decision that which relates to civil liability shall not be resolved.

Article 13. Article 71 of the Criminal Procedure Code will be supplemented with the following Sub-Article:

6. In the procedures for the association of concerted to commit crimes, as contemplated in sub-article 3 of article 186 of the Criminal Code, as well as procedures for the crimes contemplated in articles 247A and 247B of the Criminal Code.

Article 14. Article 340 of the Criminal Procedure Code, shall read as follows:

Article 340. Extinguishment of the right of property title.- The property title over goods acquired through illicit enrichment, in detriment of the patrimony of the national treasury or with a serious deterioration to the social morale, shall be declared extinguished by means of a judicial judgment. To this effect, the crimes contemplated in the National Narcotics Statute and the rules that modify or supplement it, as well as the crimes of kidnapping, kidnapping with extortion, extortion, asset laundering and third party property possession, crimes against the social economic order, natural resources, manufacturing and trafficking in weapons and munitions for the private use of the military forces, abuse of office bribery, influence peddling, rebellion, sedition and disturbance are considered to cause a serious deterioration of the social morale. In any case, the rights of third parties acting in good faith are safe. The goods and resources over which the extinguishment of property title is declared, without exception, shall enter the fund for Rehabilitation, Social Investment and Fight Against Organized Crime and shall be allocated by the National Narcotics Council.

Paragraph. In the investigations and the criminal processes undertaken for the crimes of extortion, kidnapping with extortion, third party property holding, asset laundering, crimes contemplated in the National Drug Control Statute and the rules that modify or complement it, illicit enrichment of public servants or of ordinary

civilians, illicit interest in contracts celebrated with the legal requirements, the illegal issuing of money or in the effects or the values estimated in cash, the illicit exercise of monopolistic activities are of profitable arbitration, theft of those effects and properties destined to security and of national defense crimes against, the assets that fall against the property of the State, undue utilization of privileged information, the utilization of matters that are submitted to secret or reserved treatment, the declaration that a piece of property or real estate is of illicit origin is independent of the criminal responsibility of the accused and to the extinguishment of the criminal action or the punishment. In these cases the extinguishment of property ownership shall conform with the provisions of Law that regulates this real action.

Save for the termination of process because of a non existent deed, the declaration of the origin of a movable asset or real property shall be made in a inhibitory resolution, in the preclusion of investigation, in the cessation proceedings or in the sentence. In the same judgment and in order to continue the process of extinguishment of property rights, the preventive garnishment and seizure of assets declared as illicit nature shall be ordered.

Article 15. Article 369 H of the Criminal Procedure Code shall be supplemented with the following paragraph:

Paragraph. Anyone who is condemned for a crime because of an conspiracy to commit a crime aggravated for promoting, directing, heading, constituting or financing the conspiracy or association, in conjunction with other crimes, may be subject to advanced judgment or special hearing and will have the rights to abatements for confession and efficient collaboration with justice, but in no case may the penalty imposed be lower than the one corresponding in full without reductions to the most serious crime.

Article 16. Sub Article 4 of Article 508 of the Criminal Procedure Code, shall read as follows:

4. In the case of prohibition of the exercise of an industry, business, trade, profession or activity, the cancellation of the document that authorizes him to practice it will be ordered and to the authority that issued it will be notified.

Article 17. Article 33 of Law 30 of 1986, shall read as follows:

Article 33. One who without the authorization of the competent authority, save for the provisions of a dose for personal use, introduces into the country, either by transit or takes out of the country, transports, carries with himself, stores, conserves, processes, sells, offers, acquires, finances or supplies in any way whatsoever, a drug that produce dependency, shall be subject to imprisonment for six (6) to twenty (20) years and a fine of one hundred (100) to fifty thousand (50.000) legal minimum monthly salaries.

If the quantity of the drug does not exceed thousand (1.000) grams of marihuana, two hundred (200) grams of hashish, one hundred (100) grams of cocaine or of cocaine derivatives, or twenty (20) grams of poppy or opium derivatives, two hundred (200) grams of methaqualone or synthetic drug, the penalty will be from one (1) to three (3) years in prison and a fine from two (2) to one hundred (100) legal minimum monthly salaries.

If the quantity of drug exceeds the maximum limits provided for in previous paragraph but it is within allowed the limits of ten thousand (10.000) grams of marihuana, three thousand (3.000) grams of hashish, two thousand (2000) grams of cocaine or of cocaine derivatives, or sixty (60) grams of poppy or opium derivatives, four thousand (4000) grams of methaqualone or synthetic drug, the penalty will be for four (4) to twelve (12) years in prison and a fine from ten (10) to one hundred (100) legal minimum monthly salaries.

Article 18. Article 34 of Law 30 of 1986, shall read:

Article 34. One who illicitly dedicates movable or real estate assets to the processing, elaboration, storage or transport, sale or uses any one of the drugs to which article 33 is refers to and/or authorizes or allow such designation of them, shall be subject to imprisonment for four (4) to twelve (12) years and a fine of one thousand (1.000) to fifty thousand (50.000) legal minimum monthly salaries, without prejudice to what is provided in articles 124 and 125 of Decree Law 522 of 1971 (article 208, sub article 5 and 214, sub article 3 of the National Police Code).

If the quantity of drug does not exceed one thousand (1.000) grams of marihuana, three hundred (300) grams of hashish, one hundred (100) grams of cocaine or of cocaine derivatives, or twenty (20) grams of poppy or opium derivatives or two hundred (200) grams of methaqualone or synthetic drug, the penalty shall be for one (1) to three (3) years of prison and a fine from two (2) to one hundred (100) legal minimum monthly salaries.

If the quantity of drug exceed the maximum limits provided for in previous paragraph but it is within allowed limits of ten thousand (10.000) grams of marihuana, three thousand (3.000) grams of hashish, two thousand (2.000) grams of cocaine or of cocaine derivates, or sixty (60) grams of poppy or opium derives, or four thousand (4.000) grams of methaqualone or synthetic drug, the penalty will be for three (3) to eight (8) years in prison and fine from ten (10) to eight hundred (800) legal minimum legal monthly salaries.

Article 19. Article 40 of Law 30 of 1986, shall read as follows:

Article 40. In the decision which establishes the imprisonment for one of the crimes established in articles 33, 34 and 43 hereof, the judicial officer shall decree the embargo and the safeguarding measures over the assets owned by the defendant which are not been

seized because of the punishable act, in an amount that he deems sufficient to guarantee the payment of the fine established in said articles and will appoint a depository. Once the embargo is decreed, seizure, its practice and the regime for its formulation, decision and procedure on opposition to same, will be carried out pursuant to the rules of the Civil Procedure Code.

In the judgment of conviction the auction of the assets seized and under embargo in the process will be ordered, for which the regulation of the Civil Procedure Code will be taken into account.

Article 20. Article 43 of Law 30 of 1986, shall read as follows:

Article 43. One who illegally introduces into the country, either in transit or takes out of it, transports, holds elements used in the processing of cocaine or of any other drug that produces dependency, such as ethylic ether, acetone, ammonia, potassium permanganate, light carbonate, chlorohidric acid, sulfuric acid, diluters, solvents or other substances, which according to prior concept of the National Drugs Council are used to this same end, shall be penalized with imprisonment for three (3) to ten (10) years and a fine of two thousand (2.000) to fifty thousand (50.000) legal minimum monthly salaries.

Except for what is provided in article 54 of Decree Law 099 of 1991, which was adopted as permanent legislation by article 1 of Decree Law 2271 of 1991, such elements, once identified by experts, will be placed by the judicial officers under the orders of the National Drug Control Directorate, which may dispose of them for immediate use by an official governmental agency, or may have them auctioned off for duly verified legal purposes, or to their destruction, if they present serious danger to health and public safety.

When the quantity of substances does not exceed three times those mentioned in resolutions issued by the National Narcotics Directorate, the penalty shall be from two (2) to five (5) years and a

fine from ten (10) to one hundred (100) legal minimum monthly salaries.

Article 21. Article 209 of the Organic Statute of the Financial System is supplemented, with the following paragraph:

Paragraph. When the violative actions to which the present article refers to are related to the provisions contemplated in Chapter XVI, Third Part of Organic Statute of the Financial System, there shall be imposed a fine of up to fifty million pesos (\$50.000.000) in favor of the National Treasury. This amount shall be readjusted in accordance with sub article 1 hereof.

This fine may be successive as long as the non compliance of the rule subsists and shall be applied without prejudice to the penalties of the case in accordance with each infraction incurred.

In addition, the Superintendent of Banking may require the immediate dismissal of the violator and shall inform all the entities under its supervision of this fact.

Article 22. Article 211 of the Organic Statute of the Financial System is supplemented, with the following sub article:

- 3. Provisions relating to the prevention of criminal conduct:**
When the infringement referred to in sub article 1 of this article refers to the provisions contained in Chapter XVI of Third Part of the Organic Statute of the Financial System, there shall be imposed a fine of up to one billion pesos (\$1.000.000.000).

In addition, the Superintendent of Banking may order the establishment fined to allocate an amount of up to one billion pesos (\$1.000.000.000) for the implementation of corrective mechanisms of an internal nature which shall conform with the same body of control.

These amounts will be readjusted in the manner established in sub article 1 of this article.

Article 23. Cooperative entities engaged in saving and loan activities. All Cooperative Entities engaged in Saving and Loan Activities of a higher level that are under the supervision of the Superintendency of Banking, shall also be subject to the provisions of articles 102 to 107 of the Organic Statute of the Financial System.

For entities not subject to the supervision of the Superintendency of Banking, the National Cooperative Entities Administrative Department –Dancoop– shall establish the limit amounts from which there exists the obligation to leave on the records as transactions in cash.

Likewise, shall regulate and obtain regular reports on the amount of transactions in cash to which article 104 of the Organic Statute of Financial System refers, as well as the monthly report on the registration of multiple transactions in cash carried out by Cooperative entities to which sub article 2 of article 103 hereof refers, that are not subject to the supervision of the Superintendency of Banking.

The obligations contained in this article shall be effective starting from the date established by the National Government.

Article 24. Literal a) of sub article 1 of Article 103 of the Organic Statute of the Financial System is hereby modified and shall read as follows:

- a) Identity, signature and address of the person who physically carries out the transaction. When the register is made by electronic form, the signature is not required.

Article 25. Article 104 of the Organic Statute of the Financial System, shall read as follows:

Article 104. Periodic Information: Each financial institution shall report periodically to the Superintendency of Banking the number of transactions in cash to which the previous Sub Article refers and its geographic location in accordance with the instructions given to that effect by the Bank.

Article 26. Effectiveness: This Law shall be in force as of the date of its promulgation and it repeals all measures to the contrary.

Especially, literals e), f) and h) of article 369 A, article 369 B and the paragraph of article 369 E of the Criminal Procedure Code, articles 10, 11, 12 and 13 of Law 104 of 1993, article 2 of Law 241 of 1995, paragraph 2 of article 28 of the Criminal Procedure Code as modified by article 31 of Law 40 of 1993 and article 41 of Law 30 of 1986 are repealed.

Repealed are also. article 44 of Law 30, 1986, article 7 of Decree 180 of 1988 adopted by permanent legislation by article 6 of Decree 2266 of 1991, article 5 of Law 40 of 1993 and paragraph 4 of article 32 of Law 40 of 1993 that modified article 355 of 1980 Criminal Code.

Paragraph. As from the effective date of this Law, the benefits for collaborating with justice as provided for in Law 81 of 1993, can only be granted under the same terms in which this Law is modified.

Whoever, at the time at which this Law comes into effect, would have requested to the competent judicial authorities the recognition of any of the benefits contemplated in other laws, provided that the circumstances for its application are available, shall remain subject to the effects and regulations of such benefits in accordance with the same rule.

To be published and executed.

Given in Santafe de Bogota, D.C., on February 21, 1997.

SCHEDULE 9

ORGANIC STATUTE OF THE COLOMBIAN FINANCIAL SECTOR

- DECREE 663 OF 1993 (ARTICLES 102
THROUGH 107)**
- EXTERNAL BULLETIN 061 (1996), BANK
SUPERINTENDENCY**
- EXTERNAL BULLETIN 052 (1993), BANK
SUPERINTENDENCY**

DECREE 663 OF 1993 (ARTICLES 102 THROUGH 107)

CHAPTER XVI

PREVENTION OF CRIMINAL ACTIVITIES

Article 102. General Regime

1. **Control requirement for criminal activities.** Entities subject to the Bank Superintendency's control and surveillance must adopt adequate and sufficient control measures, aimed to preventing that, in the due course of their business operations, they may be used as instruments for concealing, handling, or managing money or other goods originating from criminal activities, or to give an appearance of legitimacy to criminal activities or to funds related to them.
2. **Control mechanisms.** For the purposes of the above numeral, these entities will adopt mechanisms and conduct rules to be followed by their legal representatives, their directors, administrators and employees, with the following purposes:
 - a) Adequately know their clients' activities, their size, the basic characteristics of their normal transactions, and particularly of those made by any one demand, term or savings deposits, or who deliver trust funds or deposit goods in safety deposit boxes.

- b) Determine the frequency, size and characteristics of their clients' financial transactions.
- c) Determine that the volume and activity of their clients' funds bears a relation with their economic activity.
- d) Report, immediately and sufficiently, to the National General Prosecutor's Office or to the special judicial bodies which it may designate, any relevant information on handling of funds whose amounts or characteristics bear no relation with their clients' economic activity, or on transactions which, because of their number, to the amounts being transacted, or to their special nature, may reasonably lead to suspecting that they are using the entity to transfer, handle, process or invest funds or resources originating from criminal activities, and
- e) Anything else required by the Colombian Government.

3. Adopting procedures. For the purposes of implementing the control mechanisms mentioned in the previous numeral, surveilled entities will design and apply specific procedures, and will appoint officers who will be responsible for verifying the adequate fulfillment of such procedures.

Control and audit mechanisms adopted by the entities will be informed to the Bank Superintendency no later than December 30, 1992.

This entity may at any time make comments, when it should consider that the mechanisms adopted are not sufficient for fulfilling the objectives set forth in numeral 2 of this article, so that corrective measures are taken. Any amendment to the adopted mechanisms will be informed to the Bank Superintendency, in order to evaluate if it bears with above purposes.

4. Control's scope and coverage. Control and audit mechanisms mentioned in this article may refer exclusively to transactions, operations or balances whose amounts are in excess of those defined as reasonable and sufficient. Such amounts will be set through mechanisms to be adopted by each entity, making reference to the type of business, its coverage, the client selection procedures used, product marketing, operational capacity and technological level.

Article 103. Control of cash transactions.

1. Transactions subject to control. Every financial institution will keep records, using specially designed forms, of all information regarding local or foreign currency cash transactions made for amounts in excess of those periodically set by the Bank Superintendency.

These forms will include at least the following:

- a) Identification information, signature and address of the person physically making the transaction.
- b) Identification information and address of the person in the name of which the transaction is being made.
- c) Identification of the transaction's beneficiary or the recipient, should there be one.
- d) Identity of the account affected by the transaction, should there be one.
- e) Type of transaction (deposit, withdrawal, cashing of checks or certificates, cashier's checks or money orders, transfers, etc.).

- f) Identification of the financial institution where the transaction took place, and
- g) The date, place, time and amount of the transaction.

Multiple transactions in cash, both in legal tender and in foreign currency, which as a whole exceed a certain amount, will be considered as a single transaction, should they be made by or on behalf of a certain person during the same day, or during any other period as specified by the Bank Superintendency.

Transactions made between financial institutions subject to control and surveillance will not require of special registration.

2. Control of multiple cash transactions. Whenever a client's normal course of business require of multiple cash transactions, the respective financial entity will keep a record of said cash transactions in lieu of the individual form mentioned in the previous numeral, and will record, at least, all information which should be included in said form, except for that indicated in numeral 1 of paragraph a) of this document. Financial entities deciding on keeping such records will report to the Bank Superintendency, on a monthly basis, the names of the clients being subject to this procedure.

Article 104. Periodic information. Every financial institution will periodically inform the Bank Superintendency of the number of cash transactions referred to in the previous numeral, and of their geographical location, as per instructions given by this institution.

Article 105. Confidentiality of information reported. Without prejudice to the obligation of immediately and sufficiently reporting to the General Attorney's Office, or to the special judicial police bodies designated by it, all information referred to in paragraph d) from numeral 2 of article 102, financial institutions will only be

obliged to submit the information obtained from the mechanisms indicated in the above articles whenever so requested by the General Attorney's Office's regional directors, who may be able to request it during preliminary hearings or during the instruction phase, directly or through entities acting as judicial police, exclusively for investigative purposes of crimes under their jurisdiction (2400).

Authorities coming in possession of information and documents referred to in the above articles will keep them in strict confidentiality.

The entities and their employees will not inform persons who have conducted, or who intend to conduct, suspicious operations, that they have informed the General Attorney's Office of such fact, and will keep said information in confidentiality.

Article 106. Modification to control norms. In order to guarantee compliance of the obligations set forth in numeral 1 from article 102, and numeral 1 from article 103 of this statute, the Colombian Government may modify this chapter's regulations with regards to requirements and procedures to be adopted by entities surveilled by the Bank Superintendency (2400, 2420).

Article 107. Sanctions. Non fulfillment of that set forth in the previous articles on account of failure to adopt or implement control mechanisms will give way to imposing the respective administrative sanctions, without prejudice to any other applicable legal action.

CONTROL AND PREVENTION MECHANISMS FOR CRIMINAL ACTIVITIES, AND TRANSACTION REPORTS

External Bulletin 61/96, Bank Superintendency.

6. Asset laundering control and prevention mechanisms

6.1 Responsibilities of surveilled entities. All surveilled entities must implement an integral system for the prevention of money laundering. (SIPLA).

This integral system must include adequate and sufficient control measures, aimed to prevent that in any cash, document, financial services, or in other transactions, they may be used as instruments for concealing, handling, investment or processing, in any way, of money or other goods originating from criminal activities, or in order to give said transactions and any related funds an appearance of legitimacy.

6.2 Considerations for the adequate fulfillment of this regulation. Surveilled entities, their legal representatives, their directors, administrators, employees and comptrollers will take into account, among others, the following considerations:

- It is required to implement control measures for the prevention of criminal activities, not only with respect to legal tender or foreign currency cash transactions, but also with respect to document transactions and to all kinds of financial services, including those offered by the insurance system.
- Illicit assets are those which originate from any criminal activity, such as kidnapping, extortion, car theft, land piracy, bank heists or drug dealings.

- It is the duty of the surveilled entities to cooperate with justice administration, not only responding to specific requirements, but also actively helping in the fight against crime.
- Bank secrecy does not oppose information requests specifically made by the authorities during investigations which are their responsibility, according to article 15 from the Colombian Constitution, articles 63 from the Commerce Code, 275 from the Criminal Procedure Code, and 288 from the Civil Procedure Code.
- It is necessary to contribute with the strengthening of the economy's payment system and of the public's trust in the financial and insurance sectors, watching over their transactions' security and trustworthiness.
- Strict and timely fulfillment of all legal norms oriented towards preventing and detecting asset laundering must be guaranteed, specifically those set forth in articles 105 through 105 of the Financial System's Organic Statute, in order to protect the national and international Colombian financial and insurance system's image.

6.3 Control mechanisms

6.3.1 Client and market knowledge. Knowing the client and market allow an entity to protect itself against asset laundering throughout all of its operations.

Client concept. Clients of a surveilled entity are those natural or legal persons with whom a contractual financial relation is established and/or maintained.

Client knowledge. Depending on the natural characteristics of the various services or products offered, each entity will design and implement control mechanisms which will allow it to have an

adequate client knowledge, to properly identify them, and to determine their economic activity and financial profile.

Client knowledge must begin with filling in the required forms and complying with the entity's requirements for each product being offered. It is necessary that the entity must conduct an investigation using the best suited methods for personal and relevant information.

Once gathered, this information will be verified, will have the necessary support, and will be updated regularly.

Client knowledge policies involve fulfillment of specific requirements contained in general norms for the access of all products and services, particularly those issued by Banco de la República, regulating exchange aspects.

Market knowledge. Each entity will design and implement control mechanisms which will allow it to have an adequate knowledge of each offered product or service's market, in order to determine those characteristics which are typical to transactions normally carried out, thus ensuring that they are compatible with those made by their clients.

6.3.2 Operation control

- a) **Market segmentation.** In order to have an adequate control of all operations carried out, supervised entities will apply segmentation parameters, or any other efficiency instrument, by risk level, by product type, or any other applicable criteria which will allow them to properly identify unusual operations.

Adequate segmentation should allow the entity to determine the range of payment normally used for their client's operations and the market's characteristics.

- b) **Consolidation of operations on a per-client basis.** In order to properly identify unusual operations, it is necessary to consolidate on a monthly basis all of each client's operations. Credit and debit operations should not be added together.
- c) **Warning signs.** In order to help in the detection of unusual operations, each entity will define, in their internal procedure code, a list of warning signs in its procedures.

These warning signs will take into consideration each entity's specific nature, the various types of products and services offered, the risk levels, and any other criteria which may be applicable.

- d) **Technological development.** In order to aid them in the detection of unusual operations, surveilled entities will implement technological levels which will ensure the greatest coverage and reach of their control mechanisms.

The technological level thus implemented by the surveilled entities should allow them to fully cover all operations carried out in all of their branch offices, so that each client's transaction information may be consolidated.

6.3.3 Detection of unusual operations and identification of suspicious operations.

- a) **Concept.** Unusual operations are those involving amounts which have no relation with the client's economic activity, or those which, due to their number, the amounts transacted, or their individual characteristics, do not follow parameters set forth for a particular market niche (range).
- b) **Detection of unusual operations.** A client operation's basic profile should be framed within the market segment corresponding to his own specific transactions, so that,

through the aid of adequate technology, any unusual operation will stand out and be detected, based on predefined warning signals and on the entity's prudent criteria.

Market segmentation and knowledge, according with the entity's guidelines set and identification of any transaction deviating from these parameters, supported by an adequate technological level, also help in identifying unusual operations.

- c) **Identification of suspicious operations.** Checking of unusual operations against client and market information should allow, together with a sound judgment, to identify whether or not an operation is to be considered suspicious.

6.3.4 Control of cash operations.

- a) **Amount for transactions subject to individual registration.** As per article 103 of the Financial System's Organic Statute, as of the date of this Bulletin all financial institutions will keep records, in forms specially designed for this purpose, of all information regarding cash transactions exceeding the following amounts:
- Financial Institutions: ten million pesos (\$10,000,000) should it be in legal tender, or ten thousand US dollars (US \$10,000), or its equivalent in other currencies, converted at the exchange rate applicable on the day in which the transaction is made, as set forth by Banco de la República.
 - Currency exchange houses: three thousand US dollars (US \$3,000) for drafts, and five thousand US dollars (US \$5,000) for purchase and sale operations.
 - Border currency exchange houses: the equivalent to two thousand US dollars (US \$2,000) in the neighboring country's currency.

These figures will be annually updated by the Bank Superintendency.

b) Identification of multiple transactions as single transactions.

Those transactions made in one or several branch offices during the same calendar month, by or on behalf of the same person, which when added exceed the following amounts, will be considered as single transactions:

- Financial institutions: fifty million pesos (\$50,000,000), or fifty thousand US dollars (US \$50,000), or its equivalent in other currencies.
- Exchange houses: ten thousand US dollars (US \$10,000).
- Border exchange houses: the equivalent to two thousand US dollars (US \$2,000) in the neighboring country's currency.

These multiple transactions must be included in the consolidated cash operations reports sent quarterly to the Bank Superintendency by the financial entities.

c) Information's internal organization. Financial institutions and exchange houses of any kind are under the obligation to keep, duly and chronologically organized, and available to all authorities, the forms indicated in numeral 1 from article 103 of the Financial System's Organic Statute.

The information contained in these forms will be internally sorted in alphabetical order, or by identification number, in a centralized fashion, so that it will respond to the authorities' requirements and may be used efficiently in the detection of unusual or suspicious operations.

- d) **Clients excepted from individual registration.** Clients for which the legitimacy of their business has been established, and which during the normal course of their business make multiple cash transactions, may be excluded from the requirement of filling out individual forms.

A special record will be kept in such instances, containing the specific characteristics and the business volumes of such clients, and including the reasons for having been exonerated from said requirement.

Financial entities will include in their procedures the general requirements which these clients must fulfill.

This exception system will be based on a strict client knowledge.

- 6.3.5 Training.** Surveilled entities are under obligation to develop training programs for all of their employees, looking to training them on the fulfillment of the existing norms with regards to prevention of asset laundering, and specifically to make them familiar with the control mechanisms developed by the entity, as well as with their application and fulfillment.

The entity will permanently update and amend these training programs, in following its internal requirements and applicable laws.

6.4 Reports

- 6.4.1 Regarding cash transactions.** Control of cash transactions should allow the entity to detect unusual operations, in addition to being a statistical support giving the Bank

Superintendency an additional element for the determination of its surveillance policies.

The consolidated report of cash transactions sent to the Bank Superintendency does not excuse the financial entity, nor the exchange houses, from detecting unusual or suspicious cash operations, or from reporting them to the General Prosecutor's Office.

- a) **Consolidated report to the Bank Superintendency.** All financial institutions and exchange houses of any kind will submit a quarterly global report on the number of cash transactions to the special unit for prevention of asset laundering, filling out proforma F.0000-11 as per instructions included in page 273 of Schedule 1 from Bulletin 100 of 1995.
- b) **Clients exempted from individual registration of cash transactions.** As per numeral 2 from article 103 of the Financial Institution's Organic Statue, financial institutions and exchange houses must report, monthly, to the Bank Superintendency the names of all clients exempted from filling the cash transactions form.

This information will be submitted to the Bank Superintendency as per instructions given in page 273 from Schedule 1 of Bulletin 100 of 1995.

6.4.2 Reporting suspicious transactions to the General Prosecutor's Office.

- a) **General issues.** Once it has been determined that an operation is suspicious, the procedure set forth in the procedures manual will be followed, making the respective report to the General Prosecutor's Office.

For the purposes of this report, it will not be required that the surveilled entity be certain that it is dealing with a criminal activity, or that the funds originate from such activities, nor does it have to identify the type of crime. The only requirement is that the entity has reason to believe that the operation is suspicious.

Considering that the report to the General Prosecutor's Office does not constitute a criminal suit, it will not have to be signed by any of the entity's officers.

- b) **Report contents.** The report of suspicious transactions will be submitted to the General Prosecutor's Office through a special form, as per instructions given in Bulletin 100 (Schedule II, page 38), using the form shown in page 39 of that Schedule.

Original supporting documents will be safely filed, so that the may be made available to said Office upon request.

- c) **Report of operations rejected by the entity.** In those instances in which, according with the law, the entity abstains from making any particular transaction which it considers to be suspicious, it will still be responsible for reporting it to the General Prosecutor's Office, as per instructions given in this Bulletin, and in order to contribute to the financial sector's protection.

6.5 Code of conduct. The "rules of conduct" referred to in numeral 2 of article 105 from the Financial Institution's Organic Statue must be included in a mandatory code of conduct, and its rules should be observed for all acts, by conviction and as a demonstration of the will to exert preventive measures.

The code of conduct will contain all criteria which may be required to resolve any "conflicts of interest", and which will place ethical

principles before commercial goals, through the entire entity's commitment.

Without prejudice to any sanctions which may be applied by the Bank Superintendency, entities will impose sanctions, as required, by failures to comply with the code of conduct.

It is the Board of Directors's responsibility to adopt the code of conduct, to publicize it and make it known, and to timely approve any pertinent updates.

6.6 Procedures manual

6.6.1 General. The control mechanisms adopted by the surveilled entity will be written down into a specific procedures manual, approved by the Board of Directors, and which will take into account the entity's specific legal nature and characteristics, as well as those of its products. It will include a list of clear orders, in development of the entity's institutional policy against asset laundering.

6.6.2 Basic contents. All of the aspects mentioned in this Bulletin will be included in this manual. The following will also be included:

- Coordinated control policies and communication channels between the head offices and the branch offices and agencies.
- Procedures to control compliance with the manual's norms.
- Report and inquiry procedures for entity employees with regards to their preventive activities against asset laundering.
- Development of all other elements which the entity may have available to protect itself against asset laundering, such as internal

training programs, functions and level of the enforcing officers, functions of the auditing and the comptroller departments, responsibilities of each employee in the internal detection and report of unusual and suspicious operations, sanctions and corrective measures for not complying with procedures, and record keeping.

- All those which the surveilled entity may consider necessary.

6.6.3 Updating. Procedures manuals will be permanently updated, consistent with the entity's needs. Any amendment to the adopted mechanisms will be reported to the Bank Superintendency.

The Bank Superintendency's failure to comment on the contents of said manuals will not be construed as a tacit approval of their contents.

6.7 Control mechanisms audit

6.7.1 Enforcing officer

- a) **Concept.** According to numeral 3 from article 102 of the Financial Institution's Organic Statute, surveilled entities are responsible for appointing an enforcing officer.

This officer will be appointed by the Board of Directors, will be a high echelon employee, will have decision power, will be supported by a technical team allowing him to cover the various operational areas, and will have the support of the entity's management.

Additionally, the Bank Superintendency will be able to make comments whenever it considers that the position and its level of responsibility may be inadequate for properly carrying out the respective obligations.

- b) **Role.** The role of the enforcing officer, according with the Financial Institution's Organic Statute, is to verify proper observance of all of the specific procedures designed by the institution for the purpose of preventing asset laundering.

This officer will also report to his superior officers any possible faults that may compromise the employees' responsibility.

Specifically, he will watch over all aspects contained in this Bulletin, in the law, and over all those indicated by the entity's management.

Appointing an enforcing officer will not exonerate the entity, nor the other officers, from their obligation to internally detect and report unusual operations, to identify suspicious transactions, and to make necessary arrangements to have this situation reported to the General Prosecutor's Office.

The enforcing officer will submit reports to the Board of Directors on the effectiveness of the adopted mechanisms.

Surveilled entities will report to the Bank Superintendency's unit specializing in asset laundering prevention the name, identification number and position of the employee appointed as enforcement officer.

- 6.7.2 Internal auditing.** The design and implementation of control mechanisms is the responsibility of each entity's own administration.

Application of these mechanisms will be evaluated by internal auditing, based on generally accepted auditing norms.

- 6.7.3 Comptroller.** According to numeral 3 from article 207 of the Commerce Code, and with numeral 4, chapter III, title

one of this Bulletin, it is the comptroller's duty to watch over observance of the law and to cooperate with the authorities.

Consequently, he will manage the controls which will allow him to detect failures in complying with the instructions given in the Financial Institution's Organic Statute for asset laundering prevention and in this Bulletin, reporting them to the Board of Directors.

- 6.8 Document keeping.** In order to guarantee the greatest degree of cooperation with the authorities, the entities will keep documents related with asset laundering prevention issues for a period of no less than ten (10) years.

This norm is also applicable to merger cases.

6.9 Term

- 6.9.1 Consolidated report of cash transactions to the Bank Superintendency.** Surveilled entities will deliver the information referred to in paragraph a) from numeral 6.4.1 of this chapter to the special unit for the prevention of asset laundering within the first twenty (20) days of January, April, July and October of each year.

- 6.9.2 Clients who are exempted from filling out the cash transaction form.** Within the first ten (10) calendar days of each month immediately after this Bulletin comes into force, a list of all clients having been exonerated (paragraph b), numeral 6.4.1 of this chapter) from filling out the form will be submitted to the special unit for the prevention of asset laundering.

The special unit for the prevention of asset laundering will be updated, during the first working days of each month,

with the names of new clients having been exempted, and of those no longer being exempted on the previous month.

Once client selection criteria has been determined and included in the procedures manual, all clients will comply with the requirements set forth therein.

6.9.3 Reporting suspicious transactions to the General Prosecutor's Office. The report of suspicious transactions detected during each calendar month will be delivered to the General Prosecutor's Office within the following calendar month, in a consolidated form.

In case that the surveilled entity does not detect any suspicious transactions, it will also report this fact to the General Prosecutor's Office within this same period.

Control mechanisms implemented by the entity should allow it to detect unusual operations within the following fifteen (15) days after their occurrence.

6.9.4 Reports on updates of procedures manuals. All entities will submit to the special unit for the prevention of asset laundering, within the two months following the coming into force of this Bulletin, a letter stating the number and date of the Board of Directors' meeting during which the update to the procedures manual has been approved, as set forth in this Bulletin.

Entities created after this Bulletin has come into force will report the number and date of the Board of Directors' meeting during which the procedures manual was adopted.

Reports on subsequent updates of these manuals will be submitted to the Bank Superintendency within the following fifteen (15) days of said updates.

The manuals will remain available with each entity for the Bank Superintendency's perusal.

6.10 Insecure practice. The Bank Superintendency will be able to label as "insecure practice" those operations conducted with financial entities, local or foreign, which do not adequately protect themselves against assets laundering (2400, 2420, 2429).

NOTE: According with the contents, depth and update of the issues considered in the Bulletin, it is believed that it tacitly annuls External Bulletin 75 of 1992 from this same entity.

REPORTS OF CASH TRANSACTIONS FROM FINANCIAL SERVICE COMPANIES

(2431) External Bulletin 052/93, Bank Superintendency.

Taking into consideration the special nature of the operations carried out by financial service companies, it is considered necessary to make some adjustments, with regards to them, to numeral 4 from External Bulletin 075 of 1992. As such, the following instructions are given:

1. Information on cash transactions for amounts and under the circumstances indicated in Bulletins 075 of 1992, and 015 and 019 of 1993, will be submitted by financial service companies whenever they take place, that is, whenever it has been verified that deposits, payments or investments have been received or made, or that any other type of cash operation has taken place, in legal tender, for an amount in excess of seven million five hundred thousand pesos (\$7,500,000), or in foreign currency for an amount exceeding ten thousand US dollars (US \$10,000), as set forth in the mentioned Bulletins.

It should be noted that whenever such operations are handled through a credit institution's network of branch offices, it will be the contracting financial service company's responsibility to send the respective information on cash transactions.

2. In case that no cash transactions have taken place, the respective entity will not have to file a report. As such, it will be assumed that non submittal of a report means absence of cash transactions. In any case, the surveilled entity and its administrators will be responsible for any omission in the timely report, should there be any information to be reported as per current regulations.

ASOBANCARIA MEMBERS

BANKS

- BANCAFE
- BANCO ANDINO
- BANCO ANGLO COLOMBIANO
- BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, BCH
- BANCOLDEX
- BANCO COLPATRIA
- BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO, BANCOQUIA
- BANCO COOPERATIVO DE COLOMBIA, BANCOOP
- BANCO DE BOGOTA
- BANCO DE BOSTON
- BANCO DE COLOMBIA
- BANCO DE CREDITO
- BANCO DE OCCIDENTE
- BANCO DEL ESTADO
- BANCO DEL PACIFICO
- BANCO DE LA REPUBLICA
- BANCO EXTEBANDES
- BANCO GANADERO

GENERAL WAREHOUSE DEPOSITS

- ALCALDAS
- ALMABIC
- ALMACENAR
- ALMADELCO
- ALMAGRAN
- ALMAGRARIO
- ALMAVIVA
- ALOCCIDENTE
- ALPOPULAR

FINANCIAL CORPORATIONS (INVESTMENT

BANKING)

- CORFES S.A.
- CORFIBOYACA
- CORFICALDAS
- CORFICOLOMBIANA
- CORFICUNDINAMARCA
- CORFIDESARROLLO
- COFINORTE
- CORFINSURA
- CORFIOCCIDENTE
- CORFISANTANDER
- CORFIVALLE
- IFI
- INDUFINANCIERA S.A.
- ING CORPORACION FINANCIERA
- LATINCORP
- PROGRESO

- BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO, BIC
- BANCO INTERCONTINENTAL, INTERBANCO
- BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA
- BANCO NACIONAL DEL COMERCIO
- BANCO POPULAR
- BANCO REAL DE COLOMBIA
- BANCO SELFIN
- BANCO SUDAMERIS DE COLOMBIA
- BANCO SUPERIOR
- BANCO TEQUENDAMA
- BANCO UCONAL
- BANCO UNION COLOMBIANO
- BANK OF AMERICA
- CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO
- CAJA SOCIAL
- CITIBANK DE COLOMBIA
- COOPDESARROLLO

TRUST COMPANIE S

- FIDUCIARIA ALIANZA S.A.
- FIDUCIARIA BNC S.A.
- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
- FIDUCIARIA TEQUENDAMA S.A.

PENSION FUND MANAGEMENT

COMPANIES

- HORIZONTE

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS

- AHORRAMAS
- COLMENA
- UPAC COLPATRIA
- CONAVI
- CONCASA
- DAVIVIENDA
- GRANAHORRAR
- LAS VILLAS